

***“Aplicación de los Métodos Alternos de Solución de
Conflictos en el Manejo de Conflictos Socioambientales en la
actividad Petrolera en el Ecuador”***

Sebastián Meneses Pérez

2006

Índice

Introducción	i
<i>Capítulo I</i>	
1. La Teoría del Conflicto	1
1.1. Conceptos	1
1.1.1 Causas y Características de los Conflictos Socioambientales	5
1.1.2 Tipos y Escalamiento del Conflicto	6
1.2 Los Conflictos Socioambientales	10
1.2.1 Conceptos, Características, Tipos y Actores de Conflictos Socioambientales	11
1.2.2 Elementos anexos a los Conflictos Socioambientales	17
1.2.2.1 Género y Conflictos Socioambientales	17
1.2.2.2 Políticas Públicas y Conflictos Socioambientales	19
1.2.2.3 Comunidades y Conflictos Socioambientales	26
1.2.2.4 Gobiernos Locales y Conflictos Socioambientales	28
1.2.2.5 Desarrollo, Recursos Naturales y Conflictos Socioambientales	30
1.2.3 Manejo de Conflictos Socioambientales	36
1.3 Aspectos Históricos de los Conflictos Socioambientales por la actividad petrolera en el Ecuador	39
1.3.1 Marco Jurídico Ecuatoriano frente a los Conflictos Socioambientales en la actividad Petrolera	48
<i>Capítulo II</i>	
2. La Resolución de Conflictos	55
2.1 Modos de Resolución de Conflictos	57
2.2. Métodos Alternos de Solución de Conflictos	61
2.2.1 Arbitraje	70
2.2.2 Mediación	82
2.2.3 Negociación	95

2.2.4 Conciliación	104
2.2.5 Facilitación	107
2.3 Otras metodologías para el manejo de Conflictos	111
<i>Capítulo III</i>	
3. Experiencias en el Ecuador de Conflictos Socioambientales en la actividad Petroleros. Estudio de Casos	122
3.1. CASO: “Caso: BLOQUE 24”	124
3.2 CASO: “Caso: TEXACO”	131
3.3 CASO: “Caso Sarayaku / CGC”	139
<i>Capítulo IV</i>	
4. La aplicación teórica en casos reales de conflictos socioambientales en la actividad petrolera en el Ecuador	152
4.1 CASO: “Caso: BLOQUE 24”	153
4.2 CASO: “Caso: TEXACO”	165
4.3 CASO: “Caso: Sarayaku / CGC”	177
<i>Capítulo V</i>	
5. Propuesta metodológica para el manejo de conflictos socioambientales en la actividad petrolera en Ecuador	192
5.1 Sistematización de propuesta metodológica	197
Conclusiones	201
Recomendaciones	205

Introducción

Desde hace algunos años se menciona que la conflictividad socioambiental en nuestro país ha sufrido un crecimiento notable, conflictividad que resulta cotidiana por los hechos que día a día se exteriorizan a través de los medios de comunicación y que la sociedad entera asume desde su propio punto de vista estableciendo una posición para aprobar o desaprobar estos acontecimientos.

Los conflictos socioambientales que tienen un mayor impacto en el contexto nacional son aquellos producidos por la actividad petrolera, algo evidente si tomamos en cuenta que esta actividad productiva se ha desarrollado por más de cincuenta años en el Ecuador y con mayor fuerza en la amazonía, región que ha sufrido impactos en temas ambientales, económicos, sociales, políticos, entre otros, los cuales son muy difíciles de juzgar cuan positivos o negativos han resultado para aquellas personas o grupos que se encuentran involucrados ya que esto dependerá del punto de vista del que se los enfoque.

Es notable ver que frente a este tipo de conflictos existe una marcada falta de acuerdos entre lo que significa desarrollo a través de la explotación de un recurso no renovable con los daños causados al medio ambiente, traducido esto a un interés público en el cual la discusión se mantiene sobre si el desarrollo está por encima de la conservación o viceversa.

Los conflictos socioambientales por la exploración y explotación petrolera han tenido una repercusión importante sobre los grupos humanos, especialmente las comunidades indígenas, que se asientan dentro o cerca de un bloque petrolero, ya que por lo general son los más afectados por esta actividad, por la destrucción de sus recursos naturales, por las afecciones a su salud, la intervención en su cultura, etc., lo cual marca un evidente deterioro social, y que son los menos beneficiados por los réditos económicos fruto de la venta del petróleo.

La asimetría en las relaciones de poder han determinado que las comunidades indígenas se conviertan en las últimas en ser tomadas en cuenta, ya que no existe una política pública que pueda controlar la actividad de una forma integral, es decir que las compañías petroleras y el Estado tienen las de ganar, mientras que los más afectados no se encuentran en la posibilidad de hacer prevalecer sus derechos justa y legalmente reconocidos por la legislación ecuatoriana y que solo se los toma en cuenta en el momento de solicitar un derecho de vía o la aprobación para realizar trabajos en sus territorios recibiendo a cambio a través de una “resolución de conflictos”, “compensaciones” sacrificando su patrimonio.

Toda esta problemática refleja la necesidad de conseguir procesos de intervención en esos conflictos que cumplan con las expectativas de todo el conglomerado social que se encuentra alrededor de la actividad petrolera; existen casos en los que ya se ha trabajado con el objetivo de solucionar esos conflictos, existen personas que dedican sus esfuerzos para lograr el respeto por parte del Estado y la compañías petroleras frente a los temas sociales y ambientales. Pero tomando en cuenta la complejidad y la cantidad de conflictos es importante visualizar la necesidad de darles un mejor tratamiento.

La existencia de formas de resolver estos pugnas también son discutidas, ya que no podríamos definir que existe una receta exacta que solucione estos problemas sino que tienden a variar dependiendo del conflicto, sin embargo hay que mencionar que el tipo de problemática al cual nos enfrentamos requiere mayor atención por parte de todos los actores involucrados con la finalidad de encontrar una mejor salida para el manejo de conflictos producidos por la actividad petrolera en el Ecuador.

Dentro de este contexto encontramos casos relevantes de conflictos socioambientales en la actividad petrolera como el caso TEXACO, el caso de la FIPSE y la ARCO, el de Sarayaku y la CGC, entre otros, los mismos que se constituyen en buenos ejemplos de análisis para visualizar como se desarrollan estos conflictos y cual es el manejo que se les debe dar a los mismos.

Al hablar de conflictos debemos tener una regencia clara de lo que estos significan, ya que sin duda su concepto, sus características, tipología etc., y como estos se vincula a una realidad innegable, debemos afrontarlos buscando constantemente la mejor forma de resolverlos.

En este punto, al buscar solucionar conflictos es que aparecen una serie de herramientas conocidas como Métodos Alternativos de Solución de Conflictos entre los que encontramos al Arbitraje, Mediación, Negociación, Facilitación, Conciliación, entre otros, y como estos se involucran y aportan al tratamiento de los conflictos en una situación tan compleja como la actividad petrolera.

Con estas circunstancias que se viven en el Ecuador en torno a estos temas no cabe duda que analizar las distintas vinculaciones entre la teoría y la práctica en la realidad de los conflictos socioambientales en la actividad petrolera, su manejo, sus características especiales, sus actores, los modos de resolverlos, además de contribuir y aportar con elementos y propuestas que colaboren a intervenir en estos conflictos constituye un reto y una motivación al encontrarnos ante una situación real, concreta y muy compleja.

Capítulo I

1. La Teoría del Conflicto

Para iniciar un análisis teórico del conflicto, es importante tomar en cuenta como premisa que el ser humano por su naturaleza es proclive a provocar, involucrarse, afectar y verse afectado por conflictos, los mismos que pueden ser de distintas categorías y con diferentes implicaciones, siempre dependiendo del contexto en el cual se desarrolle el sujeto.

La cotidianidad nos ha demostrado que todos tenemos conflictos, sin embargo esto no implica que debemos huirles o tenerles miedo, pero si se requiere tener la objetividad suficiente para visualizarlos y enfrentarlos ya que de otra manera caeríamos en un pozo del cual no podríamos salir. El común de la personas no se ha preparado académicamente para enfrentarlos pero por sentido natural de sobre - vivencia, los resuelven.

A pesar de esto hay ciertos conflictos que si requieren de una mayor preparación, esto debido a su complejidad y una serie de factores que implican contar con mayores herramientas que faciliten su gestión, como es el manejo de conflictos socioambientales en la actividad petrolera que veremos posteriormente.

Dentro de este análisis teórico debemos considerar aspectos conceptuales, clasificaciones, niveles de conflicto, escalamiento, así como elementos relacionados con la diversidad de posiciones e intereses y necesidades, alrededor del tema de los conflictos y su contexto.

1.1. Conceptos

Al buscar incorporar a este trabajo de investigación un concepto de *Conflicto*, se han encontrado un sin número de criterios ya que dependiendo de la materia desde la cual se lo enfoque, existirán algunas variaciones, que son más o menos válidas y

simplemente pueden complementarse o apoyarse para brindar mayor claridad en el tema.

El tratar de definir y enmarcar al conflicto, desde un aspecto conceptual, implica tener la suficiente capacidad para comprenderlo desde todos sus puntos de vista y sin dejar de considerar elementos sustanciales.

Un concepto básico de conflicto es la oposición de intereses en la que las partes no ceden al choque o colisión de derechos o pretensiones¹, sin embargo un concepto más completo es el dado por Boulding al mencionar “Es una forma de interacción social que ocurre cuando dos o más personas compiten sobre objetivos percibidos como incompatibles o realmente incompatibles”.

Vemos claramente en el caso del concepto de Cabanellas que ha sido estructurado por un significado etimológico, ya que conflicto viene del latín *conflictus*, que significa “colisión” o “choque”, en el cual evidentemente intervienen dos o más partes y donde los intereses o posiciones se traducen para el tratadista en derechos o pretensiones.

Boulding a diferencia de Cabanellas, sin desmerecer el concepto de este, hace una mención específica de ciertos elementos que pueden ser evidentes pero que es necesarios anotarlos, como son la intervención de las partes en una interacción social, la contraposición de intereses, siendo uno de los elementos más importantes el tema de las percepciones que pueden presentarse como reales o percibidas.

Debemos tomar en consideración otros criterios que amplían la concepción del conflicto dentro de la problemática social, ya que como comentamos anteriormente el conflicto es inherente al ser humano, una realidad de la cual difícilmente podemos salir, que se ha dado a lo largo de la historia y que se seguirá presentado mientras el ser humano mantenga su condición como tal.

¹ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bogotá-Colombia, 1998, Pág. 85.

De tal manera que no podemos seguir tomando al conflicto como una disfunción social como lo mencionan los funcionalistas y positivistas², es decir, que no se debe considerar a los conflictos como algo que no debe ocurrir en la sociedad, ya que es inevitable su presencia, siendo en algunas ocasiones causantes de grandes perjuicios, pero que sin embargo siendo estos bien manejados pueden convertirse en un mecanismo de cambio social trascendental.

Para Gluckman el conflicto se refiere a las tensiones que se desatan en las entrañas o el corazón mismo del sistema social, tensiones que se traducen en una oposición provocada por la misma estructura organizacional de los grupos sociales³. Existen tendencias y argumentos que se proyectan en base a que los conflictos en la interacción social se dan por el uso de la fuerza como así lo mencionan Weber y Coser, siendo otra concepción, de que los conflictos se dan en base al ejercicio del poder, de acuerdo a Marx⁴.

La discusión sobre estos elementos sociales del conflicto no es ajeno, podríamos decir inclusive que dependerá del conflicto para que estos elementos confluyan. Hemos visto a lo largo de la historia que conflictos como las guerras se han producido por el uso de la fuerza o el ejercicio del poder, esto debido a una constante relación asimétrica entre los actores que intervienen en un conflicto.

Dentro de los elementos que se involucran en el concepto de conflicto podemos encontrar a las posiciones, intereses y necesidades, las cuales han sido traducidas a los contextos de los conflictos muy acertadamente por Pablo Ortiz quien menciona:

“Las posiciones son una exposición de una postura en el intento de describir como perciben su situación las partes involucradas en un conflicto, que por lo general tienden a ocultar las causas reales del conflicto ya que se la maneja como un aspecto

² GUERRERO ARIAS, Patrcio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 35

³ GLUCKMAN, Max, “Política, derecho y ritual en la sociedad tribal”, Akal Editores, Madrid-España, 1978. Pág. 138

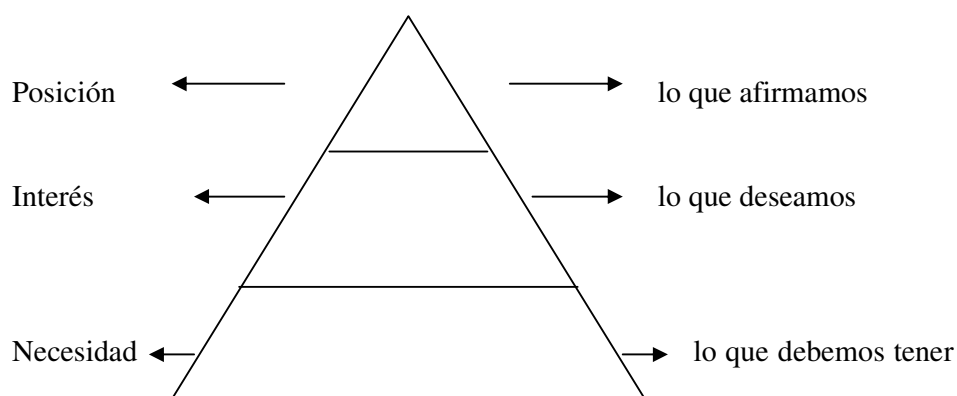
⁴ COLOMBRES, Adolfo, “La hora del Bárbaro”, Ediciones del Sol, Buenos Aires-Argentina, 1991. Pág. 284.

que no se presta para discusión y que en el momento que se la cambia es reemplazada por otra posición, que como consecuencia tapa lo que realmente esta en juego dentro del conflicto”⁵.

En el caso de los intereses se puede mencionar que estos están detrás de las posiciones y se convierten en lo que las partes involucradas dentro de un conflicto están tratando de conseguir tanto del conflicto como de la otra parte.

Al hablar de las necesidades hay que comprender que estas son inherentes a los seres humanos, que se reflejan cotidianamente y que deben satisfacerse; entendiendo que dentro de los conflictos sociales las necesidades por una parte se traducen a los que una persona debe satisfacer mientras que por otra parte las necesidades pueden potenciar a las personas al punto de convertirse en un recurso que comprometen, motivan y movilizan a las partes involucradas en un conflicto.

Para un entendimiento práctico de estos elementos del PIN (posiciones, intereses y necesidades) dentro de los conflictos se los ha plasmado gráficamente a través de un triángulo que refleja tanto su importancia como su significado dentro de los conflictos⁶.



⁵ ORTIZ, Pablo, “Guía Metodológica para la gestión participativa de los conflictos socioambientales” Págs. 47, 48, 49

⁶ ORTIZ, Pablo, “Guía Metodológica para la gestión participativa de los conflictos socioambientales” Págs. 47

Después de observar esta serie de conceptos y de elementos del conflicto podemos concluir que un conflicto es: *“Es una contraposición y confrontación de posiciones, intereses y necesidades percibidas como incompatibles o realmente incompatibles que involucra a dos o más actores dentro de su interacción social”*, esta definición la tendremos presente y la utilizaremos a lo largo de esta investigación.

1.1.1 Causas y Características del Conflicto

De la breve referencia teórica que hemos citado anteriormente, podemos deducir la existencia de ciertas causas y características que hacen que el “conflicto” se transforme en un elemento puramente trascendental en la interacción social, contextualizado en las necesidades, posiciones e intereses del ser humano sea para exigir sus derechos o acceder a ciertos recursos.

Es entonces que las causas de un conflicto se asocian a procesos, estructuras u ordenes de tipo: económico, cultural, político, social, religioso, ambiental, entre otros, que de una u otra forma influyen o inciden para desatar un conflicto y que pueden presentarse (las causas) de forma individual o conjunta, es decir, que en un conflicto puede tener una causa política mientras que otros conflictos pueden tener causas económicas y ambientales.

Igualmente de los conceptos que citamos podemos deducir características básicas y ciertas premisas que constituyen, evidencian y fortalecen la figura del conflicto desde un punto de vista teórico, estas son:

- “El conflicto es algo natural. Como mencionamos anteriormente en todo momento y en toda etapa de la interacción social existen conflictos.
- El conflicto involucra un problema de poder. Este tema resulta evidente ya que siempre va a existir dentro de un conflicto una parte que tenga ventajas sobre la otra, pudiendo presentarse este mayor poder en cualquier forma.

- La intervención de dos o más personas. Cuando se habla de los sujetos que interviene en el conflicto no solo se debe presumir que los conflictos son interpersonales, sino también que interviene en estos grupos, comunidades, organizaciones, etc.
- Un conflicto no es necesariamente el problema central. Al problema se lo debe considerar como la parte objetiva y al conflicto como una parte subjetiva, dependiendo siempre de las percepciones.
- Un conflicto siempre es visible. Se lo puede observar y caracterizar.
- Los conflictos se pueden originar por la escasez de posiciones o de recursos. Este elemento puede ser atribuido por ejemplo a la exigibilidad de un derecho y por el acceso a ciertos recursos naturales.
- El conflicto es de causalidad múltiple. Como mencionamos anteriormente dentro de las causas estas se conjugan en la generación de un conflicto.
- Los conflictos deben estar involucrados con la acción, deben ser dinámicos, implican un costo, todos los conflictos son distintos y necesariamente deben tener un fin”⁷.
- La contraposición de intereses. La pugna por estos intereses es lo que hace que el conflicto se constituya como tal, donde las partes o sujetos que intervienen encuentran la controversia.

Como vimos dentro del concepto del conflicto hay elementos como las posiciones, intereses y necesidades se convierten en causas inevitables del mismo ya que estos priman en las percepciones de los actores de un conflicto y sobre las cuales se debe trabajar identificándolas, separándolas por que de la claridad de estas causas se podrían construir las estrategias y acciones para el manejo del conflicto.

1.1.2 Tipos y Escalamiento del Conflicto

Una vez que tenemos un marco conceptual, causas y premisas frente a este fenómeno social como es el conflicto es interesante determinar de que forma se los puede

⁷ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 45 y 46

caracterizar⁸ y categorizar⁹ (estos términos se los puede poner en práctica una vez que se realiza un análisis de casos), es decir determinar el tipo de conflicto al que no enfrentamos, lo cual colabora con el entendimiento desde un punto teórico para posteriormente poder ser enfrentado con la realidad. Patricio Guerrero Arias, en su aproximación conceptual y metodológica al conflicto social, marca algunos relevantes tipos de conflicto:

Tipos:

- “*Conflicto Intrapersonal*: interviene una sola parte (persona - naturaleza)
- *Conflicto Interpersonal*: se da entre dos o mas personas, a este tipo de conflicto se lo conoce comúnmente como conflicto multipartes
- *Conflicto Intragrupal*: se da entre dos o mas grupos
- *Conflicto Real o Instrumental*: surge de la incompatibilidad de objetivos
- *Conflicto Irreal o Expresivo*: se da por la necesidad de liberar tensiones
- *Conflicto Latente*: se da por aspectos subyacentes de los actores (afectivos - emociones)
- *Conflicto Manifiesto*: surge de aspectos evidentes del conflicto
- *Conflicto Inducido*: se da por el desequilibrio de las relaciones de poder
- *Conflicto Institucionalizado*: se da por comportamientos previsibles y reglas explícitas (negociación colectiva)
- *Conflictos no Institucionalizados*: son difíciles de predecir y desorganizados (conflictos raciales)
- *Conflictos Primarios cara a cara*: la mayor parte de actores se enfrentan directamente
- *Conflictos Secundarios o Interpuestos*: no se enfrentan directamente los actores sino sus representantes
- *Conflicto Cultural*: abarca valores y aspectos culturales (religiosos, ideológicos) además que pueden tener características de los tipos y niveles de conflictos antes anotados.

⁸ Caracterización de conflictos: Determinar la tipología de los conflictos (Conceptualización, causas, características, actores, recomendaciones de manejo)

⁹ Categorización de conflictos: Determinar el nivel de los conflictos para priorizar las acciones de intervención propuestas en las recomendaciones de manejo dentro de la caracterización

- *Conflictos Institucionales*: son provocados y regulados por la naturaleza con el fin de mantener el orden
- *Conflictos Históricos*: procuran resolver una controversia real y profunda de la sociedad (conflictos raciales)
- *Conflictos Faccionales*: No responde a una contradicción real y profunda, son provocados por la sociedad dominante directa o indirectamente, no permiten apreciar las verdaderas causas o causantes del conflicto
- *Conflictos de Lealtad*: es un conflicto de afiliación, deber, derecho, obediencia, que rompe con un lazo íntimo de unidad de una organización (ruptura de símbolos, rituales), estos conflictos expresan mucho mas el impacto cultural
- *Conflicto Extremo*: conflicto violento (guerras)
- *Conflicto Diplomático*: utilización de medios no violentos de persuasión¹⁰,

Escalamiento:

Es frecuente observar como un conflicto de menor categoría puede escalar a uno mayor, es decir que un conflicto con poca importancia puede llegar a convertirse en uno grave ya que no se puede decir que un conflicto de consideración haya nacido así, sino que es el resultado de las acciones constantes de las partes que intervienen en este al tratar de manejarlo y resolverlo.

De forma general se consideran cuatro condiciones para que un conflicto menor se transforme en uno mayor:

- *“Imagen Refleja*: Cada una de las partes considera que la posición de la otra es exacta y totalmente hostil y opuesta a la otra; en consecuencia, ambas partes ignoran por completo las oportunidades de acomodo o acuerdo que se les presenta.
- *Interpretaciones diferentes de los mismos hechos o conductas*: En efecto, las partes ven sólo lo que desean observar; están a favor de cualquier

¹⁰ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 46, 47, 48, 49, 50 y 51

interpretación que consideren que es más compatible con sus fines predeterminados.

- *Doble estándar:* Las partes juzgan sus propios actos a través de estándares distintos a los que usan para juzgar los actos de sus adversarios.
- *Posiciones polarizadas en un solo tema:* Las partes se concentran en un solo tema y consideran que los otros representan los extremos opuestos respecto a ese tema; por ello, consideran que el conflicto tiene una sola fuente, y consideran también que su tarea es obligar a sus adversarios a rendirse incondicionalmente.”¹¹

Resulta evidente que si dentro del desarrollo de un conflicto intervienen estos elementos, este tiende a escalar hasta el punto que se vuelve incontrolable. El escalamiento puede afectar tanto de forma individual a personas como a grupos de personas, instituciones, países y continentes enteros, sobretodo cuando se trata de conflictos con temas únicos y no se toma en cuenta otra posibilidad que no sea doblegar al adversario, cuando la actitud que se debería obtener de las partes es la de mirar el conflicto desde distintas ópticas con lo cual las posibilidades de llegar a acuerdos es mayor y que como consecuencia directa detendrían el escalamiento o lo reducirían.

Sin embargo se debe tomar en cuenta que así como los conflictos escalan, fruto de las actuaciones de las partes estos también se reducen por los mismos motivos, en especial cuando las partes visualizan y reconocen la existencia de interés mutuos, es decir cuando en un conflicto las partes deponen posiciones para concentrarse en los intereses.

El tema del escalamiento de los conflictos se lo asemeja con un “ascensor”. En definitiva cuando existe imagen refleja, interpretaciones diferentes, doble estándar y posiciones polarizadas “sube” y cuando se deponen las posiciones, se trabaja en cuanto a los intereses y se toma en cuenta las necesidades de la otra parte “baja”.

¹¹ JANDT, Edmund Fred, “Ganar – Ganar Negociando”, Compañía Editorial Continental, México, 1986, Pág. 86

1.2 Los Conflictos Socioambientales

Como hemos visto anteriormente el conflicto y la sociedad se encuentran íntimamente relacionados, que la interacción social y la relación humana es proclive a provocar conflictos, por lo que no nos puede extrañar que constantemente se hable de la vinculación entre conflicto y sociedad, la misma que se manifiesta en variadas situaciones y que claramente podemos visualizar en la cotidianidad de las personas.

Con relación a nuestro tema de estudio es importante que tomemos en cuenta cual es la vinculación que tienen estos dos elementos – conflicto y sociedad – con el medio ambiente, ya que de esta manera podremos mantener un enfoque objetivo durante nuestro estudio.

Es claro que el medio ambiente debe estar relacionado tanto con los conflictos como con la sociedad, que para mantener una mejor claridad en el tema los denominaremos como “*Conflictos Socioambientales*”, posteriormente realizaremos un análisis conceptual de este tipo de conflictos, ya que primero nos interesa hacer un acercamiento de estos elementos o factores a un contexto real de situación.

Debemos saber que en cualquier parte donde los hombre viven en sociedad hay conflictos, esa “cualquier parte” se la puede interpretar como un espacio físico que se encuentra relacionado con el medio ambiente, por lo que los grupos sociales tendrán conflictos relacionados por su interacción en el medio ambiente, es decir que estamos frente a conflictos socioambientales.

La vinculación es de fácil deducción, ya que el “hombre” al vivir en un espacio físico determinado necesita aprovechar de ciertos recursos naturales, es decir que causan un impacto de mayor o menor grado en el medio ambiente, por otra parte existen grupos que por “negocio” aprovechan los recursos, es el caso de la actividad petrolera, es aquí donde esta presión provoca conflictos relacionados con la sociedad y el medio ambiente.

Para mantener un mejor contexto es importante conceptualizar un tema vital y de aquí es que surge la pregunta: ¿qué es el medio ambiente?. De acuerdo con el diccionario de Lengua Española se define al medio ambiente como el “Conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres vivos”¹².

Existen tratadistas que expresan que por uso común se utiliza la denominación de “medio ambiente” pero que se debería usar la palabra “ambiente” como una denominación más apropiada para definir el significado del entorno que rodea a la especie humana¹³, sin embargo esta discusión por el momento se transforma en puramente terminológica ya que para en este momento podemos emplear cualquiera.

Dentro de nuestro estudio utilizaremos la denominación de “medio ambiente”, ya que inclusive nuestra Constitución Política utiliza este término, el mismo que dentro del glosario de definiciones de la Ley de Gestión Ambiental Codificada en septiembre de 2004 expresa en su glosario de definiciones que medio ambiente es el: “Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos, o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones”¹⁴.

Una vez que hemos establecido lo que significa “medio ambiente”, podemos comprender que la vinculación entre conflicto, sociedad y medio ambiente es muy importante, ya que a través de esta es que podemos entender la importancia y relevancia que toman los conflictos socioambientales en el desarrollo de un país donde el medio ambiente es considerado como prioridad nacional, donde la sociedad mantiene una lucha intensa por el respeto de sus derechos civiles y colectivos y donde los niveles de conflictividad y su forma de manejarlos provoca una preocupación importante a todo nivel.

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Diccionario de Lengua Española”, Vigésima Primera Edición, Tomo II, Madrid-España, 1992, Pág. 1346.

¹³ PÉREZ CAMACHO, Efraín, “Derecho Ambiental”, Edit. Mc Graw Hill, Serie Jurídica, Bogota-Colombia, 2.000.

¹⁴ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, Glosario de Definiciones, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

1.2.1 Conceptos, Características, Tipos y Actores de Conflictos Socioambientales

Ahora que contamos con mayores elementos de juicio es importante que nos enfoquemos de lleno en lo que son los conflictos socioambientales, ya que en base a este tipo de conflictos es que se desarrollara nuestro estudio.

En la búsqueda de una definición de conflictos socioambientales podemos citar a Fiske el que define al conflicto como una controversia o diferencia explícita que se da entre al menos dos grupos interdependientes que compiten entre sí por los mismos recursos escasos o que persiguen metas incompatibles de manera que las opiniones, decisiones y conductas de un grupo respecto a tales recursos y metas, que afectan necesariamente las opiniones, decisiones y conductas de otro grupo¹⁵.

Otra de las definiciones importantes que se dan con respecto a este tema es la expresada en la propuesta de FFTP¹⁶ – Ecuador en la cual se menciona al conflicto como: “la acción colectiva o la situación que implica la oposición de intereses, derechos, perspectivas racionalidades y lógicas en relación al manejo de los recursos naturales, en un contexto de crisis”¹⁷.

Es importante que tengamos una mayor visión sobre el concepto de conflicto socioambiental, para lo cual es interesante ver que mencionan en otros países sobre el tema. En Perú, el CONAM (Consejo Nacional de Medio Ambiente) señala que: “es una situación en la que colisionan intereses o ideas; o donde existen diferencias persistentes con escasa probabilidad de ser resueltas en corto plazo. Sus causas y orígenes son múltiples y la percepción que se tiene de él varía con cada actor, sus

¹⁵ FISKE, Emmett y otros, “Manual para la Resolución Negociada de Conflictos Ambientales”, PNUD, reproducido por la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD), Quito-Ecuador, 1995, Pág. 1

¹⁶ FFTP: Programa de Bosques, Árboles y Comunidades Rurales.

¹⁷ FFTP-Ecuador, Propuesta para el funcionamiento del Grupo de Trabajo sobre el manejo de Conflictos Socioambientales en la Amazonía de Bolivia, Ecuador y Perú, Quito-Ecuador, Marzo 1994

valores y características culturales, necesidades e intereses. Es un proceso dinámico y complejo, y no necesariamente se presenta como situación de tensión o crisis”¹⁸.

Como vemos esta es una definición bastante clara, a pesar de que existen muchos elementos que se conjugan en un solo concepto. Por lo demás nos parece interesante citar como la definición mas apegada a lo que son los conflictos socioambientales la expresada por Pablo Ortiz T, en el curso de capacitación organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano en el que se expresó que el conflicto socioambiental es el: “Proceso que involucra a dos o mas partes consientes de una incompatibilidad social, política o cultural, real o percibida en torno al control, uso, manejo, acceso o explotación de espacios y/o recursos naturales”¹⁹.

Es importante mencionar algunas de las características de los conflictos socioambientales, las mismas que facilitan su entendimiento y por otra parte nos permiten identificar con mayor claridad a este tipo de conflictos muy común en nuestro país, y que se encuentra generalmente su origen en un problema ambiental.

Las principales características de este tipo de conflictos son:

- La inexistencia de acuerdos frente a datos disponibles o información importante incompleta.
- Los niveles de comunicación entre los actores es cuantitativa y cualitativamente pobre.
- Las percepciones existentes en los actores frente a la otra parte y al conflicto mismo muchas veces son inexactas y estereotipadas.
- Inicialmente se podría decir que los intereses de las partes frente al conflicto son aparentemente incompatibles.
- De la misma forma encontramos generalmente que tanto las actitudes y posiciones de los actores son reactivas y contrapuestas.

¹⁸ CONAM, Consejo Nacional del Medio Ambiente del Perú, “Manual de Capacitación en el Manejo y Resolución de Conflictos Ambientales”, Seminario Taller, Lima-Perú, 1999. Pág. 9

¹⁹ CURSO DE CAPACITACIÓN EN METODOLGÍAS DE TRATAMIOENTO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, Pablo Ortiz T., Quito-Ecuador, 11, 12 y13 de octubre de 2004

- La conducta de los actores es combativa.
- Existe un marcado rechazo al diálogo entre los actores
- Las redes y grupos de actores son complejas.
- No existe un proceso estándar para el tratamiento de estos conflictos.
- El involucramiento de amplios aspectos técnicos.²⁰

Hemos considerado oportuno citar estas características que son de fácil comprensión, sin embargo tratadistas como Padilla y San Martín hacen también referencia a ciertas características de los conflictos socioambientales, que en el fondo son similares a las que hemos citado y aunque cambie su forma de expresarlas vemos que las personas que se encuentran involucradas en estos temas manejan criterios similares, de ahí que la primera impresión es de que este tipo de procesos podrían estar mejor manejados si se pusiera en práctica lo mencionado al respecto.

Al igual que el conflicto social en general tiene algunos tipos de conflictos, los socioambientales también cuentan con una tipología base en la cual se encasillan las diferentes situaciones o conflictos. De acuerdo a Santandreu y Gudynas²¹, existen varios tipos de conflictos ambientales, donde a pesar de individualizarlos dicen los autores y es evidente que dos o más tipos de conflictos pueden conjugarse. La tipología mencionada por los autores citados es la siguiente:

- *Conflictos que se manifiestan externamente:* estos se externalizan por manifestaciones de los actores o grupos sociales involucrados en el conflicto.
- *Conflictos Latentes:* son conflictos donde alguna de las partes no ha manifestado, exteriorizado su posición o interés respecto al conflicto o ha dejado de hacerlo.

²⁰ CURSO DE CAPACITACIÓN EN METODOLGÍAS DE TRATAMIOENTO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, Pablo Ortiz T., Quito-Ecuador, 11, 12 y13 de octubre de 2004

²¹ SANTANDREU Alain y GUDYNAS Eduardo, “Definiciones y Conceptos en Conflictos Ambientales”, Documento de Trabajo CLAES, 1998

- *Conflictos de Hecho*: este es palpable por encontrarse en curso las actividades generadoras del conflicto, este se asemeja al conflicto manifiesto.
- *Conflictos de Acecho*: este hace relación al riesgo de la presencia de un posible conflicto por la ejecución de ciertas acciones o actividades.
- *Conflicto Simétrico*: este se refiere a los similares niveles de poder como de acceso a la información e instrumentos que influyen en el conflicto.
- *Conflicto Asimétrico*: este involucra una desigualdad evidente en cuanto a los niveles de poder, información e instrumentos que influyen en el conflicto.
- *Conflictos Fugaces*: se los determina por su corta duración.
- *Conflictos Dilatados*: hacen referencia a conflictos que tienden a perdurar en el tiempo.
- *Conflicto Intermitente*: son conflictos que aparecen y desaparecen en determinados lapsos de tiempo.
- *Conflicto Endémico*: tienen un desarrollo cíclico en el tiempo por la búsqueda de elementos para mantenerlo latente sin buscar al mismo tiempo una solución por parte de uno de los actores.

Al referirnos en la cita de las definiciones del conflicto “a las partes”, es indudable que nos estamos refiriendo a los actores involucrados de una u otra forma en el conflicto.

De los diversos análisis que hemos realizado hasta el momento sumado a lo mencionado por ciertos tratadistas, personas involucradas en el tema y por deducción lógica podríamos mencionar a ciertos actores que intervienen dentro de los conflictos socioambientales encontrándose entre los principales:

- **Actor receptor o afectado** directa o indirectamente por el hecho generador del conflicto.
- **Actor generador** que por sus actividades es el causante del hecho generador del conflicto.

- **Actor iniciador** es la persona que frente al hecho generador manifiesta primero su disconformidad produciendo o articulando el conflicto.
- **Actor regulador** siendo la autoridad con la facultad para conocer, resolver, decidir, etc., sobre el hecho generador del conflicto.
- **Medio Ambiente** bien jurídico protegido o a proteger

Como punto de partida los conceptos, características, tipos y actores de conflictos socioambientales anotados, nos ayudan a ubicar en un contexto claro las implicaciones de los conflictos socioambientales, sin embargo creo que existen otro factor como es el daño ambiental, que definitivamente tiende a estructurar aún más los temas puramente teóricos.

La problemática ambiental, es un tema muy discutido a lo largo de los últimos años no solo en el Ecuador sino también a nivel mundial, y creo que es muy fácil darse cuenta que una de las principales problemáticas ambientales es la que hace referencia al *daño ambiental*, el mismo que es importante citarlo ya que como veremos posteriormente será un eje fundamental en nuestro estudio.

Sobre el daño ambiental existe una gran discusión y mucho escrito al respecto, pero para nuestro caso es importante anotar dos criterios básicos que se encuentran en nuestra legislación.

1. Debemos partir del concepto de que la Constitución Política Ecuatoriana Codificada el 2 de Mayo de 2002 expresa dentro del capítulo relacionado con los derechos civiles, en el artículo 23 numeral 6 menciona que el Estado reconocerá y garantizará a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado²², lo cual es nuevamente ratificado en el

²² CONTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 2, artículo 23 numeral 6, del 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

mismo cuerpo legal en el artículo 86 inciso 1, en la parte pertinente a los derechos colectivos.²³

2. Con esta premisa constitucional podemos mencionar que el daño ambiental es un factor atentatorio a las normas constitucionales vigentes en el Ecuador. Pero entonces que podemos entender por daño ambiental?; la Ley de Gestión Ambiental Ecuatoriana en su glosario de definiciones dice que: “Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos”²⁴.

La intención de utilizar este concepto es clarificar lo que la ley en el Ecuador manda al respecto del tema, adicionalmente que todos sabemos que el desconocimiento de la ley por principio general no exime de responsabilidad ya que se presume que esta es conocida por todos, lo cual cierra la posibilidad que este concepto se preste a interpretaciones o subjetividades.

1.2.2 Elementos anexos a los Conflictos Socioambientales

Sin duda alguna al tratar temas complejos, es inevitable estructurarlos de una forma totalmente esquemática e inamovible, premisa que se la debe considerar en base al análisis o diagnóstico inicial del conflicto, que lo veremos al momento de realizar un análisis detallado de distintas metodologías.

En este momento lo importante es tomar en cuenta que existen otros elementos de los que vale la pena hacer una pequeña reflexión individual, ya que en determinada etapa de un conflicto tienden a transformarse en elementos coyunturales y que su

²³ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 5, artículo 86 inciso 1, 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

²⁴ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, Glosario de Definiciones, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

involucramiento dentro del mismo podría marcar ciertas pautas de especial relevancia.

1.2.2.1 Género y Conflictos Socioambientales

Dentro de los elementos que hemos considerados como anexos, existen una serie de temáticas que en la actualidad no se los puede dejar de lado o excluidos ya que de una u otra forma tienden a vincularse indefectiblemente debido a que por su naturaleza son parte sustancial de la interacción social, y este es el caso el tema de “género”.

Desde hace muchos años se viene discutiendo a todo nivel el tema de género. Para este análisis no debemos radicalizarnos en el tema de género como algo relevante en las discusiones sobre machismo o feminismo, sino mas bien como un aspecto vinculado con los conflictos socioambientales tema central de la investigación.

Susan Poats menciona sobre el género que: “Diferente al término *sexo*, que alude a los aspectos fisiológicos y biológicos que distinguen entre macho y hembra, el término *género*, se refiere a las diferencias y las relaciones entre hombre y mujeres que son contruidos y aprendidos socialmente y que varían de acuerdo a diferentes situaciones, contextos o tiempos”²⁵.

Es interesante partir de la diferencia que establece Susan Poats, ya que no deberíamos asumir que existe una semejanza completa entre sexo y género, si bien es cierto que los dos distinguen la figura femenina y masculina, con relación al sexo en términos generales existen características fisiológicas y biológica que los distinguen, en cambio el género va focalizado a aspectos sociales, ya que es evidente que la forma de ver las mismas cosas entre hombres y mujeres son distintas, el impacto de un conflicto es distinto entre hombres y mujeres y muchos mas aspectos que debido a las distintas perspectivas que tienen los unos y las otras.

²⁵ POATS, Susan y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 142

Es en este aspecto que resulta también relevante que cuando se realice un análisis de situación o diagnóstico de un conflicto se tome en consideración los aspectos de género, esto a través de un “análisis de género”. Este análisis no es más que un trabajo de investigación en procura de documentar, analizar y comprender los roles, derechos y responsabilidades, problemas, intereses, posiciones y necesidades del hombre y la mujer dentro de un determinado contexto²⁶.

Poats, menciona dos razones por lo que es importante apoyar e incorporar la dimensión de género en el manejo de conflictos socioambientales. Primero por que el tema de género es una variable social y que se involucra en los conflictos por lo que incluir al género en los procesos de análisis y acción de conflictos enriquecerá el manejo de los mismos. Segundo, la mujer tiene una íntima relación al igual que el hombre con el recurso materia del conflicto por lo que sus intereses deben tener igual peso en la búsqueda de los mecanismos de intervención y manejo del conflicto²⁷.

De tal manera podemos concluir que el tema del enfoque de género dentro de los conflictos socioambientales es un elemento importante para ser considerado tanto en el análisis como en manejo mismo del conflicto, ya que como sabemos el hecho de manejar un conflicto tiene muchas implicaciones sociales en las cuales no se puede dejar de lado este tema.

1.2.2.2 Políticas Públicas y Conflictos Socioambientales

Es evidente darnos cuenta que el tema ambiental se encuentra regado y discutido a todo nivel, la protección ambiental es una de las prioridades nacionales, una garantía que ofrece el Estado convirtiéndose un derecho civil y colectivo plasmado en la Constitución de la República²⁸, como ya se ha mencionado anteriormente, leyes especiales e inclusive en aquellos tratados internacionales que han sido ratificados

²⁶ Ibid., Pág. 17

²⁷ POATS, Susan y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 143

²⁸ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 2, artículo 23 numeral 6 y artículo 86 inciso 1, del 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

por nuestro país, esta protección ambiental es considerada como una prioridad mundial del cual un país como el nuestro que cuenta una de las mayores biodiversidades del mundo no puede desconocer.

En la búsqueda de aquellos elementos anexos o factores que de una u otra forma inciden en los conflictos socioambientales, encontramos a las políticas públicas, las mismas que se encuentran estrechamente relacionadas con el tema ambiental por lo expresado anteriormente, es decir que existe una vinculación entre los conflictos socioambientales y las políticas públicas.

Una política de manera general y comúnmente aceptada es la forma, el medio transformado en mandato con el cual se buscan los medios o caminos necesarios para conseguir o alcanzar un fin determinado²⁹. Si hablamos de una “política pública” no es más que una política dictada por algún organismo del Estado, pudiendo ser el gobierno central, ministerios, gobiernos seccionales y en fin toda aquella organización estatal que se encuentre en la competencia de hacerlo.

De igual manera todos conocemos que una “política pública” está encaminada para hacer, permitir, excluir, reprimir o prohibir algún tipo de actuación, tanto por parte de los organismos del Estado como por parte de los habitantes del país y es en este momento donde se deben visualizar las implicaciones que tienen las políticas públicas sobre tópicos tan importantes para el país como es el medio ambiente.

Existe un elemento que no se puede dejar de lado en esta implicación de las políticas públicas y es el que hace relación al ejercicio del poder, un poder que se puede evidenciar de forma positiva o negativa al dictar políticas dependiendo de los contextos en los que se los pretende manejar, las percepciones que estas provoquen sobre las personas que se encuentran directa o indirectamente relacionadas y la presión que estas ejercen sobre el bien jurídico materia de las políticas, en este caso el medio ambiente.

²⁹ DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Aristos 2000, Editorial Ramón Sopena S.A., Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 487

A nivel de América Latina se han puesto sobre la mesa de discusión varias tesis sobre esta relación que mantienen las políticas públicas y los conflictos socioambientales. Carlos Crespo Flores reunió algunas de estas tesis que fueron planteadas como ponencia para ser discutidas. Estas tesis son:

- *“Las políticas públicas, en el escenario local, directa o indirectamente, generan dos efectos de poder, diferentes y al mismo tiempo complementarios: por un lado disciplina a la sociedad, y a la vez, promueven y/o estimulan conflictos.*
- *Las políticas ambientales promueven directa o indirectamente formas de resistencia, expresadas en conflictos socioambientales.*
- *Los conflictos socioambientales reflejan la contradicción entre el estilo de desarrollo implementado por las instancias de gestión local, y el principio de sustentabilidad.*
- *Los gobiernos locales, más que cumplir una función de mediación en los conflictos socioambientales, son actores de los conflictos.*
- *Los conflictos socioambientales, en el nivel local, ponen en tela de juicio los supuestos de actores iguales y concertación, manejada por el enfoque de “stakeholders”.*
- *Los conflictos socioambientales cuestionan la noción de que la solución a los impactos y problemas ambientales es un tema fundamentalmente técnico – científico.*
- *La incertidumbre de la ciencia y los riesgos ambientales genera que las comunidades locales involucradas en los conflictos socioambientales locales basen sus posiciones en la percepción y el conocimiento local del problema ambiental.*
- *La salida o resolución de los conflictos socioambientales locales reflejan la inexistencia de una democracia ecológica (cultura democrática). Las experiencias de salidas a los conflictos socioambientales locales muestran*

que en general estas oscilan entre salidas fundamentalistas y salidas por cooptación. (teoría de Sabatini)”³⁰.

Con las tesis citadas podemos darnos cuenta de la complejidad que tienen las políticas públicas frente a los conflictos socioambientales. Sin duda podemos mencionar que las políticas públicas son un paraguas que dependiendo de su contexto tiende a involucrar a otros elementos, como el tema de género o comunidades, gobiernos locales o regionales, desarrollo sustentable y recursos naturales, los cuales los analizaremos de forma individual posteriormente.

El involucramiento de estos elementos es consustancial a las políticas públicas. Las tesis expresadas como podemos darnos cuenta no son ideas sueltas, sino que mas bien tienden a juntarse, es decir que pueden confluir unas con otras dependiendo del conflicto, al punto de encontrarnos en la situación en que todas estén entrelazadas en una sola situación, en este caso estaríamos frente a un conflicto sumamente complicado de manejar.

Una política pública debe tender a favorecer a todos aquellos actores involucrados, pero generalmente vemos que en estos temas prima un principio de inequidad, en el cual la parte social es la comúnmente desfavorecida, la complejidad no se la podría medir solo desde un punto de vista de la intervención en el conflicto sino desde el punto de la igualdad en el proceso, es decir que por una parte se debe ver si los actores que deben participar participan y si participan como participan, hay que recordar que es muy complicado manejar el tema de los efectos del poder.

Es ilógico en el tema de la participación de los actores como grupos sociales o comunidades principalmente, que solo se tomen en cuenta los aspectos técnicos o científicos, ya que si bien es cierto se podría remediar el daño o problema ambiental

³⁰ CRESPO FLORES, Carlos. “Políticas Públicas, Gobierno Local y Conflictos Socioambientales”, Ponencia preparada para la conferencia electrónica FAO-FTPP-Comunidec: “Conflictos socioambientales: desafíos y propuestas para la gestión en América Latina” Quito-Ecuador, 15 de diciembre, 1999

de ninguna manera podemos asegurar que el conflicto se solucione por las demandas sociales insatisfechas y descuidadas.

La tesis que hace relación con los gobiernos locales es sumamente válida, ya que la participación de ellos debería jugar un rol protagónico en el manejo de los conflictos socioambientales, sin embargo la realidad demuestra que para que un gobierno local juegue ese rol falta claridad en las políticas públicas, ya que su involucramiento en los conflictos debe ser como una entidad controladora y reguladora que en muchos casos se ve confundida con la de un actor que necesita de capacidad y herramientas para la toma de decisiones, mientras que en otros casos se convierte en un actor que abusa de esa relación asimétrica de poder.

Con esas premisas no queda duda que las políticas públicas no están claras y que este sector evidencia una necesidad urgente de fortalecimiento.

Finalmente una de las grandes discusiones se encuadra en cómo regular políticas públicas eficaces que puedan encaminar el tema de la producción o el desarrollo, con el aprovechamiento de los recursos naturales, evitando al máximo los conflictos socioambientales. Seguramente este es un tema que se lo podría considerar como de los más relevantes para una política pública.

No es ajeno que el país necesita de las industrias y el trabajo para buscar el desarrollo y el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes, pero tampoco es menos cierto que como política de estado tenemos la conservación del medio ambiente, es en esta coyuntura donde se han desatado inmensos conflictos socioambientales. La pregunta lógica es ¿Cómo llegar a una acertada política pública que favorezca tanto a la conservación como al desarrollo sin perjudicar a las partes interesadas? ¿Cómo llegamos a través de una política pública para conseguir un verdadero desarrollo sustentable?

Después de este análisis doctrinario es importante mencionar que nuestra legislación no contempla de forma escueta las política pública definida con respecto a temas

ambientales, a pesar de que existen ciertos criterios precisos en algunos cuerpos legales como la Constitución de la República o la Ley de Gestión Ambiental, es el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516 publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 2 del 31 de marzo de 2003, el que recoge conceptos amplios y definidos sobre estos temas, sin embargo, es curioso que no se publicó temas respecto a políticas públicas, y es solo en el Registro Oficial No. 320 del 25 de julio de 2006 donde se publica el Decreto Ejecutivo 1589 el cual toma en cuenta las tan necesarias políticas públicas, entre las 17 políticas dictadas podemos mencionar como principales las siguientes:

Política 1: “Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el conjunto de políticas es el compromiso de la sociedad de promover el desarrollo hacia la sustentabilidad”

Política 2: “Reconociendo que el desarrollo sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus tres elementos lo social, lo económico y lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en cada instante y para cada acción”

Política 6: “Reconociendo que, sin perjuicio de necesarios y aconsejables complementos y sistematizaciones jurídicas e institucionales, existen suficientes leyes e instituciones en el Ecuador para realizar y mantener una adecuada gestión ambiental”

Política 8: “Reconociendo que, si bien la participación en apoyo a programas y proyectos de promoción y ayuda para la adecuada gestión ambiental en el país corresponde a todos los habitantes en el Ecuador, mediante una real participación democrática a todo nivel, es necesario impulsar la presencia y efectiva participación de grupos humanos que, por diversas razones históricas, no han sido actores muy directos de decisiones y acciones de interés nacional”

Política 11: “Reconociendo que el ambiente y sus regulaciones jurídicas deben afrontarse de forma integral, pero que es conveniente enfatizar en la prevención y control con la finalidad de evitar la ocurrencia de daños ambientales”

Política 15: “Reconociendo que se han identificado los principales problemas ambientales, a los cuales conviene dar una atención especial en la gestión ambiental, a través de soluciones oportunas y efectivas”

Política 17: “Reconociendo que todas las actividades productivas son susceptibles de degradar y/o contaminar y que, por lo tanto, requieren acciones enérgicas y oportunas para combatir y evitar la degradación y la contaminación, hay algunas que demandan de la especial atención nacional por los graves impactos que están causando al ambiente nacional...” en relación al tema del petróleo esta política manifiesta en su inciso primero: “Todas las actividades hidrocarburíferas (exploración, explotación, transporte, industrialización)”

Como vemos estas políticas plasman intereses colectivos por propender al cuidado y conservación del medio ambiente, si bien se plantean como un paraguas que cubre una serie de circunstancias hay que considerar que son las leyes las encargadas de ejercer un verdadero control sobre estos aspectos como así lo manifiestan las políticas realizando el hecho de que no es que no existen leyes sino mas bien que se las cumple parcialmente o en otros casos no se las cumple, considerando además como un tema prioritario el control y la prevención de daños ambientales comúnmente provocados por actividades productivas, es decir que se podría llegar a garantizar un mejor cumplimiento de normas y parámetros técnicos, manifiesto que evidentemente cubre la actividad petrolera.

Dos temas importantes que se plantean en estas políticas, la participación activa de todos los ecuatorianos, a través de su inclusión en aquellos procesos en los que se encuentran directamente relacionados, podríamos mencionar como ejemplo la participación de comunidades indígenas en los procesos de licitación y adjudicación de bloques y campos petroleros; además es importante mencionar que frente a

problemas ambientales que pudieran suscitarse se consagra como interés principal atender y solucionar estos conflictos de una forma oportuna y efectiva, caso en el cual la aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos podrían estar inmiscuidos.

En cuanto al tema petrolero, como componente de nuestro estudio, también existe una mención lo cual induce a pensar que el espíritu básicas ambientales tratan de abarcar de forma integral la gestión ambiental procurando ser un nexo entre dos acciones relacionadas estrechamente como son la conservación del medio ambiente y las actividades productivas de recursos naturales no renovables.

1.2.2.3 Comunidades y Conflictos Socioambientales

Siguiendo con el análisis de aquellos elementos que se los ha considerado como anexos a los conflictos socioambientales, dentro del contexto social, se debe reflexionar de manera especial, que es lo que ocurre con las comunidades o grupos sociales que se encuentran vinculados con los conflictos socioambientales.

Es importante aclarar que la Constitución de la República del Ecuador Codificada en los artículos 83, 84 y 85 ha reconocido y garantizado a los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos (a quienes nosotros conocemos o llamamos comúnmente como comunidades) a través del mandato constitucional, los derechos colectivos³¹⁻³², los mismos que se encaminan a proteger a estos grupos en su interacción social y desenvolvimiento en las diversas instancias del desarrollo nacional.

³¹ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 5, artículos 83, 84 y 85, 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

³² Derechos Colectivos: A más de ser antiguas costumbres tradicionales y mandatos que están vigentes en nuestras comunidades desde el tiempo de nuestros ancestros, es un conjunto de derechos especiales, que favorecen única y exclusivamente a los grupos humanos de raíces ancestrales y grupos minoritarios que de acuerdo con la constitución son aquellos que se autodefinen como indígenas y afroecuatorianos. Este conjunto de derechos son el resultado, por un lado del proceso de lucha del movimiento de reivindicación indígena de la década de los 90 del siglo pasado, y por otro de las conquistas y logros alcanzados en la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169. ECOLEX 2006. Por el tema que se trata se ha hecho énfasis en los derechos colectivos relacionados a las comunidades indígenas, sin embargo de forma general hay que mencionar que estos abarcan de forma general los derechos de las minorías.

No cabe duda que del tipo de conflictos que estamos tratando -conflictos socioambientales- están caracterizados por un altísimo movimiento social, y que de forma general han sido muy poco atendidos o verdaderamente atendidos (esto se evidencia por los continuos reclamos por parte de las comunidades, los mismos que son de conocimiento público). En el caso de la actividad petrolera no se puede considerar que un conflicto con estas características sea resuelto tapando huecos, sino que la intención y el éxito será llegar a la raíz del conflicto e intervenir de forma integral en su resolución ya que de otra manera, este corre el riesgo de convertirse en crónico, es decir que si no se busca una resolución integral el mínimo detalle provocará que el conflicto se reavive siendo talvez un caso de nunca acabar.

De ninguna manera queremos realizar un juicio de valor que se base en los niveles de intención de estos grupos económico – productivos para que resuelvan sus conflictos o cuales son las motivaciones internas o externas por las que las comunidades acceden a este tipo de arreglos, pero si podemos discutir la forma o mecanismos a través de los cuales se pretenden manejar los conflictos y los acuerdos a los que se llega.

Por los análisis que hemos venido realizando, es fácil deducir que las comunidades, frente a los otros actores que intervienen en el conflicto se encuentran en situación de desventaja, sea por los niveles de poder, por el acceso y desconocimiento de información fundamental sobre temas relacionados con el conflicto e inclusive el poco acceso a los mecanismos o herramientas para intervenir de mejor manera en un conflicto.

Este tipo de factores como hemos señalado tienden a desfavorecer a las comunidades, frente a los otros actores del conflicto. De aquí es que surgen ciertos cuestionamientos frente a los medios tradicionales para la resolución de conflictos y es donde los MASC y otro tipo de metodologías adquieren protagonismo.

Ahora, el tema pasa en como igualar esos niveles de poder para que la “comunidad” tenga mayores argumentos para participar en un proceso de intervención o de manejo del conflicto y es donde se enfocan algunas de las metodologías que veremos posteriormente.

Es en este momento donde surge la necesidad de buscar las estrategias para el fortalecimiento de las comunidades “ya que muchas veces y una gran equivocación que se ha cometido es ver a estos sectores o grupos como víctimas del conflicto coartando su participación, cuando no es así, ellos son actores sustanciales e irremplazables en los conflictos socioambientales”³³.

Estratégicamente lo importante no es buscar que la comunidad gane ya que el fortalecimiento puede ir encaminado a tener una mejor evaluación de su autoestima, autoconfianza, consolidación de su identidad, entre otros aspectos ya que con este trabajo la comunidad se vera capacitada, orgánicamente fortalecida, políticamente madura, consolidada en los procesos de toma de decisiones informadas y reafirmada para poder intervenir verdaderamente en los distintos procesos de manejo de conflictos que como consecuencia favorecerán a la articulación de sus demandas, exigibilidad de sus derechos, conocimiento de sus responsabilidades para el cumplimiento de los acuerdos³⁴.

Uno de los grandes inconvenientes que existen en nuestro país sobre este tema, es que no se involucra activamente la participación de las comunidades una vez que se desata el conflicto, lo que se ha evidenciado en los distintos casos de conflicto.

Sin embargo existe otro factor que confluye y que tiene relación con la participación de estos sectores en los procesos previos al conflicto e incluso al problema, de lo cual ya se viene discutiendo e inclusive se está buscando reglamentar. Nos referimos a los

³³ CURSO DE CAPACITACIÓN EN METODOLGÍAS DE TRATAMIOENTO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, frase expuesta en una de sus conferencias por Pablo Ortiz, Quito-Ecuador, 11, 12 y13 de octubre de 2004

³⁴ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 84

procesos de “consulta previa” ³⁵, que en gran medida debería convertirse en herramienta de diálogo, el cual sería sin duda un mecanismo de prevención de conflictos, lamentablemente la discusión pasa por el grado de eficiencia que se le da a través de esta política pública a la “consulta previa”.

1.2.2.4 Gobiernos Locales y Conflictos Socioambientales

Como hemos visto todos estos elementos anexos a los conflictos socioambientales, no solo lo son hacia el tipo de conflicto, sino que son relativos o complementarios entre ellos, es decir que en la mayoría de los casos intervienen algunos de ellos.

En el caso de los gobiernos locales algo se ha comentado ya; estos gobiernos locales no son mas que gobiernos seccionales autónomos, responden a una circunscripción territorial, entre los que tenemos a los consejos provinciales, concejos municipales, juntas parroquiales y otros que determine la ley, esto expresado por la Constitución Política del Estado en su artículo 228.³⁶

De igual manera la Constitución en sus artículos 228, 230 y 231 menciona que los gobiernos locales, podrán en base a su autonomía legislativa dictar ordenanzas y tener un manejo de sus tasas y contribuciones especiales, pueden generar sus propios recursos económicos, además se prevee la existencia de las leyes correspondientes para el buen manejo de su administración las que contemplan su estructura, integración, deberes, atribuciones y responsabilidades con el objeto del cumplimiento de sus fines.³⁷

³⁵ Consulta Previa: Procedimiento que busca garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a través de la debida información a la comunidad, para poder contar con sus criterios como antecedente indispensable de la adopción de una decisión de riesgo ambiental. Concepto enfocado al tema ambiental. ECOLEX 2006

³⁶ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título XI, Capítulo 2, artículo 228, del 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

³⁷ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título XI, Capítulo 2, artículos 228, 230 y 231, del 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

La intención de hacer referencia a estos gobiernos seccionales autónomos o comúnmente llamados como gobiernos locales, es que sin duda alguna estos juegan roles especiales dentro de los conflictos socioambientales.

Como vimos anteriormente en los temas que hacían referencia a comunidades como a políticas públicas, muchas veces estos órganos administrativos del Estado tienden a confundir su participación dentro de los conflictos, ya que por una parte se los encuentra como actores del conflicto y por otra parte, como y en ocasiones ellos son los que deben tomar una resolución sobre algún aspecto relevante en materia del conflicto.

Es difícil llegar a comprender esta posición ya que, dependiendo del caso, se han visto involucrados como actores y posteriormente deben jugar un rol de juez y parte en la toma de decisiones, sin embargo el tema no pasa por buscar algún tipo de pócima para desvincularlos sino redefinir a través de ciertas políticas públicas cual podría ser su nivel de intervención y su participación en el conflicto.

Tampoco se podría decir que de ninguna forma puede participar como actor o peor aún siendo un actor marginarlo de los procesos de intervención o de manejo de los conflictos, pero si se debería considerar el hecho, a través de una política pública, de que pasaría cuando este gobierno local es el encargado legalmente para tomar una resolución y cual sería la entidad de suplantarle en la toma de decisiones, cuando como premisa sabemos que este es una entidad autónoma.

Tratando de hacer una pequeña relación con el tema de las comunidades, es evidente que estos gobiernos seccionales autónomos sufren también de desventajas, y se podría mencionar que estas en su mayoría se dan desde un punto de vista técnico para el manejo de conflicto, por lo que sería necesario nuevamente, dependiendo del caso, trabajar en procesos de fortalecimiento enfocado con el accionar y en los contextos que involucran a un gobierno local.

Existen sobre este tema del fortalecimiento de los gobiernos locales en la actualidad algunos avances, como por ejemplo se discute mucho sobre descentralización de algunas competencias que por el momento le corresponden al gobierno central o sus ministerios (el caso de los procesos de descentralización de competencias ambientales a los municipios), que inclusive están contempladas algunas de ellas en la misma Constitución y de cómo involucrar de mejor manera a los gobiernos locales en procesos participativos un trabajo que lo ha venido realizando en los últimos tiempos organismos no gubernamentales (ONGs).

1.2.2.5 Desarrollo, Recursos Naturales y Conflictos Socioambientales

Si podemos hablar de temas polémicos a lo largo de esta investigación, no cabe duda que poner sobre la mesa temas como desarrollo, recursos naturales y conflictos socioambientales, puede abrir una gran discusión y podría ser un tema exclusivo de investigación y que para nuestro caso también será una gran interrogante.

Para intentar contextualizar este tema debemos partir de la comprensión de que es el interés nacional.

La Constitución Política de la República del Ecuador al ser la ley suprema del Estado y en base a la cual se rigen las leyes y el ordenamiento jurídico del país, es la encargada de marcar los preceptos generales y las normas directrices de cuanta acción desarrollen los ecuatorianos, como aquellos extranjeros que desenvuelvan sus actividades en el Ecuador.

Nuestra Constitución antes de dictar las normas para los ciudadanos, impone un conjunto de principios fundamentales, es decir, consagra los deberes del Estado para con sus particulares. En este caso encontramos los *Deberes del Estado* dentro de los cuales el artículo 3 expresa:

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:

1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad

- 2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de las mujeres y hombres, y la seguridad social**
- 3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente**
- 4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo**
- 5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes**
- 6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción³⁸”.**

A través de esta norma constitucional, al atribuir deberes, se deduce que son cuestiones inherentes al interés de la sociedad civil y que como ya se ha mencionado, el Estado es el responsable de cumplir con estas obligaciones frente a sus habitantes.

Si tomamos en cuenta desde el punto de vista del Estado, que los intereses nacionales son de distintas clases, podemos encontrarnos en una situación complicada. Es así que de acuerdo a la Constitución como a aquellas normas especiales correspondientes, se ha considerado al petróleo, minas y otros bienes nacionales como de interés y utilidad pública.

De la misma manera encontramos que el medio ambiente, su protección y manejo también ha recibido esta valoración de interés público, tomando muy en cuenta dentro de este tema lo referente al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SNAP)

Tener un concepto claro del significado de interés nacional resulta importante, ya que a través de este se puede delinear una valoración en estos aspectos de interés público o privado.

³⁸ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título I, artículo 3, 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

Por interés nacional entendemos el hecho de ver la utilidad nacional, es decir la utilidad, que por los bienes nacionales tienen los habitantes y la generalidad del conglomerado social³⁹.

Enmarcándonos dentro del contexto constitucional debemos referirnos al artículo 86 que hace referencia al medio ambiente y el interés público sobre el, al mencionar:

“Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la prevención de la naturaleza.

Se declara de interés público y se regularán de acuerdo a la Ley:

- 1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país**
- 2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas.**
- 3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados internacionales”⁴⁰.**

Como se puede apreciar en el texto constitucional citado, la relevancia que se da al medio ambiente por parte del Estado se convierte en un interés fundamental, es decir, que el ordenamiento jurídico del país encaminará sus acciones para dar fiel cumplimiento a los mandatos constitucionales, sin embargo a lo referido, pueden adherirse una serie de realidades que denotan que en varias ocasiones, esta obligación del Estado no se cumple.

³⁹ Este concepto proviene del análisis y la conjunción de algunos elementos, como son el interés público y el interés privado, y que se lo enfoca como un interés que reporta una utilidad para todos los sectores del país.

⁴⁰ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 5, artículo 86, 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

Es importante resaltar que dentro del artículo 86 de la Constitución se conjugan dos elementos básicos que son, la obligación del Estado como protector del derecho de la población y por otra parte el interés público, elementos que en la cotidianidad no pueden separarse, ya que de otra manera se perdería la estructura básica de la garantía y exigibilidad de derechos.

Podríamos citar lo que en la actualidad sucede con las áreas naturales, sobre las cuales existen grandes presiones, siendo objeto de distintas intervenciones⁴¹, que de una u otra manera han quebrantado tanto lo citado en el artículo 86 de la Constitución como aquellas leyes especiales encargadas del control y manejo ambiental en el Ecuador.

Como un ejemplo claro podemos mencionar lo que esta sucediendo con la intervención de la compañía brasilera Petrobras en el Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuní, en la cual es evidente que se ha producido un conflicto de intereses, corroborando la fragilidad legal en el tema que nos acoge.

La contraposición de intereses es el “pan de cada día” en el Ecuador, podemos ver que en la misma constitución en el artículo 247 incisos 1 y 2, que se refieren a los recursos no renovables (petróleo, minería, etc.) menciona:

Art. 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial.

Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas de acuerdo con la ley...”⁴², los cuales pueden en determinado punto contraponerse, esto sin referirnos de forma profunda a las normas

⁴¹ Nos referimos a que de se han otorgado licencias ambientales para extracción de Recursos Naturales no renovables, esto además guarda relación con el hecho que algunas leyes en el Ecuador, permiten actividades extractivas en Áreas Naturales Protegidas.

⁴² CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título XII, Capítulo I, artículo 247, 11 de agosto de 1998. CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

contempladas en distintos cuerpos legales como la Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal y su reglamento, en la Política y Estrategia de Biodiversidad, en la Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería y sus respectivos reglamentos, donde cada una de estas resalta al bien que regulan como de interés nacional.

Por tanto, jurídicamente tanto el sistema nacional de áreas protegidas, como los recursos no renovables, se encuentran regulados, y desde su distinto enfoque y naturaleza los dos son de interés nacional, y por ende del mismo valor legal. Es decir que no se puede argumentar legalmente que la explotación petrolera es de interés nacional que está por encima de los otros temas del desarrollo nacional.

Aparentemente, con tener una normativa distinta para su regulación, se puede controlar el tema, pero en la práctica hemos visto que esto no sucede así, ya que cada sector y por obvias razones tiende a poner las cosas a su favor, más aún cuando físicamente los recursos no renovables y las áreas protegidas se encuentran geográficamente una sobre otra.

A raíz de estas premisas es lógico que existan dudas sobre como valorar el nivel de los intereses públicos o privados, inicialmente debemos considerar que los intereses nacionales son iguales, es decir todos son igual de importantes, deben tener igual jerarquía, en este caso podemos decir que el interés público de obtener beneficios económicos por la explotación de recursos no renovables es horizontalmente igual al interés público de conservar y proteger las áreas naturales como el recurso agua.

Sin embargo la concepción de interés público debería ampliarse a interés nacional, ya que los intereses públicos pueden distorsionarse por la influencia de los intereses privados lo que podría producir variaciones, transformaciones que difieran de lo que realmente constituye un interés nacional, por lo que la discusión a cada instante se vuelve más compleja, sin obtener aún una idea clara y definida de la valoración apropiada encaminada a la obtención de beneficios reales al involucrar conservación y desarrollo.

Sin duda es tremendamente complicado decirle “no” al desarrollo o “no” a la conservación, no podemos entrar en una posición extremista, ya que sabemos que sin desarrollo, ej: actividad petrolera, el país podría llegar a la peor crisis económica de la historia, mientras que por el otro lado no podemos ser cómplices de la destrucción de nuestro ecosistema.

Si tomamos en cuenta lo antes mencionado, nuestra salida mas coherente al tema sería llegar a un punto de equilibrio racional entre desarrollo y conservación de nuestros recursos naturales, es decir a un desarrollo sustentable que no es sino “el mejoramiento de la calidad de la vida humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones”⁴³ como lo menciona la Ley de Gestión Ambiental Codificada en su glosario de Definiciones.

Finalmente con estas apreciaciones la discusión pasa por determinar la valoración de los distintos tipos de intereses, cual debe prevalecer, cuales será la normativa que los regula, como manejar las políticas públicas, las distintas posiciones tejidas por los efectos del poder, las necesidades de hombres y mujeres de las zonas afectadas y en general como desamarrar los conflictos que se producen alrededor de estos temas.

1.2.3 Manejo de Conflictos Socioambientales

Como se ha venido comentando a lo largo de los distintos análisis teóricos en este estudio, es evidente que la existencia de conflictos es inevitable dentro de la interacción social y como hemos visto esto se expande al ámbito ambiental, no podemos de ninguna manera juzgar que una sociedad o grupo social es mejor o peor por la cantidad de conflictos que tenga, ya que el éxito radica en la forma en que maneja esos conflictos.

⁴³ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, Glosario de Definiciones, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

Surgen en este momento algunas consideraciones obvias, ya que la primera pregunta cuando nos encontramos en esta situación es: ¿y ahora que hacemos con el conflicto?, no lo podemos dejar de lado ya que es un aspecto inherente a las relaciones humanas, si tomamos en cuenta la vinculación entre conflicto, sociedad y medio ambiente, como resolvemos el paradigma del desarrollo sustentable que inevitablemente implica el surgimiento de conflictos. En este caso y frente a estas apreciaciones es que el desafío está en cómo manejamos esos conflictos.

Si en estos temas lo importante es el manejo encontramos necesario que definamos lo que implica. Una definición concreta y clara sobre el tema menciona que el manejo es el: “Conjunto de estrategias y actividades que procuran abordar un conflicto para prevenir una escalada de tensiones y/o transformar relaciones de confrontación en relaciones de colaboración y confianza para la convivencia pacífica”⁴⁴.

El acercamiento a una conceptualización del manejo de conflicto, más amplia y que brinda algunos elementos adicionales de análisis, dado por expertos en la materia lo define como: “un campo multidisciplinario de investigación y acción que busca encaminar como la gente puede tomar mejores decisiones en conjunto, particularmente sobre problemas difíciles y contenciosos. A su vez reconoce que los estilos tradicionales de manejo de conflictos en una comunidad, son generalmente una fuente de enmienda y fuerza. El exitoso manejo de los conflictos puede significar el reforzamiento del poder de las instituciones locales o la creación de nuevos espacios participativos, basado en lo tradicional, que permite a las comunidades emprender nuevos retos. El manejo del conflicto consiste en un puñado de premisas sobre conflicto, cambio y poder”⁴⁵.

Las dos definiciones citadas las consideramos como válidas, las que aportan elementos relevantes para entender el significado y el contexto en el que se

⁴⁴ CURSO DE CAPACITACIÓN EN METODOLGÍAS DE TRATAMIENTO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, Juan Dumas, Quito-Ecuador, 11, 12 y 13 de octubre de 2004

⁴⁵ PENDZICH, Christine, Manejo de Conflictos y Disputas en el Sector Forestal. En Revista, Bosques, Árboles y Comunidades Rurales, Edición Latinoamericana. No. 19-20; Pág. 5 Quito-Ecuador, 1994

desenvuelve el manejo del conflicto, resultando indistinto cual sea empleada ya que se transforman en complementarias.

De forma general, ya que trataremos mas adelante algunos de los temas, hay que mencionar que comúnmente en nuestro país los conflictos se han abordado y resuelto a través de la vía judicial, la misma que podemos decir que sufre de muchas falencias para tratar temas tan complejos, sea por la inexistencia de procesos y legislación válidos para su manejo.

Por otra parte en la vía judicial, se carece de un elemento básico en el manejo de conflictos socioambientales que es el análisis de situación inicial o el diagnóstico del conflicto, es decir que llega a conocimiento de la autoridad versiones de la demanda y del demandado, aunque procesalmente existe la posibilidad de la prueba u otros mecanismos judiciales no se ha podido comprobar que resulten eficiente para el tema.

Con esta inicial reflexión que será ampliada posteriormente podemos encontrarnos con una realidad evidente y es que para intervenir en proceso de manejo de conflictos socioambientales y de conflictos en general, se debe contar con una información inicial, con un análisis o diagnóstico pormenorizado del conflicto, en el mismo que puedan revelarse las causas del conflicto, sus actores que demostrarán sus posiciones, intereses y necesidades, las relaciones de poder, la presencia o nivel de intervención de la autoridad pública, y en general todos aquellos aspectos relevantes que contribuyan para la elaboración de una estrategia de manejo o intervención.

Con los antecedentes que tenemos, podemos reflexionar en el hecho que el manejo de conflictos no siempre involucrará como resultado la búsqueda de acuerdos entre los actores, ya que estos procesos podrían buscar un cambio en las políticas públicas, un reconocimiento de la ancestralidad de un pueblo indígena o el reconocimiento de un territorio.

En definitiva vemos que el manejo de un conflicto por su complejidad va mas allá del enfrentamiento litigioso de un proceso convencional, ya que se puede buscar a través de un correcto manejo, el fortalecimiento de aquellos actores que tienen desventajas en una relación de poder, que seguramente los desfavorezca al momento de intervenir en una mesa de negociación o inclusive en un juicio mismo.

Tomando estos aspectos antes señalados no resulta ilógico pensar en que el manejo del conflicto puede encaminarse al fortalecimiento de actores, con la finalidad de buscar una correcta toma de decisiones por parte de ellos y saber por que camino deben seguir en el tratamiento del conflicto, como vemos con esto puede terminar un inicial manejo del conflicto y en ningún momento hemos llegado a conversar todavía de un acuerdo entre actores.

En este espacio es donde toman forma, importancia y relevancia los métodos alternativos de solución de conflictos. Al referirnos a los MASC⁴⁶, no solo nos referimos a los comúnmente conocidos como la mediación o el arbitraje que inclusive se encuentran contemplados en nuestra legislación, sino también a otras metodologías creadas para cumplir con estos fines como son los procesos colaborativos, la caracterización y manejo de conflictos, el diálogo tripartito, entre otras.

1.3 Aspectos Históricos de los Conflictos Socioambientales por la actividad petrolera en el Ecuador

Con todos los antecedentes referentes a los conflictos socioambientales, es importante mencionar que estos conflictos son diversos y se producen en varias áreas, ya que encontramos a aquellos producidos por la actividad minera, por la tala de árboles, contaminación ambiental por gases y emisiones de humo de vehículos, desechos, entre otros, todos estos considerados como conflictos socioambientales por el impacto producido directamente sobre el medio ambiente y la incidencia de este en el ser humano.

⁴⁶ MASC: Métodos Alternativos de Solución de Conflictos

Dentro de los conflictos socioambientales tenemos a aquellos producidos por la actividad petrolera, a los cuales se les ha dado mayor importancia por la trascendencia que tienen, donde existen la conjunción de muchos elementos tanto a nivel político, social, cultural, ambiental, como económico y legal, entre otros, conflictos que por su importancia hemos decidido tratar en nuestra investigación.

A lo largo de los años hemos sido testigos de los conflictos que ha provocado la actividad petrolera en nuestro país. Se han presentado de muchas maneras, involucrando a una diversidad de actores, y donde no siempre se logra resolver el conflicto en su tema de fondo.

En el país los trabajos petroleros se desarrollan desde 1911, en la Península de Santa Elena, específicamente en la zona de Ancón donde se perfora el primer pozo llamado “ANCON 1”, siendo en el año de 1922 que inicia la producción en esta región del país. La región amazónica ha tomado un protagonismo especial para esta actividad a partir de los inicios de la década de los setenta, ya que en ella se encuentran los mayores yacimientos petroleros del Ecuador, siendo las provincias de Napo y Sucumbíos en las cuales se desarrolla con mayor intensidad la actividad.⁴⁷

No hay duda de que la actividad petrolera, sea de exploración como de explotación, se ha convertido a lo largo de los últimos 25 años – aproximadamente – especialmente en la región amazónica, en la actividad más importante a todo nivel en el Ecuador, pero hay que tomar en cuenta que las actividades de exploración se inicia aproximadamente en los años 1945, con la intervención de la Compañía SHELL la cual no encuentra un crudo⁴⁸ de buena calidad API. En la década de los 60 se da la intervención de la Compañía TEXACO la cual encuentra crudo liviano el mismo que tiene un mayor valor para el mercado, siendo finalmente en el año 1972 cuando empieza de forma total la producción de petróleo en la amazonía ecuatoriana, y

⁴⁷ VAREA, Anamaría y otros, “MAREA NEGRA EN LA AMAZONÍA: Conflictos Socioambientales en la actividad petrolera en el Ecuador”, Editorial Abya-Yala, Pág. 71 y 72, 1995

⁴⁸ Crudo es una acepción que se le da al Petróleo, es decir que se los puede reconocer con estos dos nombres.

adicionalmente se crea CEPE (Corporación Petrolera Estatal Ecuatoriana), la misma que estable un consorcio para controlar las actividades petroleras con la TEXACO, siendo esta etapa considerada como la del “BOOM PETROLERO”, la cual indiscutiblemente ha implicado paralelamente desarrollo económico e incremento de conflictos tanto sociales como ambientales, los que han caracterizado y dado un figura especial a toda actividad que gira alrededor del petróleo.

Es necesario señalar que la historia y los procesos alrededor de la actividad petrolera es muy amplia, dándose día a día y en el transcurso de tantos años una serie de circunstancias y hechos que involucran rondas petroleras, políticas públicas e intervención del Estado, de empresas multinacionales, desarrollo económico para unos y aumento de pobreza para otros, conflictos sociales y ambientales, entre algunas de las consecuencias de esta fiebre y euforia por el “oro negro”.

La documentación sobre los procesos petroleros en el Ecuador es sumamente amplia, en los que encontraremos detalles exactos sobre cada una de las circunstancias; sin embargo concentrándonos en el tema que nos corresponde analizar hay aspectos e implicaciones básicas con respecto a la actividad petrolera que son importantes de señalar.

Al referirnos a “implicaciones”, queremos hacer relación a la “causa - efecto” de la actividad petrolera tanto en el tema social como ambiental que se ha convertido en uno de los mayores factores generadores de conflictos socioambientales.

Para poder organizar un poco estos aspectos, es importante tomar como punto de análisis la implicación que ha tenido la actividad con referencia a la colonización de la amazonía, los efectos socioambientales y la presión ejercida sobre áreas protegidas. Nosotros por aspectos estrictamente de investigación los hemos separado, pero es claro que en la práctica se encuentran estrechamente relacionados.

Al hablar de colonización estamos frente a un proceso histórico que se ha dado a nivel mundial y del cual nuestro país, en especial, en una zona tan rica en recursos

naturales como la amazonía no podía quedar ajena a estos procesos. En nuestra amazonía, cuenta la historia, que inicia la colonización por incursiones religiosas, que posteriormente se incrementaría por la búsqueda y extracción de materias primas, pero las actividades de exploración y explotación petrolera constituyen sin duda el punto focal de mayor presión para los procesos de colonización de la amazonía ecuatoriana.

Dentro de la colonización en la amazonía influyeron algunos aspectos coyunturales a lo largo de los años, primero la apertura de caminos y vías fruto de la necesidad de la industria petrolera para realizar su trabajo, esto sin duda facilitó los procesos migratorios, otro de los elementos fue la posición de evangelizar y culturizar a comunidades indígenas como la Huaorani, idea que parte tanto de las compañías petroleras como del mismo Estado.

En esta línea existe una gran influencia del Estado, ya que surge la política de “seguridad nacional” en sectores de frontera a raíz de la gran pérdida de territorio en 1942, con la cual, la intención era la de poblar esas tierras, lo que provoca un aumento de presión en los procesos migratorios y por ende un deterioro considerable en los recursos naturales de la zona⁴⁹, siendo estas acciones factores generadores de conflictos socioambientales.

“El impacto social relacionado con la actividad petrolera incluye cómo esta actividad afecta a la población local, en términos de salud, bienestar y calidad de vida; cómo el deterioro de entorno natural les afecta y de qué manera todo esto incide en su economía”⁵⁰.

Las implicaciones socioambientales son notorias, siendo otra de las características que han marcado profundamente la actividad petrolera en la amazonía ecuatoriana ya que se han modificado las estructuras sociales indígenas, ha existido un alto flujo

⁴⁹ VAREA, Anamaría y otros, “MAREA NEGRA EN LA AMAZONÍA: Conflictos Socioambientales en la actividad petrolera en el Ecuador”, Editorial Abya-Yala, Pág. 76, 77 y 78, 1995

⁵⁰ VAREA, Anamaría y otros, “MAREA NEGRA EN LA AMAZONÍA: Conflictos Socioambientales en la actividad petrolera en el Ecuador”, Editorial Abya-Yala, Pág. 79, 1995

migratorio de indígenas desplazados por colonos, que han ingresan por las vías de acceso construidas por las petroleras. La contaminación de la zona tanto en suelos, agua y aire ha provocado daños en cultivos, muerte de animales y enfermedades en el ser humano.

Adicional, otra de las implicaciones que tiene la industria petrolera en el impacto social es el tema económico, por experiencia personal y viendo la realidad alrededor del tema, se constituye en un serio conflicto, ya que por un lado se afecta a la sociedad en los aspectos antes mencionado y por otra parte no se ha mejorado el nivel ni la calidad de vida de la sociedad común en la zona ya que es claro que los beneficios económicos provenientes de esta actividad llegan a la población de una forma mínima, porque los réditos en su mayoría son para las compañías mientras que los ingresos que le corresponden al estado se utilizan en distintos aspectos sin que el dinero sea reinvertido en los lugares donde se ejecutan los trabajos petroleros.

Con esto queremos decir que no existe una redistribución de las ganancias obtenidas a favor de la población que por cierto es la más afectada por la actividad petrolera.

Finalmente dentro de estos aspectos históricos hay que hacer referencia a la situación de las áreas de reserva natural, las mismas que de acuerdo a la ley tienen una categoría especial de manejo, con la finalidad de preservar y conservar su alta biodiversidad y sus ecosistemas, esto no es una realidad la cual se encuentra contemplada tanto en la actual Ley de Gestión Ambiental y en el Proyecto de Ley de Biodiversidad.

Como ejemplo podemos citar a: parques nacionales, reserva biológica, reservas de producción faunística, reserva ecológica, entre otras, las cuales se encuentran contempladas en nuestra legislación y que evidencian su importancia.

Otro factor a considerar es que dentro de estas áreas tienen sus territorios y viven grupos indígenas ancestrales como: en la reserva Cuyabeno territorio Siona-Secoya, en la reserva Cayambe-Coca área ocupada por el pueblo Cofán, el Parque Nacional

Yasuní territorio Huaorani⁵¹, lo cual hace que estas áreas destinadas a la conservación sean mucho más importantes para el país.

El dilema y la gran contradicción surge por las “permisivas” políticas estatales que no han sido claras, en la pugna de intereses entre áreas protegidas y actividad petrolera, cuando se otorgan concesiones para exploración y explotación de petróleo, claro ejemplo lo que acontece en la actualidad con el Parque Nacional Yasuní y la Compañía Petrobras.

Este tema es sumamente polémico y más adelante lo estaremos analizando con mayor profundidad, ya que aquí se involucran otros elementos como el de los intereses públicos y privados, las relaciones de poder, las políticas públicas, comunidades y un evidente e irrefrenable “foco de conflicto”, pero lo que si es innegable es que la actividad petrolera a causado un grave impacto en las áreas protegidas en la amazonía ecuatoriana.

Como hemos vistos existen varias implicaciones trascendentales en cuanto al tema social y ambiental, pero no debemos olvidarnos de que existe una problemática que gira en relación al “daño ambiental” que se produce por la actividad petrolera, que generalmente se la asocia con los derrames de crudo.

Referente a lo antes mencionado, es importante hacer una pequeña explicación, tomando en cuenta que se han debido realizar las respectivas consultas a expertos en la materia de lo que es la actividad petrolera para poder entender en que consiste y cuales son sus riesgos.

Inicialmente hay que considerar que para producir un campo petrolero se debe calcular aproximadamente 5 años de estudio y exploración. Los procesos parten de la adjudicación de un bloque, estas áreas de terreno eran inmensas hasta 800 mil has cuando inicia la exploración en la amazonía, pero luego por política las reducen a 200 mil has. En ese entonces se dieron, a través de contratos para exploración o “los

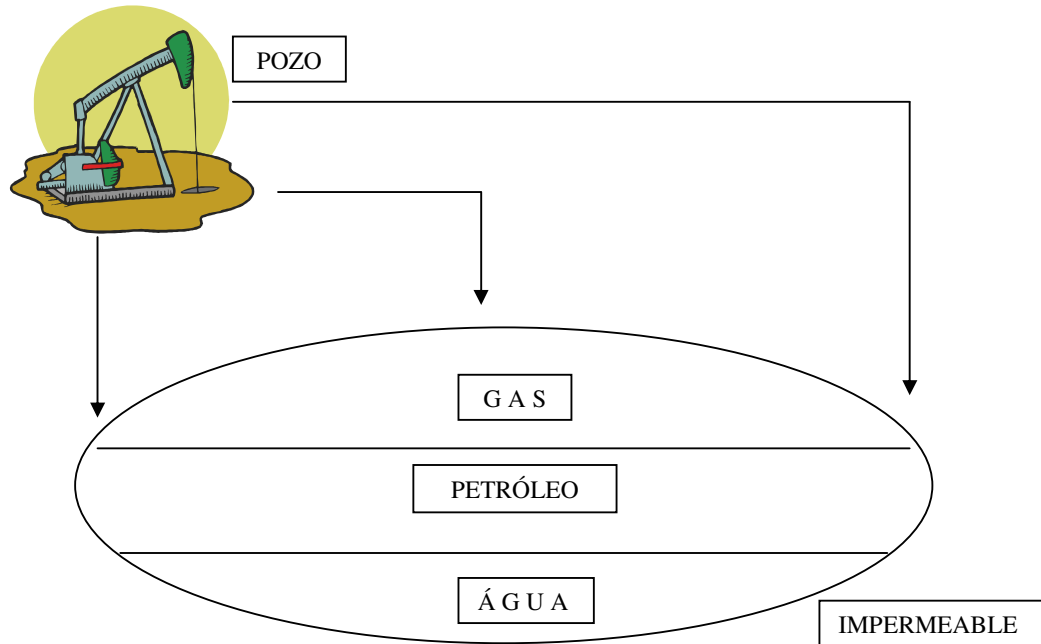
⁵¹ VAREA, Anamaría y otros, “MAREA NEGRA EN LA AMAZONÍA: Conflictos Socioambientales en la actividad petrolera en el Ecuador”, Editorial Abya-Yala, Pág. 88, 1995

famosos contratos de concesión” que eran los contratos que se utilizaban comúnmente, pero en la actualidad ya no hay solo concesión sino prestación de servicios, contratos de asociación y contratos por obra fija.

La parte técnica inicia con un estudio llamado “Sísmica” el cual determina formaciones o yacimientos que pueden contener hidrocarburos o carburos de hidrógeno pudiendo ser estos sólidos como el asfalto, líquidos como el petróleo o crudo y gaseosos como el gas.

A continuación se da paso a la “Perforación exploratoria” y es donde se va a determinar verdaderamente si existe o no el hidrocarburo la clase de este, además se determina el yacimiento hidrocarburífero, tomando en cuenta que no existen los bolsones de petróleo como se los conoce comúnmente, al crudo se lo encuentra como si fuera un “cubo de azúcar”, ya que las principales características del yacimiento deben ser la porosidad y la permeabilidad, pudiendo ser esto de compuestos arenosos o de caliza.

La segunda parte de la exploración es determinar la potencialidad del yacimiento, lo cual implica que se debe perforar más pozos para demostrar que cantidad de petróleo existe en el yacimiento, siendo el objetivo determinar el tamaño del yacimiento y después de hacer los estudios respectivos determinar cuanto crudo existe, su calidad, cuanto gas y donde llega el agua, ya que estos tres elementos dan la estructura o son los componentes de un pozo, encontrándose primero el gas, luego el petróleo y posteriormente el agua, con lo cual se puede determinar el tamaño y la potencialidad, lo cual se ilustra con el siguiente gráfico:



Es evidente que hasta aquí esta fase exploratoria causa daños ambientales por la ruptura del estado natural de los ecosistemas donde se debe buscar el hidrocarburo, pero también se debe considerar que si no se cumple con estos procedimientos no existe otra manera de hacerlo.

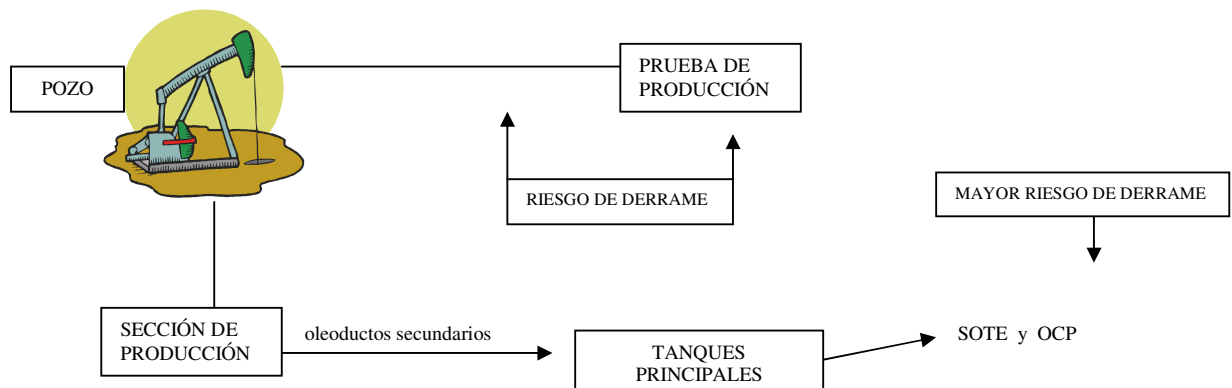
Una vez cumplida con la etapa de la sísmica y perforación exploratoria se lleva a cabo la etapa Prueba de Producción, para la cual se deben transportar tanques para almacenar el petróleo, pero hay ocasiones que el pozo arroja gran cantidad de crudo y es ahí cuando se deben construir las famosas piscinas para almacenar el crudo que sale del yacimiento, la técnica para colocar estas piscinas es construyéndolas en la tierra a las cuales se envía el agua que se separa con anterioridad del petróleo en los tanques de almacenamiento.

En la superficie donde se encuentra colocado el pozo existen válvulas de control, estos preventores se los utiliza para evitar reventones, no se debe derramar el crudo si todo esta bajo control y si se han observado todas las medidas de seguridad. En

esta fase o etapa de producción, se determina cuanto petróleo puede producir el yacimiento en el cual se esta trabajando.

Después de cumplir con estas etapas de exploración y de prueba de producción es cuando se llega a la parte realmente peligrosa, ya que se deben construir las instalaciones de producción y transporte de petróleo, y donde se considera que existe un mayor peligro de contaminación ambiental, debido a que se instala un sistema de recolección en la estación de producción para acumular el crudo en tanques metálicos.

Los derrames se producen generalmente por ruptura de los oleoductos secundarios, por descuido o mal manejo de las operaciones. Sin embargo en la fase de producción, en el transporte del petróleo es donde mayor riesgo de derrames existe, esto es en el SOTE⁵² y en el OCP⁵³ siendo este último de todas maneras más seguro ya que su técnica constructiva es subterránea, dicho procedimiento se puede clarificar con el siguiente gráfico:



Con los distintos análisis realizados entendemos que los conflictos socioambientales producidos por la actividad petrolera se dan por distintas causas, entre las principales encontramos: la colonización de tierras, el desplazamiento de comunidades indígenas, la pérdida de territorio por el famoso “derecho de vía” con todas sus variaciones y características, los intereses y prioridades nacionales en cuanto a la conservación de áreas naturales frente al desarrollo a través de la actividad petrolera,

⁵² SOTE: Sistema de Oleoducto Trans Ecuatoriano

⁵³ OCP: Oleoducto de Crudos Pesados

los daños ambientales, y es aquí donde nace la necesidad de contemplar mecanismos y herramientas para el manejo de estos conflictos que como vemos son generalmente complejos.

Ahora es importante señalar que las compañías petroleras en el Ecuador han venido manejando conflictos socioambientales provenientes de su propia actividad.

Cuando hablamos de los conflictos que tienen las petroleras debemos realizar una simple división entre los que son publicitados o de conocimiento de toda la sociedad y de aquellos que muchos de nosotros no sabemos que existen, entonces, aquellos que son de conocimiento público – claro ejemplo el caso TEXACO – las compañías dependiendo también del grado de exteriorización por parte de los afectados y las vías que estos escojan para el reclamo de sus derechos han tenido que enfrentarse a acciones legales entre las cuales la más común es la acción de amparo, es decir que en este tipo de casos es común que las acciones sean judicializadas y es dentro de esta esfera que se manejan los conflictos.

Primero hay que mencionar que de estos tipos de conflictos, existen más de lo que podemos imaginar, se desatan a toda hora, en todo momento y que además son de muchas clases, desde la autorización para realizar trabajos de sísmica, abrir trochas o senderos, carreteras y los conocidos derrames de crudo.

Es indiscutible la existencia de estos conflictos, sea este presente o futuro y seguramente esta es la razón para que todas las compañías operadoras en el Ecuador cuenten con una oficina permanente bien sea como departamento, gerencia o área de: “Relaciones Comunitarias”, las mismas que por una parte se dedican a impulsar proyectos sociales y desarrollo comunitario, y por otra dedican gran cantidad de recursos económicos y humanos para mantener diálogos y negociaciones con comunidades, es decir a “manejar conflictos”, al amparo de las políticas y estrategias de las distintas compañías, estos departamentos funcionan bien y son un gran aporte para la buena vecindad entre compañías y comunidades.

1.3.1 Marco Jurídico Ecuatoriano frente a los Conflictos Socioambientales en la actividad Petrolera.

Son importantes los diferentes preceptos que hemos anotado desde el punto de vista de la doctrina, los cuales nos han resultado prácticos para entender varios conceptos, siendo también importante que mantengamos claros algunos mandatos que hace nuestra legislación.

Como era previsible después del respectivo análisis, no se han encontrado normas o leyes que regulen a los conflictos socioambientales como tales, considerando el hecho de que en el país existen normas que regulan una serie de aspecto relacionados con la actividad petrolera, lo cual desde un primer punto de vista aparentaría que esta materia no es considerada importante, sin embargo el análisis sirve para evidenciar que la ley muy difícilmente podría llegar a crear un marco capaz de regular un tema con tantas variables como lo son los conflictos socioambientales.

La situación referida también nos conduce a pensar que si los conflictos socioambientales provenientes de la actividad petrolera en nuestro país no han sido manejados o resueltos por otro tipo de vías es por la carencia de las misma y por esa razón es que en la mayoría de situaciones se las a tratado por la vía convencional, donde en muchos casos se pudo haber resuelto el problema ambiental, el daño ambiental o la causa por la que se produjo el conflicto pero no necesariamente el conflicto socioambiental.

Justamente basados en estas premisa es que se ve la necesidad de realizar un análisis de la legislación vigente, con el único objetivo de determinar cual es el alcance de nuestras leyes para el tratamiento de los conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera en el Ecuador.

De acuerdo con el Código Civil Ecuatoriano Codificado en el año 2005 en su artículo 1 menciona que: “la Ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada

en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”⁵⁴, es decir que mediante este concepto todo aquello que se encuentre contemplado en la ley se debe cumplir y que los procedimientos manifestados en ella son los que se deberán seguir, dependiendo del caso.

Dentro del tema que nos compete se consideran normas básicas que se encuentra separadas en algunos cuerpos jurídicos como: la Constitución de la República, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Hidrocarburos y su respectivo reglamento y Ley de Arbitraje y Mediación, como principales.

Como hemos mencionado todas aquellas normas contempladas en las leyes referidas lo que hacen es regular ciertas actuaciones tanto de parte de la autoridad competente del Estado en la materia y de algunos de los actores que se involucran en la actividad como son las compañías petroleras, es decir que se mencionan los derechos, responsabilidades, procedimientos, sanciones, etc., que deben ser cumplidas y respetadas por todas las actores participantes.

Jerárquicamente la Constitución de la República, como ley suprema del Estado, inicialmente manifiesta en sus artículos 36 numeral 6 y 86 inciso 1, que tanto vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado⁵⁵⁻⁵⁶ como en el artículo 247 inciso 1 y 2 que el desarrollo económico a través del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables⁵⁷, son de interés nacional y que de acuerdo a los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución el Estado el encargado de vigilar el fiel cumplimiento de los derechos, garantías y deberes constitucionales⁵⁸.

⁵⁴ CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO CODIFICADO, Título Preliminar, artículo 1, Suplemento del Registro Oficial No. 46 del 24 de junio del 2005

⁵⁵ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 2, artículo 23 numeral 6, del 11 de agosto de 1998, CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

⁵⁶ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 5, artículo 86 inciso 1, del 11 de agosto de 1998, CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

⁵⁷ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título XII, Capítulo 1, artículo 247 inciso 1 y 2, 11 de agosto de 1998, CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

⁵⁸ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 1, artículos 16, 17, 18 y 19, 11 de agosto de 1998, CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

A pesar de que la norma constitucional prevé este tipo de garantías, que ya las analizamos detalladamente en un tema anterior, no existe ningún tipo de norma que considere lo relacionado con los conflictos socioambientales, e inicialmente es comprensible ya que la constitución expresa una normativa general de aplicación siendo las leyes especiales las encargadas de este tipo de asuntos.

La ley de Gestión Ambiental “establece los principios y directrices de política ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”,⁵⁹

Adicionalmente en cuanto a los recursos naturales no renovables, la Ley de Gestión Ambiental Codificada manifiesta en su artículo 6 que el aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrá lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económica y de evaluación de impactos ambientales.⁶⁰

Siendo la Ley de Gestión Ambiental la principal norma encaminada a la regulación ambiental en el país no contempla tampoco nada referente a los conflictos socioambientales, a pesar de esto, marca ciertos parámetros, como en su artículo 7 que deben ser observados en el tema de la actividad petrolera, es así que el desarrollo sustentable⁶¹ se convertiría en un eje principal de las políticas públicas referentes a la actividad hidrocarburífera, a las responsabilidades de control y seguimiento de las normas relacionadas con actividades altamente contaminantes por parte del ministro

⁵⁹ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA “Ámbito y Principios de la Ley”, artículo 1, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁶⁰ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “Ámbito y Principios de la Ley”, artículo 6, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁶¹ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “Régimen institucional de la Gestión Ambiental”, Título II, Capítulo I, artículo 7, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

del ambiente⁶², evaluaciones de impacto ambiental⁶³, así como la posibilidad de realizar denuncias en caso de conocer sobre algún daño ambiental⁶⁴.

De igual forma se contemplan dentro de esta Ley procedimientos tanto en acciones a través de la vía civil⁶⁵ como aquellas contempladas para acciones administrativas y contenciosas administrativas⁶⁶, sin que estos procedimientos contemplen la posibilidad de algún tipo de intervención o manejo alternativo para los conflictos socioambientales.

El “Proyecto de Ley para la Conservación y manejo sustentable de la Biodiversidad” a diferencia de la Ley de Gestión Ambiental, da una relevancia vital a todo lo que significa la “Biodiversidad”, en la cual existe una normativa reguladora, procedimental y sancionadora, sin embargo tampoco se ha contemplado temas importantes como el manejo o la intervención para los conflictos socioambientales, e inclusive siendo un tema trascendental para la materia hubiese sido importante que el concepto de este tipo de conflictos conste en el glosario de definiciones que se encuentra en el proyecto de ley.⁶⁷

Esto en cuanto a las normas más relevantes en materia ambiental, pero también hay que realizar una consideración referente a las normas legales que rigen la actividad hidrocarburífera. Los cuerpos legales o leyes especiales de la materia son la Ley de Hidrocarburos y su reglamento.

⁶² LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “Régimen institucional de la Gestión Ambiental”, Título II, Capítulo II, artículo 9 numeral 11, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁶³ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “De la Evaluación de impacto ambiental y del control ambiental”, Título III, Capítulo II, artículo 19 y siguientes, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁶⁴ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “De la Información y vigilancia ambiental”, Título V, artículo 40, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁶⁵ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “De la protección de los derechos ambientales”, Título VI, Capítulo I, artículo 43, Codificación 19 Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁶⁶ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “De la protección de los derechos ambientales”, Título VI, Capítulo II, artículos 44 y siguientes, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁶⁷ PROYECTO DE LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD.

Dentro la Ley de Hidrocarburos reformada en mayo del 2006 la tónica es bastante similar, ya que existe una estructura jurídica en cuanto al daño ambiental, sus causantes, afectados, procedimientos generales, sanciones e indemnizaciones⁶⁸, y lo cual es evidente ya que tratadistas especialistas en el tema citan las posibilidades existentes al amparo de la ley con respecto a este tema⁶⁹, pero hay que reconocer que hay una salvedad en cuanto al tema socioambiental, ya que el Reglamento Sustitutivo del reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas expedido en el año 2001 manifiesta en su artículos 5 y 6 respectivamente que se debe tomar con mayor interés aspectos como las áreas de especial protección por su alta biodiversidad y ecológicamente sensibles, además que se considera el aspecto social especialmente para grupos indígenas con alto valor cultural como son los grupos ancestrales, y se evidencia la intención de buscar las “vías de solución” para que no exista un severo impacto socioambiental⁷⁰, así como impulsar los procesos de participación de la sociedad civil que se ve involucrada en la actividad petrolera.⁷¹

Esto es una muestra de que existe conciencia de que los aspectos socioambientales muchas veces van mas allá del daño mismo como ya lo hemos anotado anteriormente, además que si se evidencia que ya no contamos con leyes sueltas y contradictorias, sino mas bien que se viene trabajando por tener una unificación de criterios a pesar de que en la realidad no sea tan fácil, sobretodo en cuanto a las acciones u omisiones generadoras de un problema y posteriormente de un conflicto socioambiental.

Uno de las leyes que posiblemente tenga un mayor acercamiento al tema es la Ley de Arbitraje y Mediación vigente en nuestro país, y decimos posiblemente ya que es una ley general y que adicionalmente podemos interpretar de que a través de estos

⁶⁸ LEY DE HIDROCARBUROS, artículo 77, Decreto Supremo No. 2967, publicado en el Registro Oficial 711 del 15 de noviembre de 1978, y reformado al 10 de mayo de 2006

⁶⁹ CALISTO, Hernán y otros, “Manual de Litigio Ambiental”, Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Pág. 112, 113 y 114, Quito – Ecuador, marzo 2002

⁷⁰ REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR, artículo 5, Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de Febrero del 2001

⁷¹ REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR, artículo 6, Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de Febrero del 2001

Métodos Alternos de Solución de Conflictos se puede abordar cualquier caso en materia transigible⁷², los conflictos socioambientales producidos alrededor de la actividad petrolera se los puede manejar por esta vía no convencional y que colabora con la administración de justicia.

Esta es una pequeña premisa ya que posteriormente nos dedicaremos a realizar un análisis detallado de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos tanto de los que se encuentran contemplados en nuestra legislación como aquellas metodologías desarrolladas con la finalidad de intervenir en el manejo de los conflictos socioambientales.

No queremos realizar un juicio de valor hacia el marco jurídico existente, que norme a los conflictos socioambientales en la actividad petrolera, ya que este no es tema sencillo y que como hemos reiterado durante algunas ocasiones no es lo mismo problema que conflicto, y eso es seguramente lo que nuestra legislación ha normado, es decir que tenemos un marco jurídico bastante completo para el tratamiento de los problemas o daños ambientales – esto mencionado de forma general – a través de la vías convencionales judiciales o administrativas con lo cual se pretende dar solución a estos problemas.

Pero a pesar de estos esfuerzos jurídicos debemos comprender que el conflicto va mucho mas allá, por lo tanto al no existir una legislación apropiada para el tratamiento de estos conflictos se ha encontrado la necesidad de desarrollar nuevas alternativas las cuales se convertirán en herramientas válidas con la intención de brindar un manejo eficiente a los conflictos socioambientales.

⁷² Materia Transigible: susceptible de acuerdo voluntario entre las partes involucradas.

Capítulo II

2. La Resolución de Conflictos

Antes de iniciar un análisis sobre la resolución de conflictos, consideramos importante recordar algunos aspectos relevantes que ya han sido tratados en el Capítulo Primero de esta investigación, con la finalidad de justificar de forma global la necesidad de integrar herramientas alternativas que colaboren con la resolución de los conflictos socioambientales producidos por el desarrollo de la actividad petrolera en la amazonía ecuatoriana.

El tener claro ciertos conceptos y definiciones referentes a las diversas teorías sobre aspectos que se mezclan en los conflictos socioambientales, marca un punto de partida fundamental para poder introducirnos en la resolución de los mismos, a la vez que hacen que podamos cuestionar algunos de los términos ya que se puede considerar que estos no llegan a cubrir totalmente las expectativas y los contextos en los cuales debemos involucrarnos.

El hecho de que en esta temática se involucren varios elementos de orden social, ambiental, político, entre otros, hacen que la complejidad de los conflictos sea lo suficientemente grande como para pensar en la necesidad de buscar las herramientas que lleven a la resolución de estos conflictos, esto por el simple hecho (y que se ha demostrado), de que tanto la legislación actual como los órganos de justicia convencional no han logrado abarcar integralmente estos temas, ya que hemos visto que con los procedimientos que contamos se pueden solucionar en gran parte los problemas o daños ambientales, pero no se logra dar el tratamiento o la cura ideal a los conflictos provocados por esas causas.

Haciendo algunas consideraciones podemos decir que toda sociedad o grupo social al verse involucrado en conflictos, y que dentro de estos se involucran elementos que marcan aquellas características que individualizan y particularizan a cada conflicto, y que por noción natural, aquellos que se encuentran inmersos han buscado siempre la

forma de resolverlos y salir de ellos, sin la necesidad obligatoria de la utilización de leyes convencionales ya que es común, de forma general de que a nadie le gusta permanecer constantemente involucrado en un conflicto⁷³ y es aquí donde nace un primer acercamiento a los que posteriormente veremos como los MASC⁷⁴.

Dentro de esta temática y por los análisis que hemos hecho anteriormente es evidente que la resolución de conflictos y el manejo de conflictos no es lo mismo, ya que mientras el manejo involucra un conjunto de estrategias y actividades para abordar conflictos, encaminar procesos de discusión y toma de decisiones, entre otras características⁷⁵, la resolución es una acción de resolver⁷⁶, que también involucra llevar un proceso. Esto no resta mérito a ninguna de las dos posiciones, simplemente son unas metodologías diferentes de trabajo y que su utilización dependerá de las necesidades, objetivos y características de cada conflicto y de los grupos interventores.

Entonces encontramos que existe una diferencia, ya que el manejo de conflictos no siempre busca la resolución o el acuerdo, mientras que aparentemente este sería el fin primordial de la resolución de conflictos. Con respecto a esto podríamos tener una gran discusión, pero considero que tanto el manejo como la resolución de conflictos son temas complementarios y justamente es que además de los MASC se han desarrollado otras metodologías para poder dar un tratamiento integral a los conflictos socioambientales.

El inmiscuirse en estos procesos supone dejar de lado esquemas poco flexibles, que es lo que ha venido sucediendo con la justicia convencional, ya que los dos procesos son validos, aplicables y complementarios en búsqueda de los mismos fines, que proporcionarán cada uno desde su óptica las herramientas necesarias y que será evidenciado al momento de realizar el análisis tanto de los Métodos Alternos de

⁷³ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 62 y 63

⁷⁴ MASC: Métodos Alternos de Solución de Conflictos

⁷⁵ Esta concepción del manejo de conflictos proviene del análisis previo efectuado en Capítulo 1 en tema correspondiente.

⁷⁶ DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Aristos 2000, Editorial Ramón Sopena S.A., Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 535

Solución de Conflictos como de otras metodologías desarrolladas para el manejo de conflictos socioambientales y estas a su vez aplicadas dentro de la actividad petrolera en el Ecuador.

2.1 Modos de Resolución de Conflictos

Si tomamos como premisa, dentro del manejo y resolución de conflictos, que lo principal es intervenir y resolver los conflictos, la pregunta inmediata que surge es el: ¿cómo?, es decir de que manera, cuál es la forma o el camino apropiado que se debe buscar para tratar el conflicto, es decir que lo que se pretende es buscar el “modo” idóneo que nos permita de una u otra manera involucrarnos dentro de una situación delicada, por lo que el poder elegir el “modo” se transforma en fundamental.

De manera general hemos mencionado que ningún conflicto es igual, que sus características, actores, elementos y en sí todas sus connotaciones varían de un conflicto a otro por lo que el modo en el que se los pretende intervenir o resolver también cambiará dependiendo del conflicto.

Estas apreciaciones nos hacen pensar que indiscutiblemente antes de tomar una decisión sobre que modo se empleará para resolver o intervenir en el conflicto, debemos tener un acercamiento que nos permita entender el contexto sobre el cual debemos trabajar, lo cual requiere que estemos en la capacidad de aplicar cierto tipo de metodologías que nos permitan contar con la información y los elementos suficientes para poder elegir el camino, es decir debemos realizar un análisis de la situación y un diagnóstico, los mismos que cuentan con metodologías especiales para hacerlo y que mas adelante analizaremos con detenimiento.

Tomando en cuenta la complejidad y el significado de un conflicto, además de los roles que las sociedades han jugado en la administración de justicia se puede mencionar que existen dos formas de resolver conflictos: modos formales y modos no formales, los primeros basan su diferencia en la aplicación de un derecho

convencional y mientras que los otros son creados y adaptados por los mismos involucrados a sus necesidades de resolver conflictos.⁷⁷

Al hablar de **modos formales** es evidente que nos estamos refiriendo a que existen vías a través de las cuales se han resuelto conflictos, entre las que podemos encontrar la vía judicial sea civil, penal o constitucional y la vía administrativa; procedimientos que han sido legislados, utilizados y aceptados comúnmente por todos aquellos que de una u otra manera mantenemos una visión occidental del derecho.

Estos modos formales que se han establecido jurídicamente están encaminados a acoger demandas y denuncias sobre algún problema o daño ambiental que posteriormente se sustanciarán en base a un proceso “formal” que ha sido contemplado y normado con anterioridad en la legislación, en tal virtud con estos modos de resolver conflictos las partes deben someterse a requisitos y procesos preestablecidos con la finalidad de recibir un dictamen o sentencia que responda a sus requerimientos.

Como hemos mencionado los modos formales de resolución de conflictos que en nuestra legislación se establecen se ejercen y ejecutan a través de la vía judicial y administrativa.

La **vía judicial** es uno de los modos formales más conocidos y utilizados en nuestro país para la resolución de conflictos, a través de órganos Estatales de administración de justicia como son los tribunales y las cortes, en las cuales se sustancian procesos donde el afectado acude para la reparación de daños o la declaración o consagración de derechos de los cuales se le ha privado.

Dentro de la vía judicial el Estado es uno de los actores con mayor relevancia ya que este es el encargado de la administración de justicia y además de buscar los mecanismos necesarios para el cumplimiento y ejecución de sus resoluciones a las cuales las partes involucradas deben someterse obligatoriamente.

⁷⁷ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 63 y 64

Esta vía judicial contempla por esencia tres tipos de acciones que se las considera de las más importantes, sobretodo para el tema materia de esta investigación: la civil, la penal y constitucional, las mismas que se encuentran reguladas por sus respectivas leyes y procedimientos.

Como ejemplo podemos citar que a través de la acción civil contemplada en la Ley de Gestión Ambiental y en el Código Civil Ecuatoriano se pudo realizar el reclamo de daños y perjuicios⁷⁸⁻⁷⁹ por causa de un daño ambiental que afecte los intereses personales, materiales o ambientales de una persona o grupo social, lo cual es contemplado en la Ley de Gestión Ambiental, pero esta acción civil también se encuentra contemplada en el Código Civil.

En el caso de las acciones penales la situación es similar, sin embargo en el actual Código Penal reformado en marzo del 2006 se contempla un capítulo⁸⁰ exclusivo en el cual se expresan ciertas circunstancias que constituyen delitos para que aquellas personas afectadas puedan demandar.

La acción de amparo es de tipo Constitucional, y está encaminada a evitar vulneración de los derechos y garantías contempladas en la Constitución de la República, a través de la cual se adoptan medidas urgentes para cesar, evitar o remediar un daño causado por acción u omisión de funcionarios públicos o delegados de estos o inclusive de personas particulares cuyos actos atenten severamente contra intereses comunitarios, colectivos o derechos difusos.⁸¹

⁷⁸ LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, “De la Protección de los Derechos Ambientales”, Título VI, Capítulo I, artículo 43, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004

⁷⁹ CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO CODIFICADO, Libro IV, Título XII artículo 1572, Suplemento del Registro Oficial No. 46 del 24 de junio del 2005

⁸⁰ CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Título V, Capítulo X-A, “De los Delitos Contra el Medio Ambiente”, *Capítulo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 2000*, Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de 1971, reformado al 17 de marzo de 2006

⁸¹ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título III, Capítulo 6, sección tercera, artículo 95, del 11 de agosto de 1998, CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

Como vemos, lo antes citado, existen acciones que de una u otra manera coadyuvan desde un punto de vista formal, a la resolución de los conflictos. Pero aún queda la duda si este tipo de vías pueden atacar integralmente al conflicto para aclarar el problema es evidente que se necesita un complemento con otro tipo de acciones.

La **vía administrativa** es también un modo de resolver conflictos, se acciona a través de entidades e instituciones estatales, para el caso del medio ambiente, esta vía se la puede ejercer a través de los departamentos competentes del Ministerio del Ambiente, en los cuales se puede presentar denuncias por algún daño ambiental con el objeto que esta instancia lo procese y emita una resolución con la finalidad de remediar el daño causado o la revocatoria de alguna declaración o acto emitido por parte de la autoridad que atente contra el medio ambiente.

A pesar de que este tipo de procedimientos no son de vía judicial existe una posibilidad de apelar las resoluciones o dictámenes de la autoridad competente a través de un trámite contencioso administrativo que se lo lleva en el tribunal correspondiente.

Pero este tipo de acciones administrativas no involucran solamente a las acciones u omisiones emitidas por la administración pública y sus funcionarios sino que también a través de estas acciones se puede denunciar a particulares que estén atentando contra intereses colectivos y provocando daños al medio ambiente, por ejemplo es común que un jefe Distrital del Ministerio del Ambiente reciba denuncia sobre contaminación de aguas o tala ilegal de bosques, etc., ámbito en el cual es competente para conocer y juzgar sobre el caso.

De forma general se debe entender que a través de esta vía las entidades o instituciones del estado sean dependientes como en el caso del Ministerio del Ambiente o autónomas como los gobiernos locales, tienen la capacidad, dependiendo de sus propias competencias, conocer, procesar y sancionar sobre algún caso que constituyéndose como conflicto socioambiental se encuentre reglamentado o legislado en las normas nacionales o sectoriales.

Los **modos no formales** o también llamados informales, son otros mecanismos en base a los cuales se trata de resolver conflictos, sin embargo el hecho de que se los considere informales no quiere decir que nuestra legislación no los reconozca, la diferencia es que los procedimientos en estos modos son flexibles y se basan generalmente en el acuerdo de las partes y en su protagónica participación.

Dentro de estos modos encontramos a los métodos alternativos de solución de conflictos y otras metodologías que han sido aplicadas al manejo y resolución de conflictos socioambientales que los analizaremos a continuación y que posteriormente los vincularemos con la actividad petrolera en Ecuador mediante el análisis de casos.

2.2. Métodos Alternos de Solución de Conflictos

Para iniciar el análisis de los Métodos Alternos de Solución de Conflictos (MASC) o medios no formales (informales) queremos mantener el enfoque de este estudio desde el contexto socioambiental, para de esta manera tener mayor claridad y precisión en nuestro tema de investigación.

Para realizar un primer acercamiento hacia estos métodos, hay que mencionar que a pesar de que algunos de ellos se encuentran contemplados en nuestra legislación esto no implica necesariamente que mantienen una relación absoluta con la administración de justicia, y por esta simple razón es que se los llama “alternativos” al Arbitraje y a la Mediación.

Se puede deducir que estos métodos alternos de solución de conflictos surgen de la necesidad de colaborar con la administración de justicia al cumplimiento de sus fines, ya que existen varios factores reconocidos por la sociedad en general, que entorpecen el cumplimiento, como son los excesivos retrasos en la evacuación de los procesos, crisis inherente a la corrupción inmiscuida en los órganos de justicia y en general, una expresa falta de credibilidad, por lo que estos métodos se han adoptado

en nuestra legislación por un inicial y estricto sentido de necesidad en búsqueda de un beneficio ciudadano.

A pesar de que este tipo de métodos han sido utilizados a lo largo de la historia a través de distintas manifestaciones, si tratamos de “formalizar” su origen se podría mencionar que estos se articulan con mayor fuerza y surgen como tales, por lo menos en la época contemporánea en los Estados Unidos de Norte América, en abril de 1976 cuando se conmemora el discurso de Roscoe E. Pound sobre “las causas de la insatisfacción popular con la administración de justicia en Saint Paul Minnesota” en donde se articulan valiosas ideas para proporcionar alternativas distintas para el común tratamiento de conflictos.⁸²

Los medios alternativos de solución de conflictos son entonces, un conjunto de estrategias, tácticas, métodos, reglas y procesos para tratar o abordar la resolución o manejo de un determinado conflicto⁸³, a los cuales las partes involucradas en un conflicto socioambiental pueden acceder de forma libre y voluntaria, con la perspectiva de obtener una intervención adecuada, con un alto nivel de participación de las partes con lo cual se validarán de mejor manera aquellos consensos a los que se puedan llegar por el hecho de haber dado mucha mas relevancia tanto a los intereses como necesidades de los actores.

Como ya lo han recalcado desde hace algunos años estudiosos sobre el tema los métodos alternativos de solución de conflictos “son aquellos mecanismos extrajudiciales que las ciencias sociales y jurídicas ofrecen a los jueces y a las personas en general como alternativas viables para descongestionar su función y ayudarles en su importante tarea, desterrando la absurda creencia que la solución de las controversias interpersonales deben ser atendidas con exclusividad”⁸⁴.

⁸² VINTIMILLA, Jaime, (Compilador), “Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador”, Programa Regional de Justicia de Paz 2002 – 2005, Pág. 10 y 11

⁸³ CONAM, Consejo Nacional del Ambiente – Perú, “Manual de Capacitación en Manejo y Resolución de Conflictos Ambientales”, Seminario – Taller, Lima-Perú, 1999

⁸⁴ BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, “Mitos y realidades sobre el uso de los sistemas alternativos de solución de conflictos”, Memorias de II Seminario Iberoamericano de Arbitraje Comercial, Guatemala, noviembre 1987

Por ende la naturaleza de los MASC, se la debe mirar como un mecanismo que propende al acercamiento de las partes involucradas en un conflicto en el cual se pretende enfatizar la cultura de dialogo con la finalidad de lograr la búsqueda de consensos, que como se ha dicho anteriormente no necesariamente debe sujetarse a los procedimientos y mecanismos de las vías ordinarias y litigiosas de solución de conflictos.

Con estos pocos antecedentes, se evidencia la necesidad de vincular a los MASC con los conflictos socioambientales producidos por la exploración y explotación petrolera, ya que la expansión de esta industria involucra una serie de factores, como los avances tecnológicos, intereses económicos expansionistas, responsabilidades de conservación del medio ambiente, desplazamientos e inequidad social, etc., que hacen que nos encontremos frente a una situación compleja y que requieren de el manejo de una serie de herramientas que puedan solucionar con mayor eficiencia los conflictos provocados por los impactos sociales que no resultan tan fácil de resolver y de aquí la justificación de la utilización de métodos alternativos que permitan trabajar mas allá del simple cumplimiento de requisitos y procedimientos.

Características de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

Es entonces que podemos decir que las características de los métodos alternativos de solución de conflictos son:

- *Voluntarios*: esto hace referencia a que las partes son las que deciden intervenir en estos procesos, es decir que no existen formas coercitivas que hagan que los implicados participen en todo o en parte de los procesos.
- *Facilitadores del acercamiento entre las partes en conflicto*: lo cual implica que son herramientas que producen a través del diálogo y procesos participativos un involucramiento para la búsqueda de consensos en cuanto a los intereses y necesidades de las partes.
- *Informales*: de forma general se refiere a que no existen procesos ni reglas estrictamente preestablecidos sino que son las misma partes que participan

las que acuerdan como debe llevarse los procesos (todo esto a pesar de que para algunos casos si existe un bosquejo de los procedimientos a seguir, como es el caso de los procesos de arbitraje y mediación contemplados por la legislación ecuatoriana⁸⁵ pero que tienen una relevante muestra de flexibilidad en la práctica).

- *Consensuales*: todas aquellas acciones que se realizan en estos procesos dependen de los consensos de las partes (reglas del juego, procedimientos, acuerdos), y toma de decisiones que son generalmente de carácter informado. Estos consensos implican también un respeto y observancia de las normas vigentes.
- *Colaborativos*: los actores y partes involucradas en el conflicto trabajan en conjunto para la construcción de soluciones de beneficio común.
- *Ahorrativo*: estos procesos implican un ahorro considerable en tiempo y recursos económicos.

Los métodos alternativos de solución de conflictos por lo tanto denotan ciertos argumentos y ventajas a favor, tanto por si solos como frente a los modos convencionales o formales de solución de conflictos.

Argumentos a favor de la utilización de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

Son varias las razones por las cuales resulta interesante la incorporación de los MASC, dentro del ordenamiento jurídico y las políticas públicas de un país que tiende a tener un considerable número de conflictos en su sociedad; de acuerdo a Iván Ormachea los argumentos son:

- *La necesidad de mejorar el aparato judicial*: este argumento tiene relación con la eficiencia y calidad que debe haber en los órganos administradores de justicia, donde la incorporación y utilización de los MASC tiende a mejorar y fortalecer dichos órganos.

⁸⁵ Los procedimientos de arbitraje y mediación que se siguen se encuentran preestablecidos en la Ley de Arbitraje y Mediación vigente en el Ecuador.

- *Descongestionar de procesos a las cortes, tribunales y juzgados:* es evidente que los órganos de justicia (no solo en el Ecuador sino en toda Latinoamérica), sufren de problemas por la gran cantidad de casos que deben atender y que no logran despachar con la debida eficiencia lo cual provoca un serio retraso en la administración de justicia y que con la mayor utilización por parte del usuario y promoción de los MASC se puede colaborar con estos estancamientos.
- *Ampliar el acceso a la justicia:* se conoce que forma general en Latinoamérica, y en particular en Ecuador existe una gran parte de la sociedad que no tiene acceso a la justicia, por distintas razones, es entonces que por las características que tienen los MASC se puede ampliar esta cobertura a sectores que necesitan ser atendidos.
- *La idoneidad de los métodos alternos de solución de conflictos:* este argumento se fundamenta principalmente en los beneficios que pueden obtenerse por la aplicación de los MASC ya que se ha llegado a considerar que los conflictos no pueden ser tratados por un solo método como comúnmente sucede.
- *Transformación social:* la transformación social se vincula de manera directa con la participación de los distintos grupos sociales involucrados en la solución y el manejo del conflicto⁸⁶.

En relación a estos argumentos podemos concluir que se los debe considerar en conjunto ya que las implicaciones que han manifestado tienen relación con “todo” un sistema de administración de justicia y no con partes separadas o indistintas de un mismo contexto.

⁸⁶ ORMACHEA CHOQUE, Iván. “Utilización de Medios Alternativos para la Resolución de Conflictos Socioambientales”, Ponencia preparada para la conferencia electrónica FAO-FFTP-Comunidec: “Conflictos socioambientales: desafíos y propuestas para la gestión en América Latina” Quito-Ecuador, enero - marzo, 2000

Ventajas de la utilización de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

Al igual que los argumentos, la utilización de los métodos alternos de solución de conflictos cuentan con algunas ventajas frente a las formas convencionales y que en la práctica resultan muy convenientes y a la vez tienden a justificar el empleo o aplicación de los MASC. Dentro de casos de conflictos socioambientales, Juan Carlos Avellaneda expresa que las ventajas de los MASC son:

- *Voluntariedad en el proceso:* al igual que en las características, la voluntariedad se refiere a que los consensos dentro de estos procesos serán mejor aceptadas e internalizadas por ser las mismas partes las que los construyen, a diferencia de aspectos impuestos por las formas convencionales de solución de conflictos.
- *Aceleración del proceso de toma de decisiones:* el hecho de que los MASC son menos formales, por su flexibilidad y sus características, dentro de estos procesos, es más rápido la toma de decisiones, para evitar demoras innecesarias como normalmente sucede con las formas convencionales de administración de justicia o procesos judiciales o administrativos.
- *Soluciones creativas y adecuadas a los problemas:* esta ventaja se fortalece y fundamenta mucho en el argumento de la participación social, ya que al ser ellos los que construyen sus consensos de acuerdo con sus intereses y necesidades se brinda la apertura necesaria para moldear soluciones creativas y adecuadas, a diferencia de una solución impuesta en la cual pueden primar factores externos que no necesariamente van ser internalizados por las partes.
- *Mejoramiento de las relaciones:* al existir estos procesos de diálogo y acercamiento es indiscutible que las relaciones mejoran, primero porque no existe el desgaste de relaciones como en un juicio común y por otra parte la construcción de consensos ofrece la posibilidad de tener una relación de ganadores y perdedores.
- *Mayor probabilidad de aceptación para poner en marcha los acuerdos:* es muy fácil entender que cuando alguien a sido artífice de la solución, al

internalizar esos acuerdos es mayormente probable que estos sean cumplidos y puestos en marcha que aquellos impuestos por una autoridad forzosamente.

- *Reducción de riesgos en el desarrollo de los procesos:* la reducción de riesgos se consolida a través de la puesta en marcha de estos procesos ya que existe una mayor conciencia de las partes de que lo que se está buscando es una solución y no una permanente confrontación que inutilice el accionar de ellos por mantener posiciones innecesariamente contrapuestas⁸⁷.

En el Ecuador, se ha establecido las normas apropiadas que puedan consolidar a los métodos alternativos de solución de conflictos, esto a pesar de que antes de una ley especial que los regule ya existían varias normas conducentes a impulsar a los MASCS, este es el caso de la obligatoriedad de que las partes que intervienen en un proceso comparezcan a una junta de conciliación en los juicios ordinarios o audiencia de conciliación en los juicios sumarios, lo cual se contempla en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 1065 y que dice:

“En el ejercicio de la jurisdicción contenciosa, el juez de primera instancia o el de segunda en su caso, hallándose la causa en estado de prueba y antes de conceder término para ésta, convocará a las partes a una junta de conciliación, señalando día y hora; junta que no podrá postergarse ni continuarse por más de una vez. Procurará el juez, por todos los medios aconsejados prudentemente por la equidad, hacer que los contendientes lleguen a un advenimiento. De haberlo, aprobará el juez, y terminará el pleito; de otra manera continuarán sustanciando la causa...”⁸⁸”

Lamentablemente en la práctica esta disposición pocas veces se cumple, ya que a pesar de que se convoca a la junta o audiencia de conciliación, muchas de la

⁸⁷ AVELLANEDEA RAMOS, Juan Carlos. “Plan estratégico de manejo de conflictos para el proyecto de demarcación y linderación de la cabecera occidental de la Reserva de Producción Faunística CUYABENO”. Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX.

⁸⁸ CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL CODIFICADO al 12 de julio del 2005, Título III, artículo 1012 inciso primero.

ocasiones esta instancia procesal no cumple con sus objetivos ni obtiene los resultados esperados.

Todo este tipo de circunstancias mas los argumentos y ventajas antes señaladas hacen posible que se haya considerado esta alternativa para resolver conflictos, no con la intención de suplantar a los otro modos sino de colaborar con ellos y con los usuarios de estos sistemas.

Con la intención de consolidar estos métodos, la Constitución Ecuatoriana en su artículo 191 contempla la figura de los jueces de paz, quienes serán los encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, además de que se reconoce al arbitraje, la mediación y otros procedimientos como herramientas o métodos alternativos para la resolución de conflictos.⁸⁹

Con este premisa constitucional es que en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997 se publica la Ley de Arbitraje y Mediación, la misma que se encuentra vigente y que regula jurídicamente a aquellos métodos alternos de solución de conflictos que en ella constan y que son el arbitraje, la mediación y la mediación comunitaria.

Una vez que tenemos claro de lo que son los métodos alternos de solución de conflictos, sus implicaciones y características resulta importante que estos puedan vincularse con los conflictos socioambientales y en especial a aquellos que mantienen una estrecha relación con la actividad petrolera en el Ecuador, ya que la intención de esta investigación es proporcionar alternativas viables para el manejo de esta tipología de conflictos que se vienen presentado desde el inicio de la actividad.

Inicialmente podemos decir que esta vinculación es posible ya que dentro de los Principios Ambientales Básicos aprobados en diciembre de 1993 se considera que “la única manera de lograr una gestión ambiental adecuada es en base a la conciliación

⁸⁹ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título VIII, Capítulo 1, artículos 191 incisos segundo y tercero, 11 de agosto de 1998, CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002

de los intereses de todas las partes involucradas en cada asunto específico, evitando el enfrentamiento y remplazándolo con el consenso o, al menos, por la honesta consulta y participación de todos los que tengan algo que decir o defender, y esto previamente a la toma de decisiones finales”⁹⁰

Es lamentable que este tipo de principios no se los cumpla o se los cumpla parcialmente, como pasa en el Ecuador, ya que por encima de estos principios se ha demostrado que lo que prima en nuestro país son los intereses de los grupos de poder, la falta de consolidación de las políticas públicas y la poca decisión política hace que este tipo de principios no puedan cumplirse.

Es evidente que para lograr esos consensos de los que habla el principio citado las herramientas que ofrecen los métodos alternativos de solución de conflictos deben estar investidas de esa “idoneidad” necesaria para encaminar procesos de diálogo con lo cual se logre establecer esos consensos y el cabal cumplimiento de los acuerdos logrados, esto es un ejemplo de la necesidad de vinculación de estos temas.

Por otra parte, al ver que no se cumplen estos principios básicos lo lógico es que surjan conflictos - por ejemplo lo que sucede con la falta de que en tema específico de nuestro estudio, existe el Reglamento de Consulta y Participación para la Realización de Actividades Hidrocarburíferas, dado en la presidencia del Dr. Gustavo Noboa el 2 de diciembre de 2002 – por el cual es evidente que no existe una política preventiva de conflictos y por su naturaleza este es un elemento de los MASC que puede dotar de herramientas no solo para resolver sino también para prevenir conflictos.

Entonces es notoria la vinculación que existe entre los métodos alternos de solución de conflictos con los temas socioambientales y estos en su involucramiento con la actividad petrolera, ahora todo depende de la situación específica para poder elegir el método y metodología adecuada para manejar y resolver el conflicto, lo cual implica que las personas o grupos encargados de abordarlo deben tener un conocimiento

⁹⁰ Para ampliar esta información se puede revisar todos los Principios Ambientales Básicos expedidos en diciembre de 1993

tanto del conflicto en si – para lo cual existen también metodologías específicas – como de aquellas herramientas que debe utilizar ya que a pesar de que los métodos alternos de solución de conflictos y que las otras metodologías sean flexibles e idóneas para estas intervenciones se puede correr el riesgo de provocar una ruptura en las relaciones con lo cual sería imposible manejar los conflictos a través de estas vías.

Con estos elementos hemos elegido algunos métodos alternativos de solución de conflictos que se encuentran contemplados en nuestra legislación como son el arbitraje y la mediación, hay otros modos no formales que a pesar de que no se encuentran preescritos en nuestra legislación son comúnmente aceptados y utilizados así como la negociación, facilitación y conciliación. Además es importante analizar otras metodologías que han sido desarrolladas por ONGs y personas conocedoras de estos temas, con la finalidad de dar un mejor tratamiento a los conflictos socioambientales – que se los ha considerado como metodologías alternativas dentro de los mismos métodos alternativos – y que son viables para aplicarlos en el manejo alternativo de conflictos socioambientales producidos o provocados dentro de la actividad petrolera en el Ecuador.

2.2.1 Arbitraje

Dentro de los métodos alternos de solución de conflictos uno de los que más ha sido utilizado es el arbitraje. Como entendemos este es un proceso alternativo a los comúnmente conocidos como tradicionales, sin embargo como veremos a pesar de ser alternativo es muy parecido a los procesos judiciales contemplado en nuestra legislación, pero que por sus características se lo considera como alternativo.

El arbitraje, como tal, ha sido aceptado, reconocido a nivel internacional y ratificado a nivel nacional como un medio alternativo apropiado para la solución de controversias dentro de un ámbito transigible, el mismo que ha sido empleado por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, etc., y por las características de este

sistema se ha considerado inclusive al Arbitraje Papal⁹¹ como un sistema valido para la resolución de conflictos.

El Ecuador ha participado en estos procesos de arbitraje: un ejemplo reciente tenemos a la intervención de los “Países Garantes” los cuales colaboraron en los procesos de negociación para la firma del acuerdo de paz en el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú.

El involucramiento de los Estados en estos procesos, se da por la ratificación de convenios internacionales provenientes del derecho internacional. Sin embargo para que estos procesos sean de válida aplicación dentro de un país se requiere de la normativa necesaria para su aplicación. La legislación ecuatoriana reconoce al arbitraje en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 191 y a través de la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación⁹² vigente en nuestro país y que es la encargada de regir la vida jurídica de este método alternativo de solución de conflictos.

El arbitraje es un método alternativo al proceso judicial que se encamina a la solución de conflictos y que posibilita el hecho que problemas existentes o futuros de las partes en controversia puedan someterse al análisis y solución de un tercero denominado árbitro o tribunal arbitral.

Entonces, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Arbitraje y Mediación “El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las partes pueden someterse de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje

⁹¹ Se considera al Arbitraje Papal como un mecanismo idóneo para la solución de controversias, ya que a través de la intervención de un tercero neutral como el PAPA, se han abierto la posibilidades aceptadas por las partes para que puedan colaborar en la resolución de sus conflictos.

⁹² LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero del 2005

administrado o por árbitros independientes que se conformen para conocer dichas controversias”⁹³

De estas apreciaciones como el concepto citado de nuestra legislación podemos concluir que el arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos, donde las partes de forma voluntaria acuden donde un tercero (árbitro o tribunal arbitral) para que este dirima sobre un conflicto determinado con la finalidad de poner fin a la controversia mantenida por las partes.

De acuerdo al análisis de algunos tratadistas y del estudio de la Ley de Arbitraje y Mediación podemos mencionar algunas de las características que hacen que el arbitraje se constituya como un método válido para la resolución alternativa de conflictos:

- *Voluntario*: cuando nos referimos a que el arbitraje es voluntario nos referimos a que las personas que van a intervenir en el, previo al proceso, han tomado de manera conjunta la decisión de participar. Esta decisión se la puede expresar a través de la firma de un convenio arbitral⁹⁴ contemplado en nuestra legislación o a través de otras formas⁹⁵ contempladas en la misma Ley de Arbitraje y Mediación.

⁹³ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título I, artículo 1, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero del 2005

⁹⁴ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005, Artículo 5: *Convenio Arbitral: El convenio arbitral es el acuerdo escrito en virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El convenio arbitral deberá constar por escrito y, si se refiere a un negocio jurídico al que no se incorpore el convenio en su texto, deberá constar en un documento que exprese el nombre de las partes y la determinación inequívoca del negocio jurídico a que se refiere. En los demás casos, es decir, de convenios arbitrales sobre las indemnizaciones civiles por delitos o cuasidelitos, el convenio arbitral deberá referirse a los hechos sobre los que versa el arbitraje. La nulidad de un contrato no afectará la vigencia del convenio arbitral. No obstante haber un juicio pendiente ante la justicia ordinaria en materia susceptible de transacción, las partes podrán recurrir al arbitraje, en este caso, conjuntamente solicitarán al juez competente el archivo de la causa, acompañado a la solicitud una copia del convenio arbitral y, de hallarse pendiente un recurso, deberán, además, desistir de el.*

⁹⁵ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título I, artículos 6 y 7, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

- *Flexible:* la flexibilidad del arbitraje se mide por el hecho de que las personas son las que acuerdan como será su proceso, siempre y cuando esta elección esté enmarcada en la legislación vigente.
- *Confidencial:* esta característica se refiere a la privacidad que el proceso mantendrá con respecto a terceras personas no involucradas en el caso, como así lo expresa el artículo 34 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Sin perjuicio de esto, aquellas partes que acuerden de forma conjunta podrán hacer público el proceso.
- *Conformación del Tribunal:* el tribunal arbitral se conformará por 1 o 3 árbitros y son las partes que inicialmente deben convenir cual será su árbitro o árbitros (tribunal arbitral), en caso de no hacerlo será el mismo centro de arbitraje el que los designará (todo esto al amparo de la legislación vigente en la parte correspondiente y a los reglamentos del centro de arbitraje donde se haya decidido llevar el proceso). Al escoger a los árbitros las partes deben determinar que aquellas personas sean expertas en la materia sobre la que versará el arbitraje; todo esto sin duda garantizará, la imparcialidad, transparencia, eficacia, etc., del proceso.
- *Marco Legal:* de forma lógica este método alternativo de solución de conflictos tiene la ventaja de que se encuentra claramente reglamentado por nuestra legislación lo cual brinda seguridad jurídica a aquellas personas que deciden intervenir en el.
- *Duración de los procesos:* esta es una característica importante, ya que comúnmente nos quejamos de la innecesaria extensión de los procesos judiciales tradicionales, en cambio de acuerdo a nuestra legislación el proceso arbitral después de practicada la audiencia de sustanciación y declarada la competencia del tribunal, existirá un término de máximo ciento cincuenta días (150) para expedir el laudo pudiendo en caso de ser necesario ampliarse por un término igual⁹⁶.

El arbitraje como varias figuras puede también dividirse en clases, las mismas que dependerán básicamente de los procedimientos a las que las partes que intervienen

⁹⁶ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título I, artículo 25, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

hayan decidido someterse, así lo demuestran tanto tratadistas⁹⁷ consultados como nuestra legislación al respecto⁹⁸. Entonces las clases de arbitraje son:

- *Voluntario*: se da por la libre voluntad de las partes sin que existe un vínculo anterior que los comprometa a participar en el proceso arbitral.
- *Forzoso*: a diferencia del voluntario esta clase hace referencia a que debe necesariamente existir una vinculación anterior para el sometimiento de un conflicto a un proceso arbitral, este es el caso del convenio arbitral que ya fue analizado anteriormente.
- *Administrado*: a esta clase se lo llama también como formal ya que se sujeta a la legislación vigente, a los procedimientos establecidos por el centro de arbitraje legalmente constituido y designado por las partes como el encargado de sustanciar el proceso.
- *Independiente*: o también llamado informal, se da cuando las partes establecen el procedimiento del arbitraje y en la forma que debe llevarse, hay que tomar en cuenta que por más flexibilidad existente para establecer los procedimientos, estos no deben transgredir lo que manda la ley.
- *De equidad*: quiere decir que para la emisión del laudo arbitral los árbitros actuarán de acuerdo con su leal saber y entender y atendiendo a los principios la sana crítica, para esta clase de arbitrajes no tienen que ser necesariamente abogados las personas que intervienen en el tribunal.
- *De derecho*: esta clase de arbitraje se lo realizará con estricto apego a la ley, a los principios generales del derecho, jurisprudencia, doctrina y el laudo arbitral proveniente del proceso deberá ser fundado conforme a derecho, para lo cual es necesario que los árbitros que intervengan en el proceso sean abogados.
- *Arbitraje Interno*: es aquel que se lo realiza de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno de cada país, por ejemplo los procesos que se llevan en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito,

⁹⁷ GONZAÍN, Osvaldo, “Formas alternativas para la Resolución de Conflictos”, Edit. Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1995

⁹⁸ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título I, artículos 2, 3, 41, 42, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

conforme a su reglamento y a la Ley de Arbitraje y Mediación vigente en el Ecuador, es un arbitraje interno, con excepción de aquellos procesos que se los catalogue como internacionales.

- *Arbitraje Internacional:* este se refiere a los procesos en los cuales las partes se someten a procesos establecidos en convenios o por organismos internacionales, para este caso en particular, nuestra legislación ha establecido una regulación específica que consta en la misma Ley de Arbitraje y Mediación

Es evidente que para poder intervenir en este tipo de procesos, las partes interesadas deben cumplir con ciertos requisitos que han sido comúnmente aceptados tanto por nuestra legislación como por la doctrina y que como veremos a continuación brindan la libertad, para que todas aquellas personas que los cumplan intervengan, y vale mencionar que esos requisitos no son difíciles de seguir.

- *Capacidad legal de las partes para transigir:* este se refiere a la capacidad que tienen las personas para auto gobernarse y tomar decisiones, donde adicionalmente estas no se encuentren prohibidas o impedidas por la ley expresamente para hacerlo, es así el caso de la interdicción o los incapaces absolutos que no pueden tomar decisiones por si mismos, es decir, no pueden transigir.⁹⁹
- *Voluntad de las partes para someterse a un procedimiento arbitral:* como ya se ha reiterado en varias ocasiones este es un elemento y en este caso un requisito que debe cumplir la persona que intervendrá en un proceso ya que de demostrarse que ha acudido por presión o cualquier otra causa impositiva podría provocar la nulidad del proceso.
- *Existencia de un acuerdo previo:* se da mediante la firma previa de una cláusula compromisoria la misma que se encuentra determinada en el convenio arbitral.

⁹⁹ Para ampliar esta información se puede revisar lo que dice al respecto el Código Civil Ecuatoriano, en el Libro Primero: “De las Personas” en la parte correspondiente a las incapacidades y temas relacionados

- *Que el conflicto verse sobre materia transigible:* es decir que se puede llevar un conflicto sobre cualquier materia o situación con excepción de lo que nuestro Código Civil Codificado en su artículo 2348 manifiesta que está prohibido transigir como: asuntos que, o hechos que estén tipificados con infracciones penales, causas que incidan con el estado civil o la capacidad de las personas, causas referentes a bienes de dominio público y en causas en las que deba intervenir el ministerio fiscal.¹⁰⁰

El procedimiento del arbitraje se encuentra establecido claramente en nuestra Ley de Arbitraje y Mediación, y podemos apreciar que existe una similitud con los procesos judiciales ordinarios, pero a la vez también encontramos ciertas diferencias que resultarán evidentes.

Dentro de las semejanzas que tienen estos procesos podemos anotar el hecho de que se debe presentar una demanda, la existencia de una contestación, citación, la audiencia de mediación (que se asemeja a la audiencia o junta de conciliación), la audiencia de sustanciación y finalmente el dictamen del laudo arbitral (sentencia en procesos convencionales).

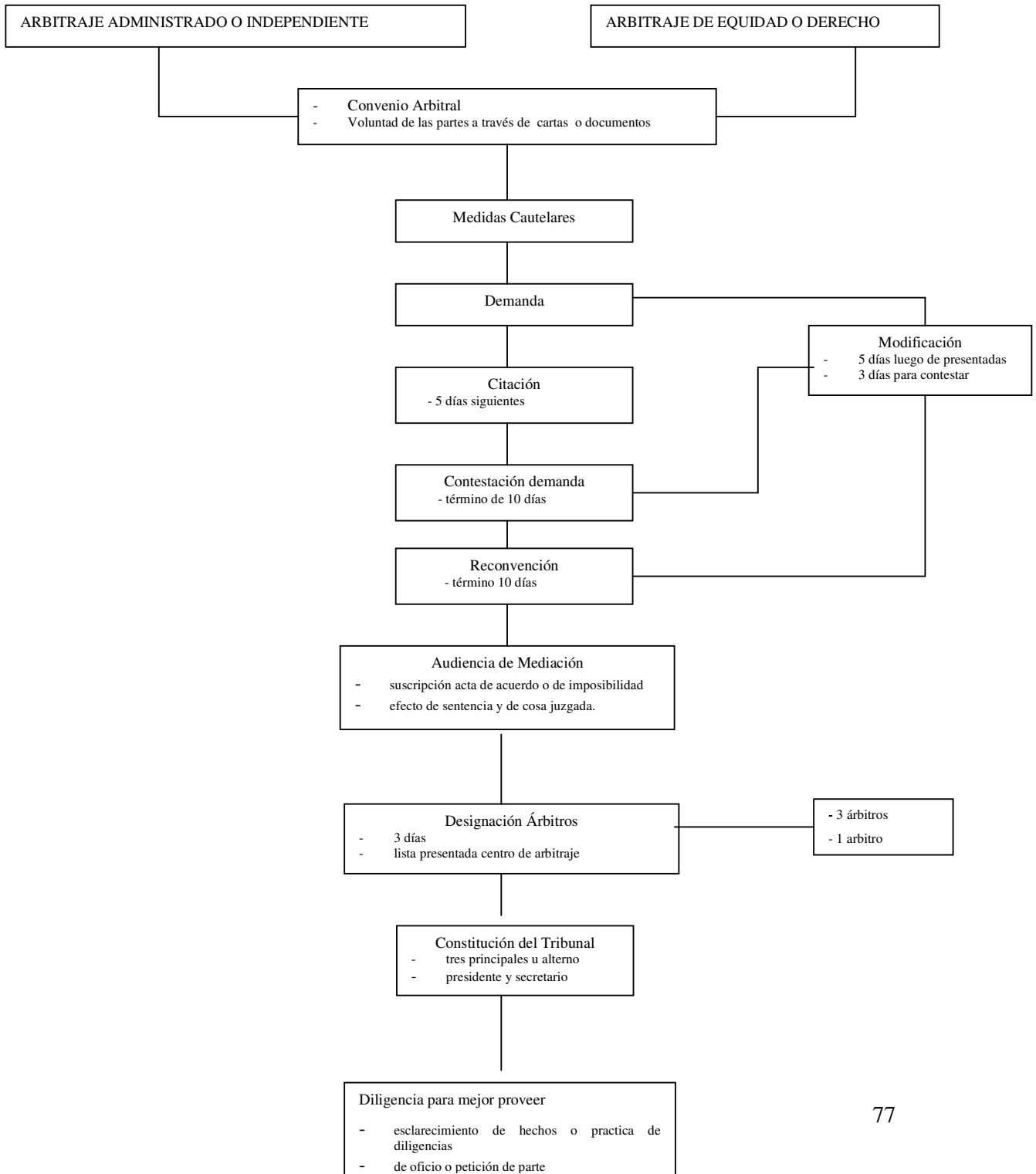
Entre las principales diferencias encontramos que en el arbitraje las partes se someten mediante un acuerdo de forma voluntaria, ellos fijan la clase de arbitraje que debe ser, pueden elegir al árbitro o al tribunal, los procesos son confidenciales y los tiempos que demora el arbitraje son mucho más cortos que los que tardarían un juicio.

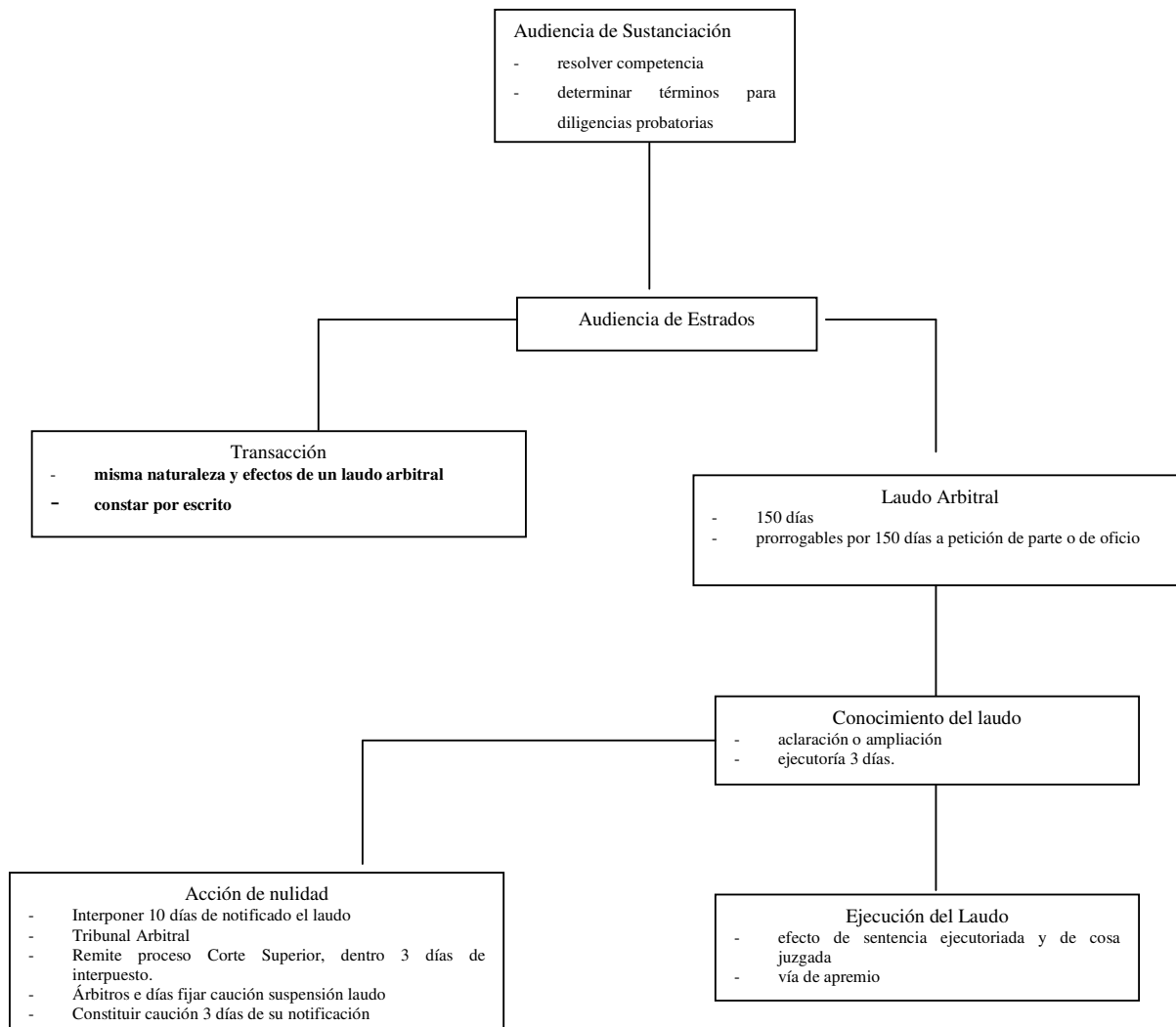
Estas pequeñas semejanzas y diferencias que se han traído fruto de un análisis previo, solamente refuerzan el concepto de que a pesar de que el arbitraje y el juicio son muy parecidos pero no iguales y que dependiendo del caso o la situación existe la posibilidad de elegir por cual vía queremos ir y por supuesto cual es la que más nos conviene para poder resolver nuestros conflictos.

¹⁰⁰ CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO CODIFICADO, Libro IV, Título XXXVIII artículo 2348 y siguientes, Suplemento del Registro Oficial No. 46 del 24 de junio del 2005

Al amparo de lo que manda la Ley vigente de Arbitraje y Mediación se ha sistematizado por parte de algunos tratadistas del tema, el procedimiento de arbitraje de una forma práctica y de fácil entendimiento que para nuestro caso también será de gran ayuda y que a continuación se expresa en el siguiente cuadro.

Procedimiento Arbitral:





Fuente: Cámara de Comercio de Quito

Es importante tomar en cuenta como vemos en el cuadro anterior, que el proceso de arbitraje termina con el dictamen de un laudo arbitral¹⁰¹.

Dentro de los métodos alternativos de solución de conflictos uno de las principales temores es la ejecutabilidad y el cumplimiento de los laudos. En el caso del arbitraje este elemento ha sido contemplado por la misma ley ya que reglamenta de manera íntegra todo lo referente al laudo arbitral, el mismo que adquiere un rol protagónico si tomamos en cuenta que a través de este se verá soportada la idoneidad del proceso y no por que el laudo declare un ganador o un perdedor sino porque en él se verá reflejado el trabajo y el proceso seguido para solucionar el conflicto.

¹⁰¹ El laudo arbitral tiene semejanza con la sentencia, es decir que es el dictamen final con el cual un juez, para este caso el árbitro o tribunal arbitral da por terminado el proceso, en el cual consta la decisión de dicha autoridad sobre el caso o conflicto que se está tratando.

Como características de él laudo arbitral¹⁰² de acuerdo a nuestra LAM¹⁰³ encontramos que:

- El laudo se da a conocer en audiencia, artículo 29 LAM
- Los laudos arbitrales son inapelables, solo cabe la aclaración y ampliación artículo 30 LAM
- La única acción que se puede interponer frente a un laudo arbitral es la de Nulidad, artículo 31 LAM
- El laudo arbitral tiene el efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada pudiendo ser ejecutados vía de apremio, artículo 32 LAM

Una vez que se encuentra clara la figura del arbitraje que se maneja comúnmente y que nuestra legislación ha contemplado como uno de los métodos alternos de solución de conflictos y como este puede vincularse con el tema de la conflictividad socioambiental, lo cual nos servirá como base para posteriormente vincular estos dos ejes con la actividad petrolera en el Ecuador.

Para realizar esta vinculación se debe partir de algunas situaciones: primero que el arbitraje comúnmente ha sido utilizado para resolver conflictos de tipo contractual en materias comerciales o mercantiles (esto no quiere decir obligatoriamente que una relación contractual pueda derivar en el desencadenamiento de un conflicto socioambiental, ya que este factor podría ser bastante relativo si tomamos en cuenta que dentro de los conflictos socioambientales existen muchas mas variables que deben ser visualizadas), segundo por otra parte la necesidad de la población para encontrar respuesta y herramientas que favorezcan la solución de sus conflictos que tiene relación con el medio ambiente, finalmente, ya hemos estudiado el significado y los alcances del sistema arbitral.

¹⁰² LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título I, artículos 29, 30, 31, 32, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

¹⁰³ LAM: Ley de Arbitraje y Mediación

Entonces, si podemos deducir que el arbitraje se constituye en el mecanismo alternativo muy útil y eficaz para resolver conflictos socioambientales, en este punto lo único que quedaría en suspenso es determinar, dependiendo del caso frente al que nos encontremos, si el arbitraje es el método idóneo para emplear, pero como mencionamos eso dependerá en la práctica de cada caso, mientras que lo que debe quedar claro es que esta es una herramienta aplicable a los conflictos socioambientales.

Se podría interpretar de que no han existido un gran número de arbitrajes en materia ambiental por la carencia de un contrato en el cual conste una cláusula compromisoria que contemple llevar los conflictos por esta vía no formal de resolución a pesar de que como vimos existen otras formas en las cuales se puede acceder a uno de estos procesos, por lo que podríamos cuestionarnos de que posiblemente no es esa la razón sino otros intereses por lo cual no se ha llegado a una mayor aplicación de este mecanismo en la resolución de conflictos en materia socioambiental.

Otro de los elementos que pueden considerarse como válidos es que la materia ambiental si se la puede entender como transigible, ya que muchas veces nos encontramos frente a controversias en las cuales las partes tienen esa facultad de transigir, como por ejemplo las indemnizaciones por daños y perjuicios a los que fueren acreedores por un daño ambiental, la implementación de medidas de seguridad, los conflictos territoriales por el uso o acceso a los recursos naturales, entre otros. Igual hay que tomar en cuenta que el Estado como ente que garantiza la protección del medio ambiente en el Ecuador también puede intervenir en estos procesos ya que la ley faculta su intervención.

Dentro de estas apreciaciones podemos decir que al igual que en los procesos comunes de arbitraje, en caso del “arbitraje ambiental” también se debe cumplir con los mismos requisitos para poder acceder a este tipo de mecanismos de resolución de conflictos, como es la voluntad, la capacidad, el convenio y lo referente a ser una materia transigible.

En la búsqueda de argumentos que favorezcan a la utilización del arbitraje para la solución de conflictos socioambientales, es evidente que para conseguir expertos, en un sin número de temáticas que involucra el medio ambiente y que muchas veces no se consigue comprender cuando se acude a los órganos convencionales de administración de justicia.

Al momento se puede ver que tanto a nivel nacional como internacional se esta procurando fortalecer esta herramienta, como ejemplo podemos citar lo que ocurre en el Perú donde las autoridades competentes como el Consejo Nacional del Ambiente ya determina normatividad específica para el “arbitraje ambiental”.

En el caso ecuatoriano no vemos que la legislación se incline aún para reglamentar estos casos sin embargo por la flexibilidad de este mecanismo se puede acceder a centros especializados en arbitraje para buscar soluciones a los conflictos socioambientales.

Este método alternativo de solución de conflictos contempla dentro de su ley reguladora (Ley de Arbitraje y Mediación), la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en estos procesos, dicha ley menciona:

“Capacidad para acudir al Arbitraje: Art. 4.- Podrán someterse al arbitraje regulado en esta Ley las personas naturales o jurídicas que tengan capacidad para transigir, cumpliendo con los requisitos que establece la misma. Para que las diferentes entidades que conforman el sector público puedan someterse al arbitraje, además de cumplir con los requisitos que establece esta Ley, tendrán que cumplir los siguientes requisitos adicionales: Pactar un convenio arbitral, con anterioridad al surgimiento de la controversia; en caso de que se quisiera firmar el convenio una vez surgida la controversia, deberá consultarse al Procurador General del Estado, dictamen que será de obligatorio cumplimiento; La relación jurídica a la cual se refiere el convenio deberá ser de carácter contractual; En el convenio arbitral deberá incluirse la forma de selección de los árbitros; y, El convenio arbitral, por medio del cual la Institución

del sector público renuncia a la jurisdicción ordinaria, deberá ser firmado por la persona autorizada para contratar a nombre de dicha institución. El incumplimiento de los requisitos señalados acarreará la nulidad del convenio arbitral.”¹⁰⁴

Una vez más se demuestra que este método puede ser utilizado por distintos actores y en distintos ámbitos, obviamente cuando el Estado participe de estos procesos se debe tener tanto por parte de este como de aquellas personas que se enfrenten al estado en arbitraje el cuidado necesario para que se cumplan con las mandatos que la ley establece.

2.2.2 Mediación

Siguiendo con el análisis de aquellos métodos aplicables a la solución alternativa de conflictos encontramos la figura de la mediación, la misma que al igual que el arbitraje es un mecanismo que se encuentra contemplado y reconocido por nuestra legislación en la Ley de Arbitraje y Mediación.

Al respecto, la ley citada en su artículo 43 menciona que: “La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”¹⁰⁵

Otro concepto de mediación es aquel recogido por Patricio Guerrero Arias, y que ha sido mencionado por Touzard y Pendizch menciona que la mediación: “se trata de una negociación entre las partes en conflicto, en presencia de una tercera neutral, que busca un acuerdo entre ellas que lleve a la solución del conflicto...”¹⁰⁶, de la misma forma para Zulema Wilde y Luis Gaibrois, la mediación “es una negociación expandida, una negociación asistida o dirigida, es decir, es una técnica de solución alternativa de conflictos gestada por un tercero imparcial denominado mediador”

¹⁰⁴ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título I, artículo 4, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

¹⁰⁵ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título II, artículo 43, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

¹⁰⁶ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 71

Como vemos este método alternativo de solución de conflictos recalca algunos elementos como la negociación directa entre las partes, la ayuda de un tercero imparcial como el mediador.

Cuando hablamos de una negociación directa entre las partes, se entiende que ellos son los encargados de buscar sus propias soluciones a través de procesos de dialogo dependiendo de sus intereses, en lo cual radica la diferencia con los procesos judiciales y el arbitraje que han sido analizados hasta el momento, ya que en estos la solución es dictada e impuesta por jueces o por el tribunal arbitral.

Con respecto a lo mencionado se puede decir que los acuerdos conseguidos después de un proceso de mediación son mayormente aceptados e interiorizados por las partes, lo que sin duda podría llegar a garantizar un mejor cumplimiento de los acuerdos por esta participación directa de las partes en la construcción de los consensos. Por lo que se considera como una ventaja sustancial de la mediación frente a otros métodos alternativos de solución de conflictos, lo que no quiere decir que sea el mecanismo más apropiado o único para resolver controversias ya que como hemos venido mencionando no todo conflicto es igual por lo en todo conflicto no se puede utilizar el mismo método.

Como premisa inicial se puede mencionar que no existen restricciones para poder acudir o participar en un proceso de mediación, sin embargo las partes deben cumplir con ciertos requisitos para poder intervenir o acudir a un proceso de mediación:

- Debe existir un acuerdo de las partes a través de un convenio de mediación, en caso de no existir una o las dos partes interesadas podrán solicitar a un centro de mediación calificado su interés para someterse a un proceso de mediación
- Las partes deben tener capacidad para transigir, como hemos visto anteriormente, esto se refiere a la capacidad que tienen las partes para obligarse y para la toma de decisiones.

- La mediación debe versar sobre materia transigible, este es un requisito que se repite para todos los procesos en los que se utilizan a los métodos alternos de solución de conflictos y que ya lo hemos analizado al hablar del arbitraje
- Debe existir el consentimiento y la voluntad libre de las partes para intervenir en un proceso de mediación, es decir que no es obligatorio.

El otro elemento del concepto involucra al mediador. Es importante mencionar como consecuencia directa de que las partes tomen sus propias decisiones que el mediador no es la persona que propone soluciones al conflicto y no decide sobre las mismas, siendo simplemente un colaborador que encamina un proceso de diálogo, es decir que es aquella persona que ayuda a las partes para que se pongan de acuerdo.

Adicionalmente el mediador equilibra el desbalance de poder de las partes en conflicto¹⁰⁷, siendo esta facultad un elemento que se encamina a fortalecer los procesos de diálogo como ya lo hemos mencionado.

Dentro del proceso, el mediador juega un rol fundamental, ya que a pesar de no ser quien toma las decisiones frente al conflicto, es quien encamina el proceso, por lo cual su perfil y el entendimiento del papel que juega es vital para el éxito del proceso. Las características que debe tener un mediador son:

- *Habilidad para organizar la información*
- *Habilidad para comunicarse*
- *Creatividad*
- *Imparcialidad*
- *Neutralidad*
- *Definición de roles*
- *Ser ágil y efectivo*
- *Generador de opciones*
- *Estratégico*
- *Debe conocer a las partes y al conflicto*

¹⁰⁷ VINTIMILLA, Jaime, (Compilador), “Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador”, Programa Regional de Justicia de Paz 2002 – 2005, Pág. 19

Estas son las principales características que debe tener un mediador las cuales son comúnmente aceptadas por tratadistas y expertos en la materia, características que se convierten también en requisitos para poder ser calificado como mediador después del entrenamiento correspondiente.

Una vez que tenemos una referencia básica tanto de lo que es la mediación como de los actores que intervienen en ella, es importante mencionar algunas de las características que son comúnmente conocidas y aceptadas por aquellas personas que de una u otra forma se encuentran involucradas o han participado en un proceso de este método alternativo de solución de conflictos. Las principales características de la mediación son:

- *Extrajudicial:* se refiere a que la mediación se desarrolla fuera de un proceso judicial.
- *Intervención de un tercero imparcial:* involucra la intervención de una persona elegida por las partes o designada por el centro de mediación para que asista a las personas o instituciones en conflicto, a quien se lo conoce como mediador.
- *Economía procesal:* la mediación no implica gastos excesivos e innecesarios de dinero y tiempo.
- *Celeridad:* generalmente la mediación se desarrolla en periodos cortos de tiempo.
- *Es un proceso flexible:* el proceso de mediación se rige a las necesidades y exigencia de las partes en conflicto.
- *No adversarial:* las partes no se confrontan ya que trabajan juntas en búsqueda de acuerdos.
- *Confidencial:* el proceso de mediación se realiza solo entre las partes y el mediador, lo que ahí se trata no es de uso público al menos que las partes mismas haya acordado la divulgación del proceso y la participación de personas ajenas al proceso, es el caso de los observadores.

- *Es un proceso voluntario:* son las partes quienes dan su consentimiento para participar en la mediación, a tal punto que ellos en el momento que lo consideren podrían decidir abandonarlo sin sanción alguna.
- *Es equitativa:* no existe el concepto de ganadores y perdedores como sucede generalmente en un proceso judicial e inclusive en algunos casos de arbitraje.
- *Es participativa:* son las partes que intervienen las que construyen los acuerdos a través de un involucramiento directo en los procesos de diálogo.
- *Fortalece las relaciones:* la mediación se encamina a un acercamiento de las partes donde mediante el diálogo se evita un desgaste de las relaciones que es un denominador común en los procesos judiciales, al punto que después de solucionar el conflicto se puede mantener por ejemplo las relaciones comerciales, es decir que generalmente no hay una ruptura entre las partes.
- *Acuerdos duraderos:* por ser las mismas partes quienes discuten sobre sus conflictos y son ellas las que llegan a consensos, los acuerdos se convierten en duraderos y existe una mayor posibilidad de cumplimiento y ejecución de los mismos.
- *Contribuye a la descongestión de los órganos judiciales:* es conocido por todos que en el caso ecuatoriano existe una saturación de causas en el sistema judicial por lo que la mediación tiende a aliviar el ingreso de causas brindando una alternativa tanto para el sistema judicial como para el usuario de tramitar y solucionar sus conflictos por otra vía.

Nuestra legislación no hace relación clara en cuanto a las clases de mediación, se podría entender que tenemos dos clases inicialmente la mediación comúnmente conocida y la mediación comunitaria de la cual hablaremos posteriormente.

Sin embargo podemos entender que existe una mediación institucionalizada, cuando se trata de un proceso que se lleva de acuerdo con la ley y mediante los procedimientos establecidos por un centro de mediación; y una mediación independiente, esta se desarrolla fuera de un centro pero con la participación de un

mediador independiente calificado donde la metodología y los procedimientos serán establecidos por las partes.

Adicionalmente se podría interpretar que de acuerdo al proceso y al lugar donde se realice, existe una mediación local que se la realiza de acuerdo a nuestra legislación y una mediación internacional que es la que se ejecuta de acuerdo a las normas y convenios internacionales.

El procedimiento de la mediación se debe mencionar que este se encuentra establecido en nuestra Ley de Arbitraje y Mediación, que posteriormente se mencionará.

Sin embargo se pueden reconocer las etapas de la mediación de acuerdo a trabajos realizados por especialistas en el tema como el CIDES¹⁰⁸ y por distintas metodologías utilizadas y desarrolladas por distintas personas en la aplicación de este método alternativo de solución de conflictos:

- *Identificación del problema*
- *Análisis y elección del ámbito de resolución del conflicto*
- *Elección del Mediador*
- *Recopilación de información*
- *Definición del problema*
- *Búsqueda de opciones*
- *Redefinición de las propuestas*
- *Negociación*
- *Redacción del acuerdo*
- *Seguimiento y verificación del cumplimiento de acuerdos y compromisos*

Cuando hablamos de las etapas de la mediación debemos decir que lo mencionado es un esquema referencial y que podría ser el correcto para aplicar, pero hay que tener

¹⁰⁸ CENTRO SOBRE DERECHO Y SOCIEDAD, CIDES, “La solución de conflictos en barrios urbanos a través de la mediación o el acuerdo entre las partes”, “Guía para mediadores barriales”, folleto, Quito-Ecuador, febrero 1995

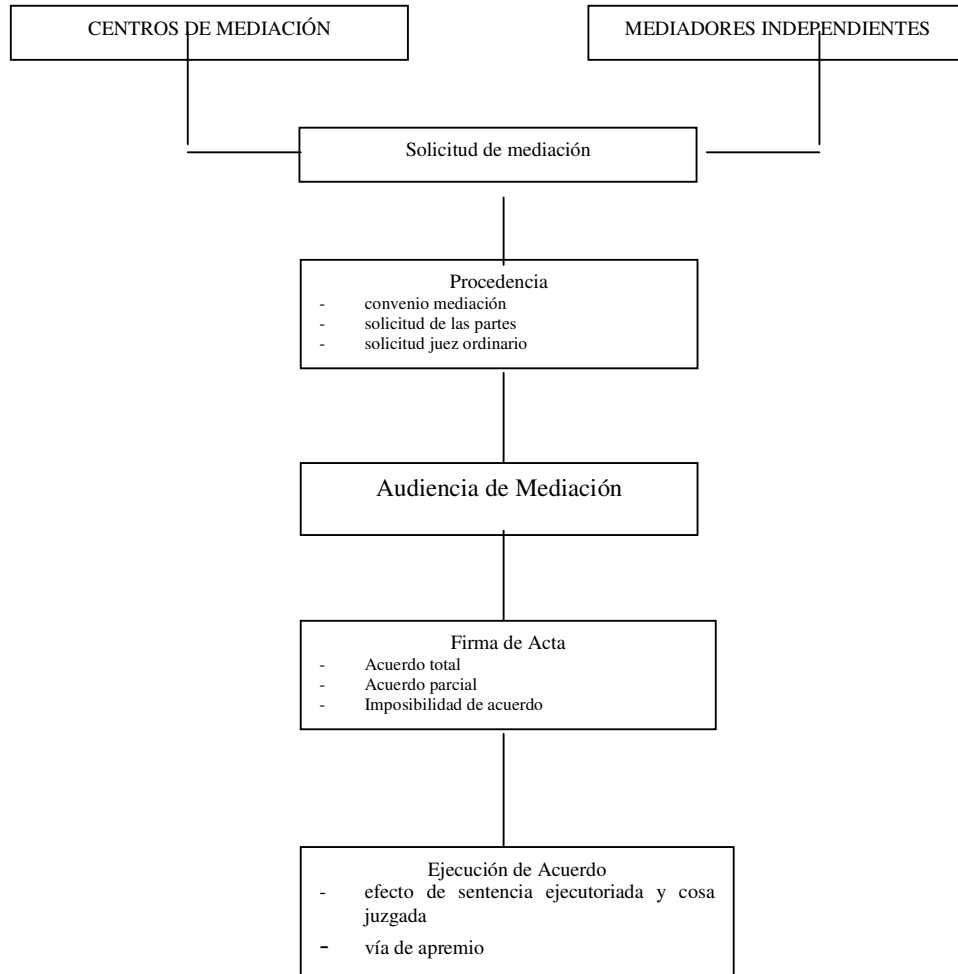
un cuenta primero que estas etapas pueden ser utilizadas para cualquier tipo de conflicto, en cuanto a nuestro tema de estudio si se lo puede utilizar para el caso de los conflictos socioambientales.

Hay que tomar en cuenta metodológicamente que estas etapas pueden ser variables considerando las necesidades y las exigencias de las personas involucradas en el conflicto, diferencia que suele evidenciarse con el procedimiento que se encuentra contemplado en la ley.

Al igual que en el caso del arbitraje, es interesante replicar un cuadro donde se muestra por parte de expertos en el tema, sintetizado y recopilado el proceso de mediación que manda la ley y que es también recogido por los distintos centros de mediación en sus reglamentos.

Procedimiento de Mediación

Fuente: Cámara de Comercio de Quito



En cuanto a los efectos, de los acuerdos y actas de mediación, hay que tener presente algunas consideraciones. Primeramente debemos mencionar que existen como lo muestra el cuadro anterior tres clases de actas las cuales se dan en base a los acuerdos conseguidos en el proceso de mediación.

Después de realizado este acuerdo se consideran tres tipos de actas:

1. Acta de Mediación,
2. Acta de Acuerdo Parcial, y;
3. Acta de Imposibilidad de Acuerdo

En el caso de existir un *acuerdo total*, se firma un acta de mediación en la cual conste el contenido integro de lo realizado y de los acuerdos a los que se ha llegado, la misma que tendrá el efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, pudiendo ser ejecutada mediante vía de apremio¹⁰⁹, sin embargo cabe una reflexión con respecto a esto ya que nuestra ley no contempla ninguna forma de apelación o recurso frente a estas actas de mediación de acuerdo total, lo cual tiene una respuesta obvia y es que los acuerdos son propuestos, discutidos y aceptados por las partes que han intervenido en el proceso por lo que resulta ilógico que después de firmar el acta alguno de ellos desee reclamar al respecto.

Como consecuencia directa de la firma de estos tres tipos de actas se puede mencionar que en el caso del acta de mediación donde el acuerdo es total, se da por concluido el proceso definitivamente y no existirá la posibilidad de sustanciar el mismo caso en otras instancias. Cuando el acuerdo es parcial, significa que aquellas partes sobre las cuales no se llega a un acuerdo pueden ser sustanciadas en otra instancia, mientras que aquella sobre las que se logra acuerdos tendrán el mismo efecto que las actas de mediación, y finalmente, cuando existe un acta de imposibilidad de acuerdo se abre la posibilidad de que todo el caso pueda ser tratado en otras instancias.

¹⁰⁹ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título II, artículo 47, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

Esto es sustentado por la Ley de Arbitraje y Mediación que menciona:

“Art. 47.- El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que conste el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo.

En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá por lo menos una relación de los hechos que originaron el conflicto, una descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrán las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador.

Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en éste son auténticas.

El acta de mediación en que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el Juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación.

Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegare a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y esta suplirá la audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. No obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda en el juicio verbal sumario...”¹¹⁰.

Sin duda estas apreciaciones son las que le dan valor legal y seguridad jurídica a los acuerdos totales y parciales provenientes de un proceso de mediación, la posibilidad de ejecutar los mismos y la oportunidad de tener otras vías en caso de que resulte imposible conseguir un consenso, de igual manera el artículo anteriormente citado contempla el efecto, sobretodo de las actas de acuerdo total ya que se las considera a

¹¹⁰ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título II, artículo 47 inciso cuarto, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

estas con el valor de *sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio*¹¹¹.

Por una serie de factores en cuanto a los contextos en los que se desenvuelven los conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera en el Ecuador es importante mencionar la figura de la **Mediación Comunitaria**, la cual ha sido reconocida por nuestra legislación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, donde los protagonistas son las comunidades indígenas y negras, organizaciones barriales y en general organizaciones comunitarias que se encuentran facultadas para formar centros de mediación y en general para intervenir en los procesos y que tienen el mismo valor legal y el efecto jurídico que el obtenido a través de la mediación contemplada en la legislación ecuatoriana.¹¹²

Para efectos de nuestro estudio la mediación comunitaria es aquel procedimiento que puede desarrollarse o debería desarrollarse dentro de las comunidades indígenas y negras, y este es el contexto de nuestro estudio.

Para entender de una mejor manera lo que significa comunidad debemos mencionar que: “es una agrupación o conjunto de personas que habitan en un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando redes de comunicación, de intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes en el ámbito local”¹¹³

En el tema en el cual desenvolvemos nuestro estudio, toma una gran relevancia la posible aplicación de la mediación comunitaria ya que es de conocimiento público que en los sectores indígenas de la amazonía ecuatoriana especialmente el acceso a la justicia es sumamente complicado, esto debido a factores como la lejanía en la que

¹¹¹ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título II, artículo 47, inciso cuarto, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

¹¹² LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título II, artículos 58 y 59, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

¹¹³ El concepto ha sido extraído de la página de internet, www.solomediacion.com

viven las comunidades, el costo que implica intervenir en un proceso judicial y adicionalmente todos los contratiempos que involucra al desgastado órgano de justicia.

Esta es una premisa fundamental en la cual se puede basar el impulso y la promoción de la mediación comunitaria como un método alternativo de solución de conflictos para estos sectores de nuestro país, que además por el tipo de conflicto que surge necesitan de una resolución rápida y eficiente que en gran medida pueda evitar complicaciones que crecen con el paso de los días por la falta de acuerdos.

Es evidente que la mediación comunitaria se convierte en un mecanismo que puede atacar conflictos desde dos frentes, ya que puede resolver conflictos en el seno de cada comunidad y por otra parte contribuir a la generación de acuerdos con agentes externos que inciden en la comunidad, pudiendo ser el caso de las comunidades indígenas y las compañías petroleras.

Entre los objetivos de la mediación comunitaria podríamos encontrar el mejoramiento de la comunicación y comprensión entre los miembros de la comunidad, capacitación a los miembros de las comunidades en destrezas de negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones; esta técnica ofrece espacios de trabajo para la resolución de conflictos, y para obtener información; sin embargo, cuando nos encontramos frente a temas tan complejos como los que enfrentan las comunidades por la actividad petrolera, las asimetrías de poder se hacen evidentes y que la legislación podría ser insuficiente y debe buscar metodologías apropiadas para poder mantener una correcta intervención y manejo del conflicto con la mediación comunitaria.

Como todos los métodos alternos de solución de conflictos, la mediación comunitaria debidamente implementada y aplicada puede ofrecer una serie de ventajas que contribuyan a la generación de confianza, a la búsqueda de consensos y al cumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto.

Jaime Vintimilla expone algunas de las ventajas¹¹⁴ que la mediación comunitaria ofrece para la resolución de conflictos:

- *Reconocimiento de la acción comunitaria en el acceso a la justicia*
- *Valor jurídico de la mediación comunitaria*
- *Evita el acudir a agentes externos, lo cual robustece la identidad de la comunidad*
- *Ayuda a fortalecer la organización comunitaria*

Podríamos coincidir con la mediación formal en algunos temas, así como las características del mediador, pero hay que reconocer que existen elementos que diferencian a estos dos tipos de mediaciones, que sobretodo van encaminados a la participación social y la aceptación comunitaria donde adicionalmente hay que tomar en cuenta todo aquello que hace referencia a la organización social y a los propios sistemas de administración de justicia comunitaria a los cuales inevitablemente debe ajustarse este tipo de mediación que aparentemente no resultaría tan complejo por la flexibilidad de este mecanismo y por las mismas ventajas que se han mencionado anteriormente.

Ahora es interesante, tomando en cuenta nuestro ámbito de estudio, dilucidar y entender la vinculación que tiene la Mediación con los conflictos socioambientales, es decir la posibilidad de aplicación de la Mediación Socioambiental, en la cual se involucra un mecanismos para la solución de conflictos (la mediación), el medio ambiente y temáticas de orden social.

Debemos considerar primero que el proceso de mediación será el mismo en este ámbito, es decir que el procedimiento, los requisitos, las características, la participación de las partes y del mediador serán las mismas que hemos analizado anteriormente.

¹¹⁴ VINTIMILLA, Jaime, (Compilador), “Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador”, Programa Regional de Justicia de Paz 2002 – 2005, Págs. 20, 21, 22, 23 y 24

En cuanto al ámbito donde se aplicarán estos procesos hay que considerar que el tema ambiental es un eje fundamental ya que este es el bien que se encuentra afectado por un daño ambiental, sobre el cual existen incidencias de orden privado por encontrarse personas perjudicadas, y la carga social por la búsqueda del respeto o reconocimiento de ciertos derechos constituye un factor predominante dentro del conflicto y por otra parte se evidencian implicaciones en el orden público ya que el estado como ente regulador y garantizador de ciertos derechos debe mantener algún nivel de intervención.

Por las características de la mediación se considera como un mecanismo idóneo para el manejo de conflictos socioambientales, ya que las partes involucradas pueden trabajar de manera conjunta en la búsqueda de acuerdos, pero hay que tener claro que en este tipo de conflictos es evidente la existencia de una relación asimétrica entre las partes sobretodo por las relaciones de poder, el nivel de información y el acceso a la misma, lo cual es una desventaja al momento de entrar en una mesa de diálogo donde la parte con mayor poder e información puede manipular a tal punto el proceso que los actores en desventaja acepten todo cuanto esta proponga.

Por estas relaciones asimétricas es indiscutible que previo a intervenir en un proceso de mediación, se debe intervenir con otras metodologías de manejo de conflictos con la finalidad de preparar y fortalecer a las organizaciones comunitarias para que puedan enfrentar de mejor manera los procesos de diálogo y la toma de decisiones. Esto ya ha sido considerado y en algunos casos se ha trabajado por parte de ciertas ONGs en estas metodologías. Con respecto a este tema lo trataremos una vez que se pueda establecer y proponer una metodología integrada para el manejo de conflictos socioambientales en la actividad petrolera.

Es claro que en estos procesos se discutirá principalmente los aspectos técnicos en cuanto al daño, las indemnizaciones por daños y perjuicios, por el manejo, uso y aprovechamiento de recursos naturales, la exigibilidad y reconocimiento de derechos por lo que la persona elegida como mediador debe ser sin duda experto en el tema ya que al ser el encargado de conducir los procesos debe saber exactamente de lo que se

esta hablando por que de otra manera es posible que los diálogos tiendan a fracasar por la falta de control de la situación.

Finalmente debemos mencionar que la mediación si ha sido aplicada como un mecanismo de resolver conflictos socioambientales en el Ecuador, ya sea por solicitud de las partes o por apoyo e inducción de ONGs, como ejemplo podemos citar que en el año de 1997 se dio un proceso de mediación ante la Dirección de Mediación de la Defensoría del Pueblo entre los agricultores de la zona de Tarapoa y la compañía City Investing Company Limited, por la inconformidad en las indemnizaciones recibidas por la construcción del Oleoducto Secundario Tarapoa-Lago Agrio; lamentablemente después de transcurrido todo el proceso no se llegó a la firma de un acuerdo, que sabemos nosotros es parte del procedimiento y lo establecido por la Ley de Arbitraje y Mediación, lo importante en el ejemplo, mas allá del resultado, es evidenciar que la mediación si es un mecanismo aplicable a la resolución de conflictos socioambientales.

2.2.3 Negociación

Casi con seguridad se puede decir que la negociación es una de las formas más antiguas para resolver conflictos que se conoce, es decir que la negociación es una realidad de la vida, una forma básica para lograr acuerdos de las cosas mas sencillas como de aquellas extremadamente complejas, en base a la existencia de intereses comunes pero también opuestos entre las partes, en la cual cada uno de nosotros, como actores principales, de una u otra forma somos negociadores, estos procesos se evidencian y visualizan todos los días en diferentes campos e interacciones sociales donde a cada momento debemos negociar hasta el punto de hacerlo de una forma tan común y cotidiana que no nos damos cuenta.

En el Ecuador la figura de este método alternativo de solución de conflictos ha sido muy empleado, a pesar de que nuestra legislación no la contempla o no formaliza jurídicamente a la negociación como mecanismo de resolución de controversias, sin embargo su aplicación es de uso cotidiano, a esta negociación se la conoce también

como una “transacción” a la que las personas recurren para evitar complicaciones extremas provenientes de un conflicto, de aquí un conocido refrán en nuestro medio que expresa “es preferible un mal arreglo que un buen juicio”.

A pesar de que no se encuentra expresada la negociación en nuestra ley, como pasa con el arbitraje y la mediación, siendo reconocida tácitamente como hemos mencionado, la negociación si tiene un carácter vinculante y obligatorio a través de los convenios y actas transaccionales provenientes de este proceso, pero a pesar de contar con una reglamentación específica los acuerdo a los que se llega no pueden ser contrarios a los mandatos legales expresados en las distintas leyes ecuatorianas.

Si bien es cierto que a primera vista la transacción y la negociación resultan similares podemos mencionar que la negociación se refiere a todo un proceso en el que se buscan acuerdos, mientras que la transacción puede resumirse al acto de acordar o llegar a la acuerdos después de un proceso de negociación.

La negociación “es un proceso social de resolución de conflictos, que consiste en un procedimiento de discusión que se establece entre partes adversas, cara a cara, por medio de representantes oficiales, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo que sea mutuamente aceptable para todos. La negociación se produce generalmente dentro de un marco más o menos codificado y normativo, que determina las condiciones en las que se deben dar las discusiones”¹¹⁵

Sobre este concepto hay que hacer una pequeña reflexión, en el se expresa que la negociación se da dentro de un marco codificado y normativo, sin embargo nuestra legislación no contempla procedimiento alguno par llevar un proceso de negociación sino que este se ha establecido en base a metodologías desarrolladas por expertos en la materia para ser implementadas como procedimientos.

Se menciona también que la negociación es “un mecanismo no adversarial o no confrontativo, es un proceso voluntario, usualmente informal, no estructurado, al que

¹¹⁵ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 71

las partes recurren para lograr un acuerdo mutuamente aceptable, sin la intervención de un tercero neutral. Generalmente la negociación guarda relación con un proceso de concesiones y compromisos mutuos donde las partes han vencido discusiones, regateos y presiones hasta alcanzar la solución de sus divergencias”¹¹⁶

Con respecto a este concepto se debe hacer una consideración con relación a la “no intervención de un tercero neutral”, debido a que no es una apreciación absoluta, ya que en un proceso de mediación las partes negocian y si son asistidas por un tercero neutral, al igual que en un proceso de facilitación. En otros casos al establecerse estos procedimientos, dependiendo de la complejidad del conflicto se necesitará la intervención no de un mediador o facilitador, pero posiblemente si la de un moderador que contribuya al control de los procesos de diálogo, por lo tanto, la intervención de un tercero estará sujeta al tipo de metodología que se vaya a aplicar para negociar.

En definitiva debe entenderse a la negociación como una instancia o proceso de diálogo y acercamiento entre las partes que evidencian una confrontación pero que de forma voluntaria acceden a exponer criterios, intereses y argumentos con el fin de buscar una solución satisfactoria para los ellos a través de una cooperación mutua, es decir que la negociación es: “un proceso voluntario en el cual los grupos se reúnen frente a frente para hallar una solución que sea aceptable para las partes involucradas en el conflicto”¹¹⁷

Como sabemos no existe un procedimiento formal de negociación pero comúnmente se debe tomar en cuenta algunos pasos que se darán para poder intervenir en esta clase de mecanismos de resolución de controversias:

- *Visualización de Conflicto:* esto quiere decir que las partes antes de intervenir en una negociación deben admitir que tienen un conflicto y

¹¹⁶ VINTIMILLA, Jaime, (Compilador), “Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador”, Programa Regional de Justicia de Paz 2002 – 2005, Pág. 18

¹¹⁷ ORTIZ, Pablo y VAREA, Anamaría, “Marea negra en la Amazonía, Conflictos Socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador”, Ediciones Abya-Yala, Pág. 162 y 163, Quito-Ecuador, 1995

que este al ser exteriorizado debe ser manejado correctamente para ser resuelto.

- *Preparación del escenario:* se refiere al establecimiento de las reglas del juego en base a las cuales se llevara el proceso de negociación, es decir es la forma en que se darán los encuentros entre las partes para el acceso a las mesas de diálogo.
- *Proceso de Negociación:* esta es la etapa crucial ya que es aquí donde se dan las discusiones frente al conflicto, se exponen intereses, criterios, argumentos, donde se proponen y plantean las formulas convenientes para la solución del conflicto.
- *Acuerdo:* este es el punto donde de llegar a un consenso las partes plasman en un documento, aconsejablemente escrito, todos los acuerdos de manera clara, además de las formas, mecanismos e inclusive tiempos en los que esos acuerdos deben cumplirse, pudiendo adicionalmente contemplar las respectivas sanciones en caso de incumplimiento.
- *Seguimiento:* no es aconsejable que la negociación concluya con la firma de los acuerdos, se debe buscar mecanismos para verificar el cumplimiento de los acuerdos y las obligaciones de las partes.

Como vemos este método alternativo de solución de conflictos es inherente a la participación esencial de partes, frente a la cual se han desarrollado algunas metodologías, entre las cuales podemos destacar la elaborada por Roger Fisher y William Ury, en su texto *Como negociar sin ceder*, conocido también como el método Harvard de Negociación o Negociación por Principios.

Ellos expresan que existen negociaciones duras y suaves, y que una tercera forma, sería una de negociación mixta es decir dura y suave a la vez, esto es, duro con el problema y suave con las personas. Lo cual consiste en decidir los problemas según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo centrado en lo que las partes dicen que van o no a hacer, busca las ventajas mutuas y que en caso de la

existencia de conflicto de intereses el resultado debe darse bajo un criterio justo independiente de las partes.¹¹⁸

Resulta interesante reconocer que muchos negociadores expertos utilizan esta metodología, que para el caso de nuestro estudio, esto es, negociaciones derivadas por conflictos socioambientales en la actividad petrolera podría resultar beneficioso, por una parte para lograr mejores acuerdos y para trabajar en procesos de fortalecimiento con los distintos actores involucrados en este tipo de conflictos.

Es evidente que negociar no resultaría tan fácil como aparenta y peor para aquella parte en conflicto que carece de cierta preparación. En el caso de la comunidades indígenas que deben enfrentar un proceso de negociación frente a actores más poderosos como compañías petroleras, han surgido de parte de algunos tratadistas preguntas como ¿Quién negocia?, ¿Qué se negocia? y, ¿Cómo se negocia?, a lo cual responden, que inicialmente debe existir un grupo de la comunidad, dirigentes, que deben tener una preparación en la materia con la finalidad de poder enfrentar un proceso de negociación en una mesa de diálogo con su contraparte; que al ir a una mesa de negociación son portavoces de una “posición de consenso” que proviene de la comunidad a la que representan; y, finalmente se establece que si la negociación es una estrategia, esta debe ser, previa y ampliamente discutida, respaldada por procesos de consulta en los diálogos participativos con la comunidad y la respectiva asesoría técnica que permita el cumplimiento de los objetivos planteados.¹¹⁹

De acuerdo con el método Harvard, de la negociación por principios los elementos básicos de negociación son:

¹¹⁸ Para ampliar el conocimiento sobre esta metodología de *Negociación por Principios*, revisar: FISHER, Roger y URY, William, “Si de acuerdo, Como negociar sin ceder”, Grupo Editorial Norma.

¹¹⁹ ORTIZ, Pablo y VAREA, Anamaría, “Marea negra en la Amazonía, Conflictos Socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador”, Ediciones Abya-Yala, Pág. 162 y 163, Quito-Ecuador, 1995

1. Personas

Como premisa fundamental se debe mencionar que hay que separar la persona del problema, tratando a la persona como ser humano y al problema dependiendo de sus propias características.

A pesar de que en la teoría lo que se ha mencionado debería ser un pilar cuando se interviene en un proceso de negociación se debe tener en cuenta algunas consideraciones.

Los negociadores son personas que tienen valores, cultura y procedencia diferente unos de otros, además tienen emociones y percepciones diversas. Todas estas diferencias pueden influir positiva o negativamente en un proceso de negociación. De igual manera la simpatía o antipatía, la confianza o desconfianza entre los negociadores puede incidir en el conflicto. La comunicación es importante en la negociación ya que se debe explicar apropiadamente lo que se piensa y lo que se quiere decir, además de saber escuchar lo que la otra persona quiere decir.

Es recomendable para que las emociones no obstaculicen la negociación: descubrirlas (las propias y las del otro), explicarlas, permitir el desahogo y no dejarse influenciar por las emociones.

La diferencia de las percepciones entre los negociadores no debe crear una barrera en el proceso, para lo cual se recomienda: ponerse en el lugar del otro, no prejuzgar por temor, no culpar al otro de sus problemas, discutir sobre las percepciones de las partes, procurar la integración y la participación de las partes.

La comunicación tampoco debe convertirse en un obstáculo para lo cual se debe: escuchar atentamente, hablar con el propósito de informar o averiguar, aclarar sus percepciones y exponer sus razones antes de sacar conclusiones.

Finalmente hay que considerar que el otro negociador se transforma en la parte que nos ayudará a solucionar el conflicto dejando de lado la imagen de que es un adversario.

2. Intereses

En la negociación por principios se recomienda trabajar en base a los intereses y no a las posiciones, que de forma general se debe considerar que los intereses están detrás de las posiciones, siendo la posición el efecto y los intereses la causa, además para lograr solucionar un conflicto hay que concentrarse en las causas. Los intereses son las aspiraciones, temores, deseos de las personas por lo que es fundamental en estos procesos descubrir los intereses propios y los de la otra parte.

Los intereses se reflejan en necesidades básicas como la seguridad, bienestar, libertad, el sentido de pertenencia, reconocimiento, los cuales se los puede descubrir mediante preguntas (por qué? o, por que no?).

De forma general en una negociación, el negociador, tiene una sola posición (siempre antagónica) pudiendo a la vez tener varios intereses (unos conflictivos y otros compatibles) los cuales no se descubren a primera vista por que pueden ser implícitos, intangibles y aún inconsistentes.

El trabajo sobre los intereses requiere mente abierta, ser duro con el problema y suave con las personas, defender los intereses propios pero también comprender los de la otra parte.

3. Opciones

Una vez que se ha separado las personas del problema y se han descubierto los intereses se debe proceder a formular e inventar opciones de beneficio mutuo con el objeto de satisfacer los intereses de las partes.

Sin embargo este trabajo de inventar opciones podría llegar a tener algunos obstáculos como la actitud negativa, el temor a inventar y la falta de iniciativa.

En general no se debe tratar de buscar la solución cuando se está bajo presión y mientras que la ansiedad nos lleve a considerar una opción única, la solución del conflicto será más difícil, por lo que se recomienda primero crear para luego evaluar y decidir.

Es importante en este momento hacer una diferenciación, tomando en cuenta que en la resolución de conflictos, las opciones son diferentes a las alternativas, se considera a las opciones como ideas diferentes entre si a través de las cuales existe más de una posibilidad de resolver el conflicto, pudiendo haber dos o mas opciones que a través de una lluvia de ideas puedan ofrecer a las partes distintas posibilidades; en cambio la alternativa tiene referencia más con el proceso, en caso de que la negociación no funcione para resolver el conflicto que otra alternativa se puede tener; es decir, si no resulta la negociación como alternativa propondremos una acción judicial o juicio.

4. Criterios Objetivos

A pesar de que en la negociación se ha trabajado sobre estos tres elementos (personas, intereses y opciones), el acuerdo estará supeditado a la voluntad de las partes como en la negociación que se da en base a las posiciones, que como vemos tiene algunos riesgos, para que esto no ocurra, es importante tomar en cuenta criterios objetivos para la toma de decisiones.

Otro de los argumentos existentes para tomar en cuenta los criterios objetivos es que la decisión debe estar separada de la voluntad con el objetivo de legitimar el acuerdo con base en la satisfacción de las partes.

Los criterios objetivos son parámetros comúnmente aceptados como la ley, informes de peritos, valor de mercado, entre otros; además se caracterizan por ser independientes de la voluntad de las partes, legítimos, prácticos y recíprocos.

La ventaja de lograr acuerdos en los cuales se hayan considerado criterios objetivos es que son menos vulnerables, resultan más justos, eficientes y mientras mas personas intervienen en la negociación facilitan el proceso.

Los cuatro elementos estudiados intervienen constantemente en la negociación desde que inicia hasta que se llega al acuerdo o se desiste del proceso.

Otro elemento que es importante analizar y que se lo contempla dentro del método Harvard de Negociación por principios es el MAAN, este elemento hace referencia a la Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado (MAAN) y se lo relaciona siempre a las asimetrías de poder, es decir, cuando la otra parte es más poderosa que nosotros.

De acuerdo con este método, el ser más poderoso significa tener ventajas sobre la otra parte, ventajas que pueden ser económicas, físicas, de conocimiento, etc.; la parte menos fuerte al contar con un MAAN significa que tiene una alternativa mas para buscar la solución del conflicto, es decir, que si por esta diferencia de la relaciones de poder no se puede conseguir un acuerdo razonable, existirá una nueva posibilidad a través de la utilización de esta herramienta que comúnmente se asemeja a contar con un “As bajo la manga”, con lo cual se lograría un estado de protección frente a un mal acuerdo y aprovechar al máximo las ventajas que nosotros podamos tener.

Sin embargo, contar con este MAAN no significa tampoco tener el conflicto resuelto si la negociación no funciona, lo que significa que esta herramienta no asegura un éxito total, simplemente será una alternativa mas con la cual contamos para igualar las asimetrías de poder con el finalidad de encontrar la solución.

De forma general la negociación se la puede dividir en tres etapas: análisis (diagnóstico de la situación), planeación (establecimiento de estrategias frente a los cuatro elementos) y discusión (basada en los criterios que rodean a los cuatro

elementos), dentro de las cuales debemos considerar y revisar constantemente los cuatro elementos.

En cuanto a la aplicación de la negociación en conflictos socioambientales, se ha utilizado en lo que se denomina, una “negociación informal” ya que provienen de una acción cotidiana, por ejemplo cuando los *relacionadores comunitarios* de las empresas petroleras negocian con una *comunidad indígena* con la finalidad de conseguir un acuerdo proveniente de un conflicto socioambiental producido por la actividad petrolera. Esta actividad es cotidiana, sin embargo también hay casos en los que se han dado “negociaciones formales” entre estas partes en conflicto, como es el caso de Código de Conducta para el proceso de diálogo entre Occidental Exploration and Production Company (OEPC) y la Organización Indígena Secoya del Ecuador (OISE) firmado el 29 de octubre de 1999.¹²⁰

Al intervenir en estos procesos de negociación relacionados con los conflictos socioambientales producidos por la actividad petrolera hay que tomar en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo que la negociación no solo sirve cuando se ha desencadenado un conflicto que debe ser urgentemente solucionado, sino que también se puede utilizar este método alternativo de solución de conflictos, como una forma de prevenir conflictos futuros que puedan producirse con el inicio las de actividades petroleras. Pero en el caso de que se la utilice para negociar sobre un daño ya ocasionado hay que tomar en cuenta aspectos como los citados en los pasos para negociar y en aquellas apreciaciones que realizan al respecto los expertos citados anteriormente.

2.2.4 Conciliación

Dentro de los métodos alternos de solución de conflictos encontramos a la conciliación, esta al igual que el arbitraje y la mediación se encuentra contemplada en nuestra Ley de Arbitraje y Medición, pero se la trata de una forma muy simple,

¹²⁰ FUENTE: Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).

donde además se la contempla como un sinónimo de mediación, para efectos de aplicación de la LAM.¹²¹

Sin embargo de lo contemplado por la Ley de Arbitraje y Mediación, que no brinda una explicación de lo que es la conciliación es importante recoger algunas apreciaciones sobre el tema.

Tratadistas mencionan que la conciliación: “Es la tentativa de un tercer grupo neutral de comunicarse separadamente con los grupos en conflicto, con la finalidad de lograr una reducción de las tensiones y establecer un acuerdo sobre el proceso para la solución del conflicto”¹²², este concepto es ampliado en ciertas partes ya que se menciona que este método debe conducir a las partes a un manejo del conflicto siendo el objetivo final de esta estrategia lograr que las partes lleguen a sentarse en la mesa de negociación.¹²³

De acuerdo con las características de la mediación así como los conceptos recogidos, en realidad podría llegar a entenderse a la conciliación y a la mediación como sinónimos, pero también se pueden considerar ciertas diferencias que llevarían a romper el esquema de ser considerados como sinónimos de forma absoluta.

A pesar de que la Ley de Arbitraje y Mediación Ecuatoriana considera como sinónimos a la Conciliación y a la Mediación, cabe mencionar que existen diferencias en cuanto a estas dos herramientas, ya que, mientras la mediación contempla la *intervención real de un tercero* imparcial para la búsqueda de acuerdos, la conciliación se basa en la *intervención tentativa de un grupo neutral*. Otras de las diferencias es que la mediación es un proceso de resolución de conflictos mientras que la conciliación busca reducir tensiones para buscar un acuerdo sobre la herramienta que se utilizará para resolver el conflicto; y, en cuanto al proceso la

¹²¹ LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, Título II, artículo 55, inciso tercero, publicada en el Registro Oficial No. 145, del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero de 2005

¹²² GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 71

¹²³ ORTIZ, Pablo y VAREA, Anamaría, “Marea negra en la Amazonía, Conflictos Socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador”, Ediciones Abya-Yala, Pág. 162 y 163, Quito-Ecuador, 1995

conciliación busca reuniones por separado con las partes mientras que la mediación en conjunto entre las dos partes con eventuales reuniones por separado.

Esta visión procesal se manifiesta por ejemplo en las audiencias o juntas de conciliación que se llevan a cabo en los procesos judiciales ordinarios, en los cuales la similitud y los objetivos que persiguen son los mismos que la mediación, es decir un tercero imparcial que ayuda a obtener un consenso entre las partes y que en caso de tenerlo terminará el proceso, de lo contrario continúa con el normal desarrollo del juicio, lo cual es distinto cuando se toma a la conciliación como una estrategia.

Si tomamos en cuenta a la conciliación como una estrategia, así la tratan los conceptos analizados, esta es muy diferente a la mediación, ya que en este caso funciona como una herramienta preparatoria de las condiciones básicas y necesarias para que las partes puedan llegar a una mesa de diálogo, a una negociación e inclusive a una mediación, es decir que al disminuir tensiones entre las partes estas aún no deciden sobre como resolver el conflicto sino que se discute que método se debe utilizar para el manejo del conflicto, entonces con la conciliación como estrategia aún no se ha resuelto sobre el conflicto central a pesar de que ya existen acuerdos preliminares.

Dentro de los conflictos socioambientales podemos mencionar que la conciliación es permanentemente utilizada como una estrategia dentro de las diversas metodologías consideradas para el manejo e intervención de conflictos, ya que por su flexibilidad es recomendable su utilización para mantener los primeros acercamientos con las distintas partes que se encuentran con una evidente incompatibilidad de intereses, justamente con el objetivo de iniciar por donde se debe conducir al conflicto, a pesar de esto, la conciliación dentro de los conflictos socioambientales se la ha utilizado en muchos casos de una manera informal, esto a pesar de que ya haya sido considerada también dentro de una estrategia.

2.2.5 Facilitación

Dentro del análisis sobre aquellos métodos aplicables a la solución de conflictos por la vía alternativa debemos mencionar que la facilitación al igual que la negociación es uno de los mecanismos más utilizados y con un alto grado de aceptación de las partes en conflicto, en términos generales facilitar es hacer *fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin*.¹²⁴

La facilitación “se refiere a la ayuda de un tercer grupo neutral, para posibilitar que se lleve a cabo una reunión productiva y se amplíen los canales de comunicación entre las partes en conflicto”¹²⁵.

Esta concepción sobre la facilitación condiciona la participación de varios elementos: de un grupo neutral pudiendo ser uno o varios los mismos que se los denominará como facilitadores, adicionalmente involucra un proceso de diálogo entre las partes en conflicto las cuales es necesaria que reconozcan primero la existencia del conflicto y segundo que exista un reconocimiento y aceptación para la intervención del o los facilitadores.

Es apreciable que nuestra legislación no contempla la figura de la facilitación como un mecanismo para resolver conflictos al igual que la negociación y la conciliación, sin embargo la utilización y aplicación de los mismos se sustenta en lo ordenado por la Constitución de la República en su artículo 191 inciso 3 que menciona que “se reconocerá el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos...”, argumento legal suficiente para que la facilitación y los mecanismos analizados anteriormente puedan ser implementados en distintos procesos en nuestro país.

¹²⁴ DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Aristos 2000, Editorial Ramón Sopena S.A., Bogotá-Colombia, 1996, Pág. 285

¹²⁵ GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos Socioambientales ”, Pablo Ortiz (Editor), Ediciones UPS, 1999, Pág. 71

Al ser entonces, la facilitación un proceso informal para resolver conflictos, desde el punto de vista que este procedimiento no se encuentra contemplado dentro de la legislación ecuatoriana en lo que hace referencia a los métodos alternativos de solución de conflictos, quiere decir que son las partes las que de manera voluntaria, mediante un acuerdo e inclusive por invitación de alguna de ellas, eligen intervenir o participar en este tipo de procesos, siendo ellos mismos los que determinen la forma en la que la facilitación se llevará a cabo, es decir, que ellos determinarán quienes serán los facilitadores, la forma en la que se llevará el proceso, cuando y donde serán las reuniones, el tiempo de duración de las mismas, etc.

Para que un facilitador intervenga en este proceso, como hemos mencionado, debe contar con la aceptación de las partes, ya que de otra manera su intervención sería infructuosa, para lo cual el facilitador debe cumplir con algunas características básicas que contribuyan de mejor manera con el proceso; estas características entre otras son:

- El facilitador no trae las respuestas al conflicto, el no puede ser dueño de la respuesta.
- El facilitador debe asegurar una buena comunicación entre las partes ya que de ella viene la respuesta con lo cual se genera un sentido de apropiación.
- El facilitador debe tener el poder de la reunión, es decir que el debe manejar a la partes y el proceso de tal forma de que se logren los objetivos trazados.
- El facilitador debe antes de iniciar las sesiones, definir las reglas del juego para que las partes sepan con claridad que es lo que deben, pueden o no pueden hacer y como hacerlo.
- El facilitador puede repartir poder dentro del grupo, es decir que puede designar algunas funciones específicas para que las partes las desarrollen dentro de la sesión, sin que esto llegue a percibirse como un favoritismo hacia alguna de ellas.

- Debe organizarse y planificarse las sesiones por parte del facilitador, inclusive preparando el espacio físico donde se desarrolla, lo que quiere decir que no puede ser algo improvisado.
- Al ser facilitador se debe tener un conocimiento mínimo de la materia que se esta tratando, e inclusive en algunos casos se podría considerar que el facilitador sea un experto en la materia.
- El facilitador debe ser siempre imparcial, objetivo y neutral, sin embargo el tema de la neutralidad viene siendo discutidos por personas que manejan el tema ya que se considera que no se puede ser totalmente neutral, pero sin embargo eso hay que demostrarlo cuando se trabaja en estos procesos.
- Debe existir por parte del facilitador interés y posicionamiento en el tema materia del conflicto, esto no tiene que ver con el tema de la neutralidad e imparcialidad, ya que se refiere a que el facilitador debe atraerle y saber sobre el tema.
- Para que el facilitador realice un buen trabajo es recomendable que cuente con el apoyo de un equipo durante el proceso que contribuya al buen desarrollo del mismo¹²⁶.

Es importante reconocer dos herramientas básicas de la facilitación que tienen referencia a la actuación del facilitador que son: las preguntas y la escucha¹²⁷.

En términos generales la escucha se la puede interpretar a “ponerse en los zapatos del otro”, donde el manejo de las emociones resulta un tema trascendental, y no hace referencia solamente a la acción de escuchar, ya que aquí se involucran diversas técnicas como herramientas adicionales, como la actitud corporal de escucha, la utilización de movimientos de la cabeza para asentir que escuchas, la técnica de espejo, parafraseo, etc.

¹²⁶ CURSO DE CAPACITACIÓN EN METODOLGÍAS DE TRATAMIOENTO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, Pablo Ortiz T., Quito-Ecuador, 11, 12 y13 de octubre de 2004

¹²⁷ CURSO DE CAPACITACIÓN EN METODOLGÍAS DE TRATAMIOENTO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, Pablo Ortiz T., Quito-Ecuador, 11, 12 y13 de octubre de 2004

De la misma manera la herramienta de las preguntas es muy importante ya que a través de estas se puede determinar circunstancias, aclarar conceptos y mejorar el nivel de información. En esta técnica se utilizan tres tipos de preguntas: abiertas, cerradas y circulares, las mismas que se las debe realizar a través del planteamiento de una hipótesis, inclusive se menciona que cuando se realiza una buena pregunta a alguna persona, esta tiende a mover sus ojos hacia arriba y a la izquierda.

Sin duda uno de los temas más importantes en un proceso de facilitación es la comunicación. Asegurando una buena comunicación no solo desde el punto de vista verbal sino también no verbal, es decir que es un cúmulo de actitudes y palabras con que se expresa los criterios, aunque este un tema que debe ser correctamente manejado ya que no existe la posibilidad de no comunicarse entre las partes, siendo que en muchas ocasiones no se llegue a un acuerdo pero si se puede mantener y fortalecer la relación de las partes involucradas en el conflicto.

En el intento de dar un mejor manejo a los conflictos socioambientales en el Ecuador, la facilitación ya ha sido incorporada, sea como estrategia formal y metodológicamente construida o como un proceso informal basado en necesidades inmediatas frente a determinados casos, por iniciativa de algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) o por solicitud de las partes con la finalidad de buscar acuerdos y salidas al conflicto, habiendo algunos casos en los cuales se la ha aplicado convirtiéndose en una alternativa válida para enfrentar este tipo de conflictos que por sus características resultan muchas veces complejos.

La facilitación de forma general es similar a la mediación sin embargo existe una diferencia sustancial en cuanto a los fines de estas herramientas, ya que mientras el fin primordial de la mediación es la búsqueda de acuerdos, la facilitación y su finalidad principal es buscar reuniones y procesos de diálogo para ampliar la comunicación entre las partes.

2.3 Otras metodologías para el manejo de Conflictos

Después de realizar un análisis de aquellos métodos alternos de solución de conflictos, que de una u otra forma han sido utilizados en nuestro país para resolver conflictos socioambientales, sean estos reconocidos o no por nuestra legislación, debemos tomar en cuenta de que existen otras metodologías que han sido desarrolladas por distintas personas u organizaciones, en especial ONGs, que han tenido la necesidad de contar con otras herramientas lo suficientemente flexibles e idóneas para ser aplicadas para resolver los conflictos con estas características.

Jurídicamente el único sustento legal que existe para la utilización y reconocimiento de estos otros métodos y metodologías se encuentra contemplado en nuestra Constitución al referirse esta, que se reconocen otros procedimientos alternativos para la resolución de conflictos¹²⁸, con lo cual se otorga seguridad jurídica tanto para aquellas personas que desarrollan estas metodologías como para aquellos que deciden utilizarlas.

Debemos mantener como premisa que estas metodologías han sido sistematizadas por sus creadores o han establecido un procedimiento fijo para su aplicación, sin embargo por su reiterado uso se conoce como generalmente se las debe utilizar además de ser aceptadas y viables para el manejo de conflictos socioambientales producidos en la actividad petrolera en el Ecuador, a pesar de que se las ha creado para el manejo de conflictos socioambientales en general, experiencia que puede ser replicada a nivel internacional frente a este tipo de controversias.

Dentro de las metodologías, como veremos a continuación existen distintos enfoques y contextos que se maneja para su desarrollo y posterior utilización, por ejemplo la metodología desarrollada por la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental “ECOLEX”, está mayormente encaminada a la caracterización¹²⁹ de conflictos donde

¹²⁸ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, Título VIII, Capítulo 1, artículo 191 incisos tercero, del 11 de agosto de 1998, CODIFICADA el 2 de Mayo de 2002

¹²⁹ Caracterización de conflictos: Determinar la tipología de los conflictos (Conceptualización, causas, características, actores, recomendaciones de manejo), Concepto de la Corporación ECOLEX

brinda algunas herramientas para conseguir dicho objetivo y donde al final de la misma, después de tener una idea clara se llega a una etapa donde se determinará a manera de recomendaciones cuales son las alternativas a seguir para la resolución de los conflictos.

La metodología general para el manejo de conflictos desarrollada por la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), se estructura desde el análisis inicial del conflicto hasta un proceso de intervención y de manejo propiamente dicho a través de un proceso de facilitación con el cual se busca llegar a acuerdos que se encaminan a la solución del conflicto. Otra metodología desarrollada a través del Manual de Campo propuesta por Pablo Ortiz tiene muchas semejanzas con la metodología de la FFLA con la consideración de que esta se vincula más con la participación e intervención de organizaciones y comunidades en el desarrollo del conflicto.

De estas metodologías, las cuales ya han sido analizadas, que sistematizaremos a continuación, se las puede considerar anticipadamente como válidas para su implementación dentro de conflictos socioambientales en la actividad petrolera al punto de que en determinado momento del conflicto las tres metodologías podrían llegar a ser aplicadas.

Como se ha mencionado anteriormente el manejo de conflictos no implica necesariamente una acción de resolver, es decir, que metodológicamente el manejo brinda un aporte y un sustento mayor a los procesos de intervención, hecho que contribuye de manera especial a los conflictos socioambientales ya que las herramientas utilizadas como la caracterización, evaluación, fortalecimiento, etc., contribuyen a enfocar aspectos más amplios que a la vez se constituyen en características propias de este tipo complejo de conflictos.

La intención de este estudio es realizar un aporte sobre los aspectos metodológicos de manejo de conflictos que puedan alinearse y contribuir integralmente en procesos conflictivos con el objetivo de resolverlos, afirmando que tanto el manejo y la resolución son perfectamente compatibles y complementarios.

Metodología para el Manejo de Conflictos Socioambientales desarrollada por la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental “ECOLEX”¹³⁰.

1. Caracterización de conflictos
2. Diseño y aplicación de estrategias
3. Implantación de metodologías
4. Seguimiento

Caracterización de Conflictos.

- Revisión de información primaria y secundaria
- Acercamiento con los actores
- Mesas de diálogo / talleres
- Socialización, sensibilización del trabajo a realizar
- Diseño y elaboración de una ficha
- Selección de informantes
- Conformación de grupos de apoyo (capacitación y Paralegales)
- Levantamiento de información
- Análisis y Procesamiento de la información
- Validación de la información
- Presentación de resultados
- Recomendaciones y conclusiones

Diseño y aplicación de estrategias.

- Determinación de criterios:
 - Cartográficos
 - Demográficos
 - Ambientales

¹³⁰ Fuente: Corporación de Gestión y Derecho Ambiental “ECOLEX”

- Sociales
 - Económicos
 - Políticos
 - Legales
 - Geográficos
 - Otros
- Definir acciones
 - Priorizar acciones
 - Elaboración de un plan de intervención

Implementación de Metodologías.

- Validación del plan de planificación
- Equilibrar capacidades entre los actores
- Legitimación de la representatividad
- Facilitar el diálogo
- Propuestas de solución
- Factibilidad de la ejecución de las soluciones propuestas
- Acuerdo u otros medios de solución de conflictos

Seguimiento (Monitoreo)

Metodología para el manejo de Conflictos Socioambientales desarrollada por la Fundación Futuro Latinoamericano “FFLA”¹³¹.

1. Evaluación inicial de la situación
2. Diseño del proceso
3. Conducción del proceso de Facilitación
4. Implementación de los acuerdos. Monitoreo

¹³¹ Fuente: Fundación Futuro Latinoamericano “FFLA”

Evaluación inicial de la situación

- Evaluación preliminar
- Recolección de información
- Análisis y sistematización de la información
- Presentación de la información

Diseño del proceso

- Estrategia
 - Redefinir constructivamente el problema
 - Identificar las metas del proceso. Evaluar condicionamientos externos
 - Clarificar la conexión del proceso con el sistema formal de toma de decisiones
 - Convocatoria. Estructura de la participación y definición de roles
 - Formato de las reuniones
 - Otros aspectos importantes
- Plan de Trabajo
 - ¿Cuántas reuniones son necesarias?
 - ¿Cuánto deberían durar las reuniones?
 - ¿Qué formato tendrán? ¿Abiertas al público o cerradas?
 - ¿Qué actividades se realizarán entre reuniones?
 - Definición de agendas tentativas para cada reunión

Conducción del proceso de Facilitación

Facilitar es hacer “más fácil” el trabajo de un grupo, al ayudar a sus miembros a interactuar de modo más efectivo

Implementación de los acuerdos. Monitoreo

Se debe tener en cuenta las preguntas: ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Con que recursos?.

- ¿Quién será el encargado de hacer que cosa?
- ¿Es la solución técnica y legalmente apropiada?
- ¿Aprobarán los acuerdos aquéllas personas cuyo apoyo se necesita?
- ¿Cómo se financiará la implementación?

La metodología antes mencionada desarrollada por la FFLA, nos da parámetros generales de los distintos pasos que se deben dar para el involucramiento en el manejo de un conflicto socioambiental, institución que lo aplica constantemente en su campo de trabajo, sin embargo la Fundación Futuro Latinoamericano a desarrollado una metodología específica para la intervención dentro de los conflictos socioambientales que han surgido o se han derivado de la actividad petrolera.

Esta metodología se la ha concebido de forma general como un proceso de capacitación a los distintos actores, con lo cual se pretende estructurar un escenario para que aquellas partes involucradas en este tipo de conflictos sean estas comunidades indígenas, compañías petroleras y en algunos casos entes estatales y que puedan llegar a una mesa de negociación con el objetivo de buscar alternativas y salidas coherentes, legales, justas a sus conflictos.

A esta metodología se la ha denominado como “Diálogo Tripartito”, la misma como hemos mencionado ofrece capacitación, formación y fortalecimiento a través de distintas etapas como la de integración, conocimiento mutuo y relaciones constructivas, además de que ofrece un módulo de capacitación de facilitadores y en

definitiva conjuga una serie de herramientas que pueden ser aplicadas dependiendo del momento del conflicto para procurar un eficaz manejo del mismo.¹³²

Metodología para el Manejo de Conflictos Socioambientales desarrollada por el Dr. Pablo Ortiz (FTPP / FAO)¹³³.

A esta metodología se la ha llamado como “Manual de Campo, para analizar y decidir frente a Conflictos Socioambientales”.

De acuerdo a Pablo Ortiz el propósito de esta metodología: “pretende posibilitar a los actores menos favorecidos, fortalecer sus capacidades de analizar y tomar decisiones frente a los conflictos socioambientales. No busca inducir tipos de salidas, aunque aboga por aquellas definidas fundamentalmente como vías agonales y pacíficas, basadas en la equidad y el respeto a los derechos humanos”, adicionalmente menciona que: “se concibe, entonces como una pauta para la acción coordinada y concertada entre los distintos componentes de un conglomerado: jóvenes y adultos, mujeres y hombres, líderes o dirigentes y socios de una base organizativa, entre los miembros de una agrupación mono o pluricultural o multiétnica”¹³⁴

Los distintos pasos a seguir en la implementación de esta metodología son los siguientes:

1. Identificación del Conflicto y sus causas
2. Definición de opciones frente a la situación
3. Planeación de la Estrategia de Acción
4. Participación en la transformación del conflicto
5. Sistematización, Seguimiento y Evaluación del Proceso

¹³² Para ampliar información revisar: FIERRO, Carlos y otros, “Capacitación para el Diálogo Tripartito”, Publicado por InWEnt, elaborado por InWEnt en convenio con el consorcio entre la Fundación Futuro Latinoamericano de Ecuador y el Programa PONSACS del Centro de Weatherhead de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, Quito-Berlín 2003

¹³³ Fuente: Pablo Ortiz T.

¹³⁴ Material de apoyo: “CURSO DE CAPACITACIÓN EN METODOLGÍAS DE TRATAMIOENTO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES”, organizado por la Fundación Futuro Latinoamericano, Pablo Ortiz T., Quito-Ecuador, 11, 12 y13 de octubre de 2004

Como vemos los pasos que sigue esta metodología son similares a los que han sido mencionados en la metodología desarrollada por la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), sin embargo es muy importante reconocer que este “Manual de Campo”, recoge elementos similares pero como plantea, su propósito el enfoque y el contexto en el que se lo debe implementar, es para fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para que estas puedan enfrentarse a un conflicto socioambiental.

Metodología: Pautas para el Manejo alternativo de Conflictos Socioambientales, desarrollado por Pablo Ortiz y Anamaría Varea.¹³⁵

1. Definir el conflicto
2. Análisis de las dinámicas estructurales
3. Acceder y analizar la información
4. Análisis del conflicto específico
5. Definición de estrategias
6. Posibilidades de resolver el conflicto por la vía formal
7. Hacer visible el conflicto
8. Encuadrar el problema dentro de una preocupación internacional
9. Delegar la representación o asociarse con otros en la defensa de los intereses de las comunidades
10. Activismo

Definir el conflicto

Por la gran cantidad de conflictos que puede llegar a tener la comunidad u organizaciones dentro de su cotidianidad, es importante individualizarlos a través de una definición es decir que se lo caracteriza y se lo separa de otros conflictos con la finalidad de facilitar su análisis y comprensión, es decir trabajar sobre un conflicto específico.

¹³⁵ Fuente: ORTIZ, Pablo y VAREA, Anamaría, “Marea negra en la Amazonía, Conflictos Socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador”, Ediciones Abya-Yala, Pág. 153 a 160, Quito-Ecuador, 1995

Análisis de las dinámicas estructurales

Las dinámicas estructurales se refieren a los condicionamientos tanto nacionales como internacionales en las cuales se involucran los actores de un conflicto, los mismos que se los debe entender con claridad con el objetivo de conocer los obstáculos o alternativas favorables existentes en el manejo de un conflicto específico.

Acceder y analizar la información

Por los contextos en los que se aplica este tipo de metodología, el acceso y análisis de la información se refiere a como conjugamos estos elementos para proporcionar la información necesaria a las comunidades que se encuentran involucradas en un conflicto socioambiental, es decir que hay que buscar estrategias previas para que la comunidad acceda a información relevante en cuanto al conflicto y por otra parte hacer que esa información sea clara y entendible para la comunidad.

Análisis del conflicto específico

Una vez que contamos con una inicial definición del conflicto y con la suficiente información del mismo, el análisis se basará en aspectos geográficos, históricos, actores, causas, problemas y contextos en los que se desarrolla el conflicto, es decir que se realiza un análisis específico y pormenorizado del conflicto el cual permitirá definir las estrategias.

Definición de estrategias

La definición de estrategias se refiere a la forma y a los pasos que se deben dar para abordar el conflicto, para lo cual debe existir conciencia sobre el conflicto a nivel comunitario y participativo, para posteriormente poder definir con los líderes de la

comunidad las estrategias, esto es tener la capacidad de articularlas y que exista una representación adecuada en dichas acciones.

La conciliación, negociación y mediación han sido comúnmente utilizadas como estrategias para abordar conflictos en cuanto a la actividad petrolera, sin embargo estos diálogos requieren de procesos preparatorios previos.

Posibilidades de resolver el conflicto por la vía formal

A pesar de que mucho se habla de la cultura del diálogo y de los métodos alternos de solución de conflictos hay que tomar en cuenta y considerar de que hay otras posibilidades las mismas que pueden ser por la vía judicial o la vía administrativa, es decir, por la vía formal, la cual conocemos los problemas e inconvenientes que tienen a nivel estructural.

Hacer visible el conflicto

Es evidente que existen muy pocos espacios a través de los cuales se pueda hacer visible un conflicto. Al tratarse de conflictos socioambientales, que son de interés nacional como internacional, se puede recurrir a los medios de comunicación los cuales cuentan con las herramientas para que este tipo de conflictos se conviertan en temas de debate público, todos esto conjugado al poder que manejan los medios de comunicación.

Encuadrar el problema dentro de una preocupación internacional

Como estrategia se puede considerar que llevar este tipo de conflictos a niveles internacionales resulta favorable ya que la comunidad internacional se preocupa constantemente, tanto en la conservación del medio ambiente como el resguardo de grupos minoritarios como las comunidades indígenas y los cuales han encontrado en organismos internacionales el respaldo que tal vez no se les a brindado en sus propios países.

Delegar la representación o asociarse con otros en la defensa de los intereses de las comunidades

Esto quiere decir que en el caso de aquellas comunidades que no tengan la suficiente capacidad para enfrentarse contra actores mas poderosos en distintos aspectos puede buscar la ayuda o asociarse con terceros para que estos colaboren en el manejo del conflicto, muchas veces se conoce este tema como el de establecer alianzas estratégicas para buscar que su conflicto pueda trascender a nivel nacional, regional o internacional. A pesar de esto, estas alianzas deben acompañarse con procesos de capacitación y fortalecimiento comunitario con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las acciones delegadas y las consecuencias del asocio con terceros.

Activismo

Al hablar del activismo debemos propender que se lo lleve por la vía pacífica, tratando de no utilizar acciones no convencionales como las huelgas y paros que están desgastados y pueden llevar a desprestigiar mucho la imagen de una comunidad o una organización.

El activismo debe verse como una estrategia que se encamine a visualizar el conflicto y donde tendrán mucho que ver los medios de comunicación para con este poder llamar la atención tanto a nivel nacional como internacional con lo cual se puede iniciar procesos de diálogo, generar opinión y debate público que produzca transformaciones a nivel social, cambios en políticas públicas y conciencia de las realidad de los contextos de los conflictos socioambientales.

Sin duda este tipo de metodologías, a pesar de no ser comúnmente conocidas, se las puede considerar, por sus características, también como herramientas alternativas para la resolución de conflictos, lo cual contribuye a tener una visión más amplia y mayor cantidad de elementos para la intervención en conflictos socioambientales versados sobre un tema tan complejo y polémico como la actividad petrolera.

Capítulo III

3. Experiencias en el Ecuador de Conflictos Socioambientales en la actividad Petroleros. Estudio de Casos

Como hemos visto, la actividad petrolera es de aquellos procesos productivos con altos índices de generación de conflictos socioambientales, lo que se demuestra por la realidad que vive esta industria y todo su entorno, conflictos que muchas de la veces son de dominio público por la existencia de casos sumamente comentados como el caso TEXACO, el derrame en Papallacta, el caso de Sarayaku, el caso del Yasuní, pero también vale la pena comentar la existencia de “micro conflictos” que se generan día a día y que en la mayoría de ocasiones ni nos enteramos de que han sucedido.

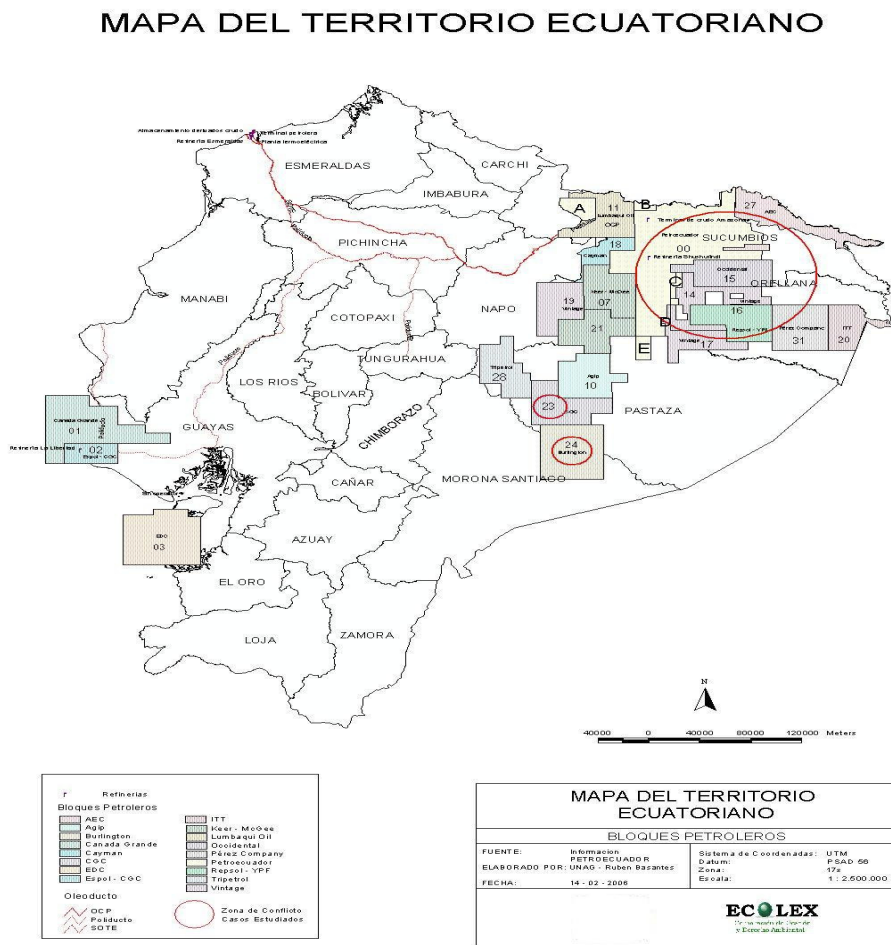
Frente a estos niveles de conflictividad es importante considerar como hemos dicho, que los conflictos que conocemos generalmente son aquellos derivados de un daño ambiental grave, como aquellos que ocasionan los derrames de petróleo o cuando se afecta áreas sujetas a protección ambiental por parte del Estado, como son los Parques Nacionales, Reservas de Biosfera entre otros, conflictos que son de dominio público y que de una u otra manera podemos tener acercamiento a tal punto de saber lo que está pasando y como se está o se pretende resolver y manejar.

Ahora debemos saber que frente a esta actividad también se generan lo que nosotros hemos denominado como “micro conflictos”, lo que quiere decir que son pequeños conflictos existentes entre comunidades y empresas petroleras que no trascienden a la opinión pública por no ser considerados de grandes magnitudes, lo cual es demasiado subjetivo, pero que sin embargo tienen fuertes implicaciones en el desarrollo de esta actividad y que son normalmente manejados por los departamentos de Relaciones Comunitarias con los que cuentan todas las compañías petroleras. Las personas que por una u otra razón conocemos de su existencia podemos decir que existen muchísimos más conflictos socioambientales por la actividad petrolera de lo que se cree y que las metodologías, formas de manejarlos y resolverlos son un interesante

punto de análisis ya que nos pueden dar una visión mas amplia de la realidad de estas situaciones.

Si consideramos que la actividad petrolera es un generador constante de conflictos resulta vital que se encuentren formas de resolverlos. Como vemos en el mapa petrolero del Ecuador existen muchas concesiones, sobretodo en la zona amazónica, tomando en cuenta las implicaciones de esta actividad resulta ilógico que ignoremos la existencia de conflictos sino que se debe propender a mejorar los niveles de manejo.

Fuente del mapa: Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX.



Después de varias investigaciones, hemos decidido realizar el análisis de tres casos relevantes y útiles para nuestro tema de estudio que son el caso del Bloque 24, caso TEXACO y el caso de Sarayaku / CGC. La elección de estos casos se ha basado en la importancia que tienen, en estos se han dado ya procesos, que si bien es cierto son conflictos aún abiertos nos proporcionarán interesantes elementos de análisis.

Hay que tomar en cuenta que en ciertas partes de los procesos existe limitada o restringida información y una muy básica sistematización, por ser estos casos de muchos años y donde se escapa algún elemento; sin embargo se ha tratado de traer a esta investigación la mayor información posible que se vincule con nuestro tema de estudio.

Como dijimos anteriormente los tres casos aún continúan en proceso, es decir que están abiertos y que inclusive estos han sido totalmente judicializados (Caso: Bloque 24 y TEXACO), o que pretendan resolverse dentro posibles arreglos negociados, para lo cual no existen las condiciones básicas pero que sin embargo por ciertos factores se ha visto la necesidad de judicializarlos (Caso: Sarayaku / CGC), lo cual abre la posibilidad para realizar una verdadera reflexión del manejo de conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera y sin duda alguna dependerán de muchos factores la aplicación de métodos formales, alternativos u otras metodologías para resolverlos.

La pauta para el manejo de conflictos en casos reales, si bien es cierto, que marca la experiencia, la intención es buscar un sistema adecuado que dé un mejor tratamiento a los conflictos sin determinar fórmulas absolutas ni estáticas para casos que pueden ser sumamente variables y distintos, por lo que la fórmula exacta no existe. Justamente la posibilidad de analizar este tipo de casos conduce a expandir criterios.

3.1. CASO: “Caso: BLOQUE 24”^{136, 137}

Dentro del análisis de casos que confrontan en un conflicto por la actividad petrolera, a compañías petroleras, medio ambiente, comunidades indígenas, organismos estatales, frente a un marco jurídico débil y una serie de elementos inherentes a los contextos en los cuales se desarrolla o se pretende desarrollar esta actividad es interesante realizar una sistematización inicial de aquellas situaciones y acciones que constituyen realmente un conflicto socioambiental, el caso del Bloque 24.

Los actores de este conflicto son la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, FIPSE, y la Compañía Petrolera ARCO Oriente.

El Bloque 24 se encuentra ubicado en la zona conocida como Transkutukú, al sur de la provincia de Pastaza y al noreste de la provincia de Morona Santiago, cantón Taisha, comprende una extensión de 200.000 hectáreas, además que corresponde a una importante porción de bosques tropicales en buen estado de conservación, en donde se encuentra también el territorio ancestral de los Pueblos Shuar y Achuar.

Sistematización del Caso:

En abril de 1998, el Estado Ecuatoriano firmó un contrato de participación con la compañía petrolera ARCO Oriente, de lo cual miembros de la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador, FIPSE, a mediados de ese año se enteraron que a partir de abril se encontraba en vigencia el mencionado contrato, sin que existiera ninguna acción de parte del Estado por informar de esta situación a los pueblos Shuar y Achuar, de que en su territorio se realizarían actividades petroleras. La noticia llegó con la misma compañía que intervendría en el Bloque 24 con las primeras intenciones de acercamiento con las comunidades y organizaciones de la zona, lo cual es ratificado y comentado por parte de Tito Puanchir, ex – Presidente de la FIPSE en entrevista concedida a Mario Melo donde expresa: “No conocíamos, no

¹³⁶ Fuente: Centro de Derechos Económicos y Sociales “CDES”, “TARIMIAT, Firmes en nuestro Territorio, FIPSE vs. ARCO”, Segunda Edición, Quito-Ecuador, 2002

¹³⁷ Entrevista: Dr. José Serrano, abogado y funcionario del CDES

nos habían hecho conocer. Mediante una carta de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Ecuador que nos había enviado, nos enteramos un poco. Claro, nosotros conocíamos extraoficialmente, pero ahí fue el momento en que nosotros llegamos a conocer que es lo que estaba pasando”¹³⁸

Es evidente que no solo frente a este tipo de conflictos, organizaciones como la FIPSE, deciden agruparse para la defensa de sus derechos y sus territorios. Como antecedentes podemos mencionar que ya estaban trabajando antes con la intención de elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial, con la finalidad de consolidar y legalizar un territorio delimitado por el Estado de aproximadamente 182.000 hectáreas, y que es de su pertenencia ancestralmente, lo cual evidencia e implica niveles importantes de organización y de unión de la organización.

De esta manera, con estas coyunturas es que deciden hacer frente a este conflicto y en asamblea con la participación de dirigencia y bases, es decir de “toda” la organización, el 13 de agosto de 1998 resuelven tres puntos fundamentales sobre los cuales confrontarían el conflicto, primero: no permitir la entrada de la petrolera en su territorio, segundo: permanecer vigilantes a las intromisiones a su territorio por parte de personas que no estén debidamente autorizadas, y; tercero: no permitir ninguna negociación individual de sus centros y asociaciones con la compañía, lo cual fue dado a conocer públicamente para conocimiento de todos aquellos interesados e involucrados en el tema.

Una vez que la posición de la FIPSE fue expresada, no paso mucho tiempo para que las demostraciones o intentos de acercamiento por parte de ARCO se hicieran notar, sin pretender realizar un juicio de valor sobre las verdaderas intenciones de estos acercamientos y cuales podrían ser sus posibles consecuencias, si podemos apreciar que las intenciones de los dos actores no eran compatibles, un ejemplo de esto fue la convocatoria que realizó ARCO a una de las comunidades para invitarlos a participar en unas reuniones con la finalidad de buscar un “acuerdo” que permita el inicio de ciertas operaciones y estudios, específicamente que se concediera el “permiso” o

¹³⁸ TARIMIAT, Firmes en nuestro Territorio, FIPSE vs. ARCO”, Entrevista a Tito Puanchir, Pág. 8, Segunda Edición, Quito-Ecuador, 2002

“aprobación” para que una subcontratista ambiental inicie ciertos estudios en su territorio.

Como resultado de las reuniones realizadas en la ciudad del Puyo, se firmo este acuerdo o “convenio de cooperación” en febrero de 1999, mediante la cual se concedía el permiso correspondiente para la intervención en la zona a cambio del cual se realizaron ofrecimientos a las asociaciones participantes, no pudiendo en este caso determinar si la negociación realizada fue justa o no.

Este tipo de actitudes desencadenaron conflictos al interior de la organización ya que como hemos visto hasta el momento la posición de la FIPSE es no negociar individualmente y por consiguiente distinta a los acuerdos que la petrolera pretendía realizar, con lo cual era evidente que se ponía “a los unos contra los otros”. Sin embargo a pesar de causar una crisis no terminaría por romper la unidad que se consolidaba dentro de la organización.

Es en este momento, se puede considerar una etapa, cuando se marca definitivamente una ruptura de las relaciones entre la FIPSE y ARCO, donde las escasas posibilidades existentes para establecer procesos de diálogo habían terminado, además de considerar por parte de la FIPSE que no se podría seguir admitiendo la continua vulneración de sus derechos y por lo tanto no quedaba otra alternativa que judicializar el conflicto lo que involucraba sin duda una contienda, es decir FIPSE vs. ARCO, a través de los mecanismos legales contemplados por nuestra legislación.

Por las condiciones en que se encontraba el conflicto, por sus connotaciones, la rapidez con la que avanzaba requería la búsqueda de una alternativa que pudiese atender al conflicto de una forma eficiente, por lo que se eligió por parte de la organización y se utilizó como mecanismo, la acción de amparo¹³⁹ contemplada en

¹³⁹ El artículo 95 de nuestra constitución expresa: “*Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará de forma preferente y sumaria, se recurrirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediación inmediatamente(...)* (...) También se podrá presentar acción de amparo contra

nuestra Constitución, la misma que fue presentada en agosto de 1999 en la ciudad de Macas ante el Juez de lo Civil de Morona Santiago, acto que fue acompañado por más de 300 personas del Pueblo Shuar afectado por el comportamiento de la compañía petrolera ARCO Oriente.

Los términos en los que se plantea la petición de la acción de amparo son aquellos tres puntos sobre los que se había venido trabajando desde que la organización se enteró de la firma del convenio de participación y que fueron anotados anteriormente.

El Juez de lo Civil de Morona Santiago, en su sentencia falla a favor de la FIPSE en la que de los tres puntos que se solicitaban y que daban el sustento a la acción de amparo no existe pronunciamiento en el tema del territorio, de que nadie pueda entrar al mismo sin previa autorización, esto se dá por la falta de delimitación y legalización del territorio a pesar del pronunciamiento previo del Estado con respecto al tema, mientras que los otros dos puntos si son aceptados, lo cual evidentemente implicaba el reconocimiento a través de la vía legal de que en la zona existía una violación a los derechos colectivos del Pueblo Shuar.

La decisión tomada por el Juez en la ciudad de Macas no fue bien vista ni aceptada por ARCO, la cual a través de una serie de pronunciamientos trata de contradecir el dictamen, aduciendo que de ninguna manera se podía prohibir el diálogo entre las partes o que los contratos que habían firmado con el Estado se los realizaron conforme a la ley, por lo que no era admisible de que ellos no puedan cumplir con su trabajo.

Durante este período existieron intentos de acercamiento para dialogar con algunas asociaciones pertenecientes a la FIPSE, lo cual involucraba que se estaba incumpliendo expresamente con el dictamen del Juez, por lo que se decide apelar la decisión ante el Tribunal Constitucional, el cual ratifica el dictamen de primera instancia en abril del 2000, dictamen que nuevamente es motivo de trasgresión por

los particulares, cuando su conducta afecte grave y directamente intereses comunitarios, colectivos o un derecho difuso(...) ”

parte de personas “anónimas” que a través de panfletos trataron de desestimar y buscar el incumplimiento de un fallo de instancia superior con la finalidad de cumplir objetivos que hasta ese momento habían sido paralizados por la justicia.

Es importante mencionar que cuando se emite la sentencia por parte del Juez de Primera Instancia y ratificado por el Tribunal Constitucional de la acción de amparo presentada por la FIPSE se expresa que no solo la compañía ARCO debía cumplir con dicha disposición sino cualquier compañía que opere o pretenda operar en el Bloque 24.

Después de estos hechos y por la inevitable paralización de las actividades, podría interpretarse como única alternativa, la compañía ARCO Oriente cede sus derechos, evidentemente también sus obligaciones, a la compañía norteamericana BURLINGTON RESOURCES en abril del 2000.

Cabe señalar que en el caso de la transferencia de derecho de una a otra compañía tampoco existió un pronunciamiento, comunicado o algún tipo de información del particular a los Pueblos Shuar y Achuar, es decir existe una nueva falla por parte del Estado y sobretodo por el hecho de vivir una crisis sobre el tema ya por algunos años.

Resulta admirable, que con la “mayor inocencia”, el primer error que comete la BURLINGTON es intentar un acercamiento con asociaciones de la FIPSE, al enviar un documento en el cual se ofrecen, en gesto de buena voluntad, algunas donaciones a las cuales las comunidades podía acceder con una simple contestación de interés, sin pensar que esto implicaba un desacato a lo dictaminado en la sentencia de amparo.

Posteriormente a esta carta existen otros panfletos tratando de persuadir o de modificar la posición de los miembros de la comunidad, sin que exista ningún éxito, como consecuencia la FIPSE solicita al Juez de Macas que intervenga para pedir a la compañía que no proceda de esta forma, después de lo cual la BURLINGTON se

declara en “estado de fuerza mayor” lo que significa que el contrato se paraliza por lo menos temporalmente hasta que existan las condiciones necesarias para poder conseguir el acercamiento para la búsqueda de acuerdos.

Durante este período, la oficina o departamento de relaciones comunitarias de la BURLINGTON, se dedicó a diseñar con el conocimiento del Estado el “Programa de relaciones comunitarias del bloque 24 durante el período de fuerza mayor” el mismo que fue intercambiado entre Petroecuador y la compañía a fines del año 2000 y que de forma anónima llegó a manos de las Federaciones Shuar y Achuar.

La FIPSE a mediados del año 2001 conoce extraoficialmente la existencia de este Programa, que sin duda una vez más violaría la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, frente a lo cual para conocer de manera íntegra y oficial el documento, con el apoyo del Centro de Derechos Económicos y Sociales “CDES”, se presenta el correspondiente habeas data con la finalidad de acceder al documento, el cual en agosto del 2001 fue concedido por el Juez Tercero de lo Civil de Quito.

En los meses posteriores y con el conocimiento de que en 2002 se convocaría a la novena ronda de licitación petrolera, se inicia un trabajo de fortalecimiento de la organización con el apoyo del CDES, en busca de un objetivo claro: el de afrontar de mejor manera el desarrollo de estas licitaciones.

Estratégicamente en este proceso existe una alianza importante entre distintas federaciones las cuales crearon el Comité Interfederacional entre los pueblos Shuar y Achuar representados por sus organizaciones FIPSE, FICSH y la FINAE con la finalidad de rechazar a las actividades de la petrolera y en apoyo a lo dictaminado en el Amparo, comité que a la presente fecha sigue reuniéndose y trabajando, que a pesar de que lo hagan esporádicamente denota un fortalecimiento y organización de los pueblos indígenas.

De forma general debemos conocer que en el 2002 se inician acciones penales contra la BURLINGTON por parte de las organizaciones afectadas, adicionalmente se

acude a la Comisión Anticorrupción en noviembre del 2002 por violaciones al contrato por parte de las Compañías ARCO y BURLINGTON, con la finalidad de que se de una investigación y seguimiento activo a los hechos acontecidos durante los últimos años.

El Ministerio de Energía y Minas, como representante del Estado no reconoce las irregularidades cometidas por la empresa en relación a varios aspectos del contrato, como los plazos en los que se deben hacer las operaciones, de que manera debían realizarse las operaciones hidrocarburíferas y otros aspectos como el cumplimiento del Amparo Constitucional.

Para finalizar es importante recalcar que las Federaciones en los últimos dos años inician un plan alternativo para un mayor desarrollo sostenible y sustentable de sus comunidades y de conservación de sus recursos.

3.2 CASO: “Caso: TEXACO”¹⁴⁰ -¹⁴¹ -¹⁴²

Sin duda alguna hablar del caso TEXACO, es hablar de un conflicto que ha durado muchos años como tal, pero que antes de esto ya había causado daños inimaginables a todo un contexto ambiental y social, el mismo que permanece activo y sobre el cual existen una diversidad de aspectos por resolver, que se dan un sin número de circunstancias que obligan a que sea analizado y resuelto hasta las últimas consecuencias.

TEXACO mantuvo su operación petrolera en la amazonía ecuatoriana desde 1964 hasta 1990, período en el cual perforó 339 pozos con una extracción de petróleo de 1’434.000 millones de barriles en un área aproximada de 2.5 millones de hectáreas que abarcan territorios de las provincias de Sucumbios y Orellana.

¹⁴⁰ Entrevista: Dr. Pablo Ortiz T, experto en manejo de conflictos socioambientales COMUNIDEC

¹⁴¹ Entrevista: Sociólogo Guillaume Fontaine, Profesor Investigador, Director del Observatorio de Estudios Socioambientales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador

¹⁴² FONTAINE, Guillaume. Editor, “Las Apuestas” Petróleo y Desarrollo sostenible en el Ecuador, Foro del Observatorio de Estudios Socioambientales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador

Por antecedentes que son de conocimiento público, se considera a la participación de la TEXACO a través de su subsidiaria TEXPET como una de las compañías más irresponsables, que ha causando daños al medio ambiente que son irreparables. Por estudios realizados se calcula que se derramaron 20 mil millones de galones de agua de formación en fuentes hídricas, se quemaron 235.000 millones de pies cúbicos de gas al aire libre, se derramaron 16.800 galones de crudo y se abandonaron 600 piscinas con desechos de petróleo sin darles el mas mínimo control que en algo pudiese contribuir a no causar mas daños de los ya ocasionados, es decir que se mantuvo una actitud negligente basada en una ambición insospechada, donde la prevención y los niveles de control no eran considerados como parte substancial de la actividad que realizaban, y esto necesariamente implica costos que la TEXACO no asumió.

Otro de los factores que se deben contemplar son los daños causados a las comunidades, tanto a los pueblos indígenas de la zona como son Huaorani, Cofán, Siona, Secoyas, Kichwas; como a los colonos que habían llegado a la amazonía con la apertura de caminos a partir del inicio de las operaciones petroleras. Estos grupos han sufrido gran cantidad de enfermedades y muertes por la contaminación petrolera. Una de las mayores afecciones se ha comprobado que es el cáncer (Se determino en 1993 por un estudio de la Universidad de Harvad que los pobladores de la zona han sido afectados de 8 distintas clases de cáncer fruto, de las operaciones de la TEXACO) producto del consumo de agua contaminada por el hidrocarburo. Por los censos efectuados se calcula que aproximadamente 30 mil personas han sido afectadas directa o indirectamente por la contaminación petrolera.

Evidentemente encontraremos en la sistematización del caso, que este se encuentra judicializado y que alrededor de todos estos procesos legales tramitados en los Estados Unidos, domicilio de la TEXACO, como en el Ecuador aún no pueden ser resueltos tomando en cuenta que los daños causados son invalorable y que la resolución del mismo requiere de celeridad.

Otro de los elementos importantes que se deben considerar en el caso TEXACO es el contexto político que vivía el Ecuador – por lo menos en los años que el caso se sustanció en los Estados Unidos – ya que durante esta época (década de los 90), la inestabilidad política de nuestro país fue atroz, al punto de llegar a tener cinco presidentes; cada uno llegó con diferentes expectativas y distintos intereses, lo cual visto desde una política pública que recaía en la esfera internacional, la defensa de los perjudicados no era favorable. Todos de una u otra manera, con toda la complejidad del caso, se logró que estos presidentes apoyaran la causa con excepción del Arquitecto Durán Ballén que como veremos más adelante “jugo en el equipo” de la TEXACO.

Dentro del caso TEXACO se debe hacer una reflexión puntual sobre la participación del Estado en todo el proceso, ya que no hay una posición clara por la defensa de los intereses de los perjudicados, en este caso, existe más bien una clara pérdida de autoridad frente a los intereses petroleros, con lo que el discurso del Estado se convierte en pura retórica, tomando en cuenta los altos niveles de corrupción que hay en el país, la marcada desconfianza en los órganos encargados de administrar justicia y la terrible asimetría de poder entre la TEXACO y las comunidades indígenas afectas, lo cual muestra un futuro incierto en cuanto al resultado de este conflicto.

Sistematización del Caso:

Podríamos decir que el caso TEXACO se convierte en un problema a partir del inicio de sus operaciones en 1964, pero que no fue visualizado como conflicto sino hasta la década de los 80, cuando a través de distintos proyectos ejecutados, en el área de salud, especialmente se pudo constatar los daños ambientales ocasionados y la repercusión que estos estaban causando en la salud de la población que ya se veía afectada por enfermedades, problema que fue constatado por médicos que trabajaban en dichos proyectos que preocupados por la situación invitaron a abogados que podían determinar el conflicto. Este tipo de acciones no causaron ningún efecto, ya que una metodología para el manejo de conflictos no puede ser aplicada si no se ha iniciado un proceso para enfrentarlo, lo que hasta ese entonces no existía.

Se puede considerar que los primeros esfuerzos por exteriorizar el conflicto se dan en 1991, por personas conocedoras de la realidad que se vivía por la operación de la TEXACO, como Anamaría Varea, quienes comienzan a publicar hechos concretos a través de medios de comunicación de lo acontecido en este caso.

Pero cuando realmente estalla el caso como conflicto, es en noviembre de 1993 cuando un grupo de afectados en defensa de sus derechos plantean una acción legal llamada *acción de clase*, en contra de la Compañía Norteamericana TEXACO Inc., en el Estado de Nueva York - Estados Unidos, acusando a la mencionada compañía de haber causado graves daños al medio ambiente y a la salud de las personas en la amazonía ecuatoriana dentro de su actividad petrolera que a decir de los actores se la realizaba con una tecnología inadecuada – y que ahora todos conocemos – cual era la causa directa de este problema y que la orden de utilizar esta tecnología venía desde los Estados Unidos.

Se debe señalar que a pesar de que las personas que interponen la acción, efectivamente eran afectados, estos no representaban a la gran mayoría, es cuando, como caído del cielo, aparece en escena Cristóbal Bonifaz, abogado ecuatoriano que ofrece su colaboración a los abogados estadounidenses que defienden los derechos de las comunidades afectados en el proceso. Se discutió mucho sobre la legitimidad de los actores y al enterarse de lo que estaba pasando a través de medios de comunicación la FCUNAE¹⁴³ y la ONHAE¹⁴⁴, que son organizaciones de nacionalidades indígenas desconocen la intervención de Bonifaz.

Una vez planteada la acción y como era de esperarse, la TEXACO se opuso a la misma, solicitando al juez que conoció la causa que la desechara. Pero lo más sorprendente en esta etapa fue la posición del Gobierno Ecuatoriano, que apoya a la compañía argumentado que este tipo de acciones lo que provoca es alejar a la inversión extranjera del país y que se ponía en riesgo la soberanía nacional, lo cual se evidenciaba como contradictorio, ya que para los afectados se habría un espacio,

¹⁴³ FCUNAE: Federación de Comunas de la unidad de nativos de la Amazonía Ecuatoriana.

¹⁴⁴ ONHAE: Organización de las Nacionalidades Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana.

donde ellos podían demostrar a los ojos del mundo cuales eran las realidades, implicaciones y daños ocasionados por la actividad petrolera en la amazonía ecuatoriana.

Para los intereses de los demandantes el pedido de la TEXACO fue rechazado por el juez, el cual consideró que si se llegaba a comprobar que la orden para el empleo de una inadecuada tecnología venía desde los Estados Unidos – punto que era contemplado dentro de la demanda – esa sería la jurisdicción competente para conocer sobre el caso.

Para 1996 el juez que sustanciaba la acción muere, lo que se convierte en un inconveniente para los demandantes ya que Jed Rackoff, el juez que asume el cargo y lógicamente es el nuevo encargado del proceso, no tenía las mismas apreciaciones y puntos de vista sobre el caso.

Cabe mencionar que en este momento, donde se da la etapa de transición entre los jueces, la compañía TEXACO hace un intento por buscar una salida negociada al conflicto a través del pago de una indemnización a cambio de que se desista de la acción. Para dicha negociación el representante de los demandantes era Bonifaz, quien “al ojo” conversa sobre una cifra que no tenía una base técnica. Esta acción se presta para elucubrar sobre dos aspectos: uno que se asumía la responsabilidad sobre los daños ocasionados por parte de la TEXACO y dos que no se trataba de un arreglo negociado sino de un soborno que ponía fin al conflicto. Evidentemente esta negociación por todo lo que llevaba de fondo no fue aceptada ya que no se pretendía una indemnización como tal sino una reparación total de los daños ocasionados.

Para agosto de 1997, la TEXACO después de haber solicitado al nuevo juez por cuatro vez que sea desechada la demanda, este accede a tal petición la cual es apelada por los demandantes ante la Corte de Apelaciones la cual en octubre de 1998 resuelve aceptar la apelación, por lo que la demanda no sería desechada hasta que un “foro alternativo” la tratara, regresando esta al juez de primera instancia para que conozca sobre el caso.

Como se dice comúnmente que “el que persevera alcanza”, al hacer por sexta vez la TEXACO la petición de que se deseche la demanda, el juez acepta la petición, pero pide que la compañía se someta a la jurisdicción y a las leyes ecuatorianas, lo cual evidentemente fue apelado por los demandantes, sin embargo el 16 agosto de 2002 la Corte de Apelaciones ratifica la decisión del juez de primera instancia pero esta vez obligando a la TEXACO para que se someta a la jurisdicción y leyes ecuatorianas sin derecho a pedir la prescripción de las acciones a que tuvieron derecho los demandantes, lo que indirectamente implicó una gran responsabilidad para los órganos de administración de justicia ecuatorianos que por primera vez podrían juzgar a una transnacional con tanto poder como la TEXACO.

Posterior a todo un proceso de trabajo, preparación, consultas y reflexiones por parte de los afectados el 7 de mayo de 2003 deciden presentar la demanda ante la Corte Superior de Nueva Loja que de acuerdo con la ley de Gestión Ambiental es competente para el conocimiento de estas causas. Avocando conocimiento el 13 de mayo del mismo año y dando paso al proceso como así lo manda la ley ecuatoriana, siendo notificado el representante legal de la TEXACO, David O'Reilly, el 11 de julio quien cumple con lo dispuesto en la correspondiente providencia.

El 21 de octubre de 2003 se llama a la audiencia de conciliación y contestación de la demanda para posteriormente abrir el término de prueba, donde los demandantes solicitan que se realicen las respectivas inspecciones judiciales para verificar los hechos de su demanda, es decir, los daños causados por la TEXACO, diligencias que se están sustanciando desde julio del 2004 y que se prevee que tomarán aproximadamente un año, luego de lo cual se realizarán los estudios respectivos para luego dictar sentencia, la cual seguramente será apelada, lo que implicara el paso de algunos años para que el caso sea cerrado definitivamente.

Para un mayor entendimiento de las acciones, hay que citar los planteamientos y exigencias en los cuales se basa la demanda de los afectados planteada en el Ecuador,

y que por la diferencia de la legislación entre los países donde se a llevado el caso son en parte distintas pero que en el fondo piden lo mismo:

- *“La eliminación o remoción de los elementos contaminantes que amenazan todavía al ambiente y a la salud de los habitantes; es decir, la remoción y adecuado tratamiento y disposición de los desechos y materiales contaminantes todavía existentes en las piscinas o fosos abiertos por TEXACO y que han sido simplemente taponadas, cubiertas o inadecuadamente tratadas.*
- *El saneamiento de los ríos, esteros, lagos, pantanos y cursos naturales y artificiales de agua y la adecuada disposición de todos los materiales de desecho.*
- *La remoción de todos los elementos de estructura y maquinaria que sobresalen del suelo en los pozos, estaciones y subestaciones cerrados, clausurados o abandonados, así como de los ductos, tuberías, tomas y otros elementos semejantes relacionados con tales pozos; y, en general, la limpieza de los terrenos, plantaciones, cultivos, calles, caminos y edificaciones en las cuales todavía existan residuos contaminantes producidos o generados a consecuencia de las operaciones dirigidas por TEXACO, inclusive los depósitos para desechos contaminantes contruidos como parte de las mal ejecutadas tareas de limpieza ambiental.”¹⁴⁵*

En febrero del año en curso (2006) un informe dejó mal parada a Chevron. La organización ambientalista Amazon Watch, ONG ubicada en California, solicitó al Gobierno estadounidense que investigue oficialmente a la compañía Texaco (hoy Chevron) por violaciones legales en los EEUU, al ocultar, ante sus accionistas, la posible obligación de miles de millones de dólares por destrucción ambiental en el Ecuador.

¹⁴⁵ FONTAINE, Guillaume. Editor, “Las Apuestas” Petróleo y Desarrollo sostenible en el Ecuador, Foro del Observatorio de Estudios Socioambientales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, Pág. 42

En carta dirigida al Director del SEC (Securities and Exchange Comisión), Amazon Watch acusa formalmente a Chevron de violar las leyes federales y las reglas de la Comisión SEC, una agencia similar a la Superintendencia de Compañías en el Ecuador, que controla a las empresas privadas para prevenir fraudes. La carta dice que Chevron no ha informado a sus accionistas sobre la posibilidad de responsabilidades pecuniarias originadas por la histórica demanda de 30 mil habitantes en su contra por la contaminación en el Ecuador lo cual representa potencialmente por lo menos \$6,1 millones en pasivos.

El SEC tiene el poder de multar a las firmas por millones de dólares cuando en violación de sus regulaciones no revelan hechos o información que afecte el precio de las acciones en el mercado. En este caso, Texaco habría subido artificialmente el precio de las acciones de Chevron, según Amazon Watch.

La carta alega que Chevron enfrenta la demanda de los ecuatorianos por que Texaco vertió intencionalmente 18 000 millones de galones de desperdicios tóxicos durante los años que operó por concesión en el Ecuador, de 1964 a 1990.

La firma Norteamericana Global Environmental Operations estima que los costos de una remediación ambiental serían de aproximadamente \$6,14 000 millones de dólares, sin que esto cubra una compensación personal a las miles de víctimas de la región.

El 6 de marzo de 2006, comunidades indígenas implicadas en el caso Texaco señalan que existen presiones para que se alargue el proceso que siguen a la empresa petrolera, a la que acusan de contaminación ambiental en la Amazonía.

La defensa de las comunidades presentó un documento probatorio en la Corte Superior de Justicia de Nueva Loja. En el texto consta el informe del mayor Arturo Velasco, jefe de Inteligencia de la Base Rayo 24 de Sucumbíos.

Velasco sostiene, en el contenido, que habría recibido presiones de un empleado de Texaco y del capitán Manuel Bravo, militar retirado, para que se suspenda la diligencia judicial del 28 de octubre del 2005.

Existe, además, un documento en el que consta un acuerdo entre TEXACO y las Fuerzas Armadas (FFAA) para el uso de una villa dentro de las instalaciones de la Brigada Rayo 24.

3.3 CASO: “Caso Sarayaku / CGC”¹⁴⁶

Hay que considerar que frente a los hechos generadores del conflicto en los que se encuentran la comunidad Kichwa de Sarayaku y la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC) existe una evidente violación de derechos humanos.

El territorio Kichwa de Sarayaku está ubicado en la Provincia de Pastaza, lugar en el cual se encuentra el bloque 23, concesionado para las actividades petroleras a la CGC, es la comunidad más grande y habitada encontrándose en la mitad del bloque concesionado.

Dentro de los principales antecedentes de este conflicto podemos mencionar que en el año de 1989, se firmó el “Acuerdo de Sarayaku” entre la comunidad de Sarayaku y el Gobierno Ecuatoriano, documento mediante el cual se busca garantizar los derechos de este pueblo sobre su territorio, protegiéndolo sobretodo de la explotación petrolera.

Como algo que no resulta extraño en nuestro país, para 1992 se incumple por parte del Gobierno Ecuatoriano, el acuerdo firmado por el mismo, hecho más que suficiente y justificado para provocar la inconformidad y rechazo del pueblo de Sarayaku que a raíz de esta situación, inician una movilización hacia la capital de la república con el objetivo de que se reconozca por parte del Estado, los derechos que ellos tienen sobre sus territorios ancestrales. Después de dos meses, tanto de

¹⁴⁶ Fuente: Centro de Derechos Económicos y Sociales, “CDES”, Boletín No. 11, Octubre 2004

movilizaciones como de permanencia en Quito, consiguen el otorgamiento de los títulos de propiedad sobre estos territorios ancestrales, lo que significa que a partir de esa fecha el territorio de Sarayaku y su propiedad se encuentran legalizados.

Sistematización del Caso:

En 1996 se concesiona un bloque petrolero (Bloque 23) a la CGC para su exploración y explotación, la mayor parte del territorio pertenece al Pueblo Kichwa de Sarayaku tanto por propiedad ancestral como legal. Dicha concesión se da a pesar de que el territorio tiene dueño, al cual no se le consultó ni se obtuvo su libre consentimiento para que se realice tal operación, que por el contrario al enterarse de la concesión manifestó su total rechazo a la entrada de la petrolera en su territorio.

Ya encontrándose en esta situación existen dos posiciones sumamente marcadas, por una parte el Pueblo de Sarayaku se organiza para proteger sus derechos constitucionales a la propiedad, a derechos humanos individuales y colectivos, mientras que el Estado por su parte, evidencia un apoyo político, jurídico, policial y militar a favor de la CGC para que esta pueda cumplir con sus actividades en la zona.

Cronológicamente es importante mencionar que los trabajos de exploración debían iniciarse para 1997 comenzando la prospección sísmica por parte de la CGC y de acuerdo firmado con el Estado, sin embargo ese año lo único que se llevó a cabo fue un estudio de impacto ambiental en el Bloque 23 sin tomar en cuenta la participación de las comunidades indígenas, trabajo que se inició en noviembre de 2002, para esa fecha la legislación ecuatoriana ya contábamos con dos instrumentos jurídicos sumamente importantes en cuanto al involucramiento y protección de los pueblos indígenas estos son: la nueva Constitución Política del Estado aprobada en 1998 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vigente y ratificado por el Estado Ecuatoriano desde 1999.

La compañía, como sucede en la mayoría de los casos, buscó en mayo del 2000 un acercamiento con la comunidad de Sarayaku con el objetivo de buscar la aprobación

y el permiso para realizar trabajos en estos territorios a cambio de 60 mil dólares y 500 plazas de trabajo en la compañía para los hombres de la comunidad, lo cual fue rechazado por parte del Pueblo de Sarayaku, decisión que fue tomada en Asamblea General y comunicada a los representantes de la CGC el 25 de junio de 2000.

Cabe señalar que dentro de los ofrecimiento por parte de la compañía estaba el retirarse de sus actividades si Sarayaku no aceptaba su presencia, lo cual evidentemente no cumplió y mas bien la CGC adopta una actitud divisionista buscando el aislamiento de Sarayaku al firmar acuerdos con las comunidades vecinas de Pakayaku, Jatún Mollino, Shaimi y Canelos por un monto de 350 mil dólares para obras sociales, dineros que debían entregar para febrero de 2003 y que hasta la fecha no han sido entregados, es decir no se han cumplido los acuerdos por parte de la CGC.

Esta actitud divisionista se demuestra también cuando en el 2001 contrata la CGC a la compañía DAYMI SERVICE S.A., empresa experta en programas de relaciones comunitarias; donde sus “expertos” usaron metodologías y estrategias para dividir comunidades, manipular dirigentes y fomentar campañas de desprestigio en contra de dirigentes y organizaciones, lo cual sorprende porque no tomaron en cuenta las normas nacionales que se deben cumplir, es decir que esa no es una actitud normal por parte de esta compañía.

En esta etapa del proceso ya se empieza a evidenciar un fortalecimiento de la organización indígena ya que la Asociación de Sarayaku – Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), ratifica el 25 de junio de 2002 su rechazo, oposición y la decisión de no aceptar el ingreso de ninguna petrolera en su territorio por no existir la seguridad jurídica y garantías necesarias para proteger los derechos de los pueblos Kichwas del Bloque 23.

La Asociación de Sarayaku realiza las gestiones necesarias para buscar el apoyo del Estado, es recibida por el Dr. Marcelo Santos, Secretario de Gobierno, el 31 de octubre de 2002, en esta reunión se ratifica nuevamente la no negativa al ingreso de

la CGC al territorio de Sarayaku además de que se desconocen todos los acuerdos firmados por la compañía y un grupo de personas¹⁴⁷ que no cuentan con la legitimidad para firmar ningún acuerdo a nombre del Pueblo Kichwa de Sarayaku.

Como es de conocimiento, que los contratos petroleros, en la etapa de exploración tienen un tiempo delimitado y al estarse agotando dicho plazo, la CGC inicia una campaña en noviembre de 2002, para tratar de culminar con esta etapa y poder iniciar la explotación, acción que contó con un fuerte apoyo por parte del Estado, dentro de esta campaña. Se realizaron una cantidad de actos ilegales y arbitrarios como incursiones y trabajos como apertura de trochas, establecimiento de campamentos, detonación de dinamita, consiguiendo intervenir una extensión aproximada de cinco kilómetros, todo esto a pesar del manifiesto rechazo y oposición al ingreso de la petrolera en los territorios Sarayaku.

Es evidente que con todo este tipo de actuaciones, la oposición en Sarayaku se radicalizaría y la asociación toma al respecto decisiones frente a las constantes propuestas de la CGC, entre estas encontramos:

- *“Sarayaku ratifica su decisión de no aceptar a ninguna compañía petrolera sea esta CGC y/o otras compañías: petroleras, mineras y madereras.*
- *A partir de esta resolución decide no mantener mas diálogo ni más negociación con CGC.*
- *Decide no aceptar los 60.000 dólares del convenio Consejo Provincial CGC porque este dinero generaría conflictos intercomunitarios de graves consecuencias.*
- *Sarayaku no aceptará más reuniones provocadas por la compañía CGC con otras comunidades del bloque.*
- *Estas resoluciones se sustentan en lo derechos colectivos reconocidos en la constitución ecuatoriana; en el convenio 169 de la OIT y mas leyes y*

¹⁴⁷ Comunidad de Independientes de Sarayaku

organismos internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas”¹⁴⁸

Como el diálogo directo tanto con la CGC como con el Estado no dio los frutos esperados para que la compañía no entre en el territorio de Sarayaku, por lo que el 20 de noviembre de 2002 se presenta una queja ante la Defensoría del Pueblo del Ecuador la cual ratifica el deber de autoridades civiles y militares de respetar el territorio de Sarayaku y su obligación de protegerlo, además se ordena que nadie podría impedir la libre circulación, tránsito, navegación y comunicación de los miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku y que en caso de hacerlo deberían ser sancionados de acuerdo con las leyes ecuatorianas.

Para el 25 de noviembre de 2002 entre el Gobernador de Pastaza, la Comandancia de Policía de Pastaza, Sarayaku, la CONFENAIE¹⁴⁹ y la OPIP firman un acuerdo con el objetivo de hacer respetar por parte de la CGC los territorios de Sarayaku y que cualquier tipo de intervención por parte de la compañía sería considerada como desacato y que las autoridades deberían hacer cumplir el acuerdo.

El 28 de noviembre de 2002 la OPIP como representante del Pueblo Kichwa de Pastaza, presenta en recurso de Amparo Constitucional ante el Juez Primero de lo Civil de Pastaza en contra de la CGC, después de que se aceptó el recurso se convoca para el 7 de diciembre de 2002 a la audiencia de conciliación, la misma que no se lleva a cabo porque que no se citó a los representantes de la compañía. Hasta la presente fecha aún no se efectúa este acto procesal dentro del Amparo, sin embargo el 29 de noviembre de 2002 al conocer y aceptar el recurso, el Juez ordena medidas precautorias en las que se ordena “suspender cualquier acción actual o inminente que afecte o amenace los derechos que son materia del reclamo.”

A pesar de que se dictaron medidas precautorias, la CGC ingresa a territorio de Sarayaku de forma violenta y arbitraria, es decir que se desconoce un dictamen de una autoridad judicial competente. Por estos actos abusivos de la compañía se da un

¹⁴⁸ Centro de Derechos Económicos y Sociales, “CDES”, Boletín No. 11, Pág. 3, Octubre 2004

¹⁴⁹ CONFENAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.

acuerdo entre el Subsecretario del Ministro de Gobierno y representantes indígenas el 12 de diciembre de 2002 en el cual se contempla cosas como:

- *“Buscar una salida pacífica al problema, sin la intervención de la fuerza pública.*
- *Las comunidades permitirán la salida inmediata de los trabajadores que se encuentran detenidos en las comunidades de Shaimi y Sarayaku, como una muestra de buena voluntad y apertura al diálogo.*
- *Dada la crítica situación que se ha presentado en el bloque 23, el Gobierno se compromete a exhortar a la compañía CGC para que suspenda temporalmente la prospección sísmica en el bloque 23, para que lo retome en nuevo gobierno.*
- *Como muestra de apertura el Ministerio de Gobierno conformará una comisión de alto nivel con las Autoridades responsables directas de la actividad petrolera y buscará realizar una reunión en la ciudad de Puyo donde se dé inicio a la búsqueda de una solución a la problemática del bloque 23.*
- *El Gobierno velará por el cumplimiento del contrato de la compañía CGC, vigilando el apego a las normas establecidas por parte del mismo. A la vez dará pasos en la normativa para la Consulta Previa, para que las reglas queden claramente establecidas para las partes”¹⁵⁰*

Lamentablemente el 17 de diciembre de 2002 y como que se ha convertido en una práctica común la violación de acuerdos y dictámenes judiciales, con la pasividad del Gobierno, la CGC ingresa al territorio de Sarayaku continuando con su trabajo en las demás comunidades, anunciando el 6 de enero de 2003 la continuación de las actividades, haciéndose éstas efectivas para el día 11 del mismo mes y año donde se instalan nuevos campamentos en la mitad del territorio de Sarayaku protegiéndolos con la contratación de seguridad privada.

¹⁵⁰ Centro de Derechos Económicos y Sociales, “CDES”, Boletín No. 11, Pág. 4, Octubre 2004

Posteriormente el 20 de enero de 2003, se da una reunión de los representantes indígenas con el Presidente Lucio Gutiérrez y Carlos Arboleda, Ministro de Energía y Minas haciendo conocer que serían las autoridades del gobierno con las únicas que dialogarían, esto dado por la evidente ruptura de relaciones con la CGC. El objetivo en dicha reunión fue plantear la situación en la que se ve envuelta Sarayaku y además buscar compromisos por parte del gobierno, para establecer una nueva política petrolera que beneficie a las comunidades. Se concreta una visita a la comunidad, la misma que se realiza el 3 de febrero del mismo año.

Con la finalidad de realizar un análisis jurídico y elaborar un informe legal de la situación y como parte del compromiso, se conforma una comisión integrada por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, el Subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, un abogado de la CONAIE¹⁵¹ y un abogado de OPIP, comisión que se reúne por una sola ocasión el 7 de febrero de 2003.

A pesar de esto incomprensiblemente el 15 de febrero de 2003 se suspende el proceso de revisión jurídica del contrato de participación entre Petroecuador y la compañía CGC.

Después de realizar varios intentos para que sean garantizados los derechos de los miembros, habitantes y dirigentes del Pueblo de Sarayaku mediante los órganos competentes a nivel nacional, sin recibir una respuesta contundente se decide presentar, el 24 de abril de 2003, una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo aceptada tal solicitud el 5 de mayo de 2003 y en la cual se dictamina lo siguiente:

- *“1. Adoptar todas las medidas que considere necesarias para asegurar la vida y la integridad, física, psíquica y moral de los miembros de la Comunidad Indígena de Sarayaku, en especial de Franco Viteri, José Gualinga, Francisco Santi, Cristina Gualinga, Reinaldo Alejandro Gualinga, Elvis Fernando Gualinga Malaver, Fabián Greff y Marcelo*

¹⁵¹ CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador

Gualinga y de las niñas que podrían estar siendo objeto de amenazas o amedrentamientos por parte de personal del ejército o de civiles ajenos a la comunidad.

- *2. Investigar los hechos ocurridos el 26 de enero de 2003 en el “Centro de Paz y Vida Tiutihulli” de la Comunidad de Sarayaku y sus consecuencias, juzgar y sancionar a los responsables.*
- *3. Adoptar las medidas necesarias para proteger la especial relación de la Comunidad de Sarayaku con su territorio.*
- *4. Acordar las medidas cautelares en consulta con la comunidad y sus representantes ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos”¹⁵²*

Una vez que se dictaminan las medidas cautelares por parte de esta organización internacional, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional del Ecuador el 8 de mayo de 2003, después de haber realizado una inspección en el territorio de Sarayaku comprueba la violación de varios derechos colectivos entre los que encontramos la violación del derecho a la consulta previa contemplada en la constitución por parte de los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, se desconoce a la dirigencia indígena por parte de la compañía CGC, el impacto y daño ambiental a la flora y fauna de la zona es evidente, la violación a derechos humanos por causar daños psicológicos a los niños de la comunidad al observar los enfrentamientos entre policías, militares, guardias de privados de la CGC con miembros de la comunidad y los maltratos físicos a varios dirigentes.

La compañía BURLINGTON, de la cual ya conocemos sus antecedentes por lo ocurrido con la FIPSE en el bloque 24, compra en agosto del 2003 el 50% de los derechos de explotación del bloque 23.

Después de seis meses de haberse dictado las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, el 16 de octubre de 2003 nuevamente la Asociación de Sarayaku debe acudir a este organismos debido al incumplimiento de las medidas por parte del Estado, quien admite de forma expresa no haber tomado las acciones

¹⁵² Centro de Derechos Económicos y Sociales, “CDES”, Boletín No. 11, Pág. 6, Octubre 2004

pertinentes para cumplir con este dictamen, lo cual demuestra la pasividad del Estado en este tipo de conflictos para precautelar los derechos de sus ciudadanos.

Este tipo de acciones son reiterativas, el 2 de diciembre del mismo año el Ministro de Energía y Minas ante la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso ecuatoriano menciona que no podían tener valides tales medidas por ser estas fallidas y que provienen de personas que no conocen el Ecuador. Por estas circunstancias Sarayaku demanda el 19 de diciembre de 2003 al Estado por las violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dadas este tipo de actuaciones del Estado se repiten una y otra vez ya, tanto es así que al siguiente año (3 de marzo de 2004) el Procurador de Estado no asiste a la reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Existen dos hechos que adicionalmente a los enfrentamientos antes mencionados marcan la complejidad de este conflicto, que ratifica que el caso de Sarayaku se convierte en un conflicto ya que el 29 de febrero del 2004 el presidente de Sarayaku es agredido antes de su viaje a Washington a una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 23 de abril del mismo año uno de los abogados CDES patrocinadores de las acciones de Sarayaku es agredido física y verbalmente e inclusive amenazado de muerte.

El 5 de mayo del 2004 en vista de estos acontecimientos, Sarayaku solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas cautelares con el objetivo de proteger la integridad de las personas sean estas miembros de la comunidad como de sus abogados, dichas medidas son otorgadas el 6 de julio del 2004, recordando al Estado que estas medidas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento ya que el Ecuador desde 1984 ratifico la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al parecer y por expresiones dadas por el Ministro de Energía y Minas el 7 de julio del 2004 al Diario Hoy, periódico que circula en la capital ecuatoriana, los intereses del Estado por la actividad petrolera son mayores, frente a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, existiendo amenazas de utilizar la fuerza para poder expandir la frontera petrolera.

Una comisión interinstitucional, conformada por la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, se reuniría el domingo 8 de agosto con los dirigentes de la comunidad Sarayaku (Pastaza) para dar cumplimiento a las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Dr. Julio Prado Espinosa, en ese tiempo, director general de Derechos Humanos de la Cancillería, comentó que ante las posiciones radicales tanto del Estado, de continuar con la explotación petrolera, y la de Sarayaku, de que se respete su territorio ancestral, conformó una comisión que pretendía ayudar en la búsqueda de una solución consensuada.

La comisión estaba integrada por representantes de las Fuerzas Armadas, Procuraduría y de los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno, Ambiente y Energía.

En este proceso, Prado comentó que hay dos situaciones de las que el Estado no podía defenderse: que si debió realizar una consulta a la comunidad antes de permitir la exploración petrolera y “si han habido excesos”, y destacó la injerencia del ex ministro de Energía, coronel Carlos Arboleda.

Marlon Santi, ex dirigente Sarayaku, explicó que efectivamente estaba confirmada para el 8 de agosto la reunión, pero ese día contaría con la presencia de delegados de las nacionalidades Achuar y Shuar.

Las medidas a tratarse y decisiones a comunicarse serían las siguientes

MEDIDAS PROVISIONALES

- *Proteger la vida e integridad personal de la comunidad indígena.*
- *Permitir la libre circulación de la comunidad Sarayaku.*
- *Investigar las agresiones cometidas.*
- *Proteger la relación del pueblo Sarayaku con su territorio ancestral y, especialmente, cuidar el uso y disfrute de la propiedad colectiva.*

RESPUESTA ECUATORIANA

El Dr. Julio Prado Espinosa, director general de derechos humanos, indicó que envió una respuesta a la Corte, donde le pide más tiempo para la ejecución de las medidas provisionales. “Le explicamos que existen dificultades geográficas para trasladarse al sitio y de que a los mismos Sarayaku no les interesa la protección policial”.

NO ES APELABLE

El ex canciller ecuatoriano Julio Prado Vallejo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, explicó que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es apelable a ninguna instancia y en la práctica “refleja que Ecuador ha sido un violador de los derechos humanos”.

MÁS RECURSOS

En el marco del I Foro Social de las Américas, que se desarrolló en Quito, Marlon Santi, presidente de la comunidad Sarayaku, afirmó que además de la CIDH acudirán a instancias europeas como la Corte de la Haya y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos del sistema de las Naciones Unidas.

Sin embargo frente a la posición del Estado, el 25 de agosto del 2004, Sarayaku sigue proclive al diálogo con la intención de discutir las acciones necesarias a seguir para dar cumplimiento a lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diálogo que se suspende nuevamente el 21 de septiembre del 2004 ya que otra vez el Estado, por medio del Ministro del ramo, incumple con los acuerdos expresándose agresivamente en contra de Sarayaku en el noticiero de un canal de

televisión, incumplimiento que es comunicado por parte de Sarayaku el día 28 de mismo mes y año a la Corte Interamericana para que esta conceda la audiencia correspondiente en la cual se explicaría detalladamente estas nuevas violaciones de parte del Gobierno ecuatoriano.

El 13 de agosto de 2005, circula en el país la noticia de que están extraviados en la Amazonía 150 kilos de pentolita. La compañía argentina acusó a los indios de Sarayaku de robarlos, mientras ellos lo negaban. Además Sarayaku cambia de discurso y amenazó con juicio penal contra CGC.

A inicios de 2003, un grupo de 'guardianes de la selva', como se autodenominan los habitantes indígenas Kichwa de esa población, se apoderaron de una carga de pentolita, explosivo de alto poder, que se encontraba en un campamento de la Compañía General Geofísica (CGG), francesa, subcontratista de la argentina CGC (Compañía General de Combustibles). Según la petrolera, se trata de 150 kilos (más de 2.000 cartuchos) y detonantes electrónicos, que debían ser utilizados en los trabajos de prospección sísmica, como parte de la fase de exploración en el bloque 23.

La presidenta de la Asociación del Pueblo Kichwa originario de Sarayaku, Hilda Santi, en declaraciones a la prensa, el pasado 26 de julio del 2005, dijo que, sin precisar cantidades, eso lo tienen guardado. Y se han comprometido a que mientras la empresa no salga, no van a entregar esa dinamita.

Luego de una denuncia pública, hecha por CGC sobre la base de estas declaraciones, el martes 2 de agosto del 2005. El jueves 4 de agosto del mismo año Santi cambió su declaración y en una rueda de prensa aseguró que la cantidad tomada por los comuneros fue mínima, solo una muestra para enseñar a los compañeros de lo que se trataba. Fue enfática al rechazar el término utilizado por los representantes de la petrolera, de que se trató de un robo, por lo que la comunidad decidió iniciar una querrela penal "por injurias".

El Señor Ricardo Nicolás gerente general de la CGC, ratificó la acusación sobre los explosivos: que se trata de robo, decomiso, requisa. Dijo que incluso, durante una charla de la FLACSO¹⁵³, en Quito, el ex presidente de Sarayaku Marlon Santi reconoció que efectivamente tiene esa carga de pentolita. Además ratificó que están preparados para afrontar el anunciado juicio penal. Nicolás, sin embargo, considera que en el tema hay problemas de Estado sobre la potestad de los recursos y esto se debe debatir más temprano que tarde de cómo está el tema a la fecha.

¹⁵³ FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Capítulo IV

4. La aplicación teórica en casos reales de conflictos socioambientales en la actividad petrolera en el Ecuador.

Dentro de este capítulo realizaremos una serie de análisis y diagnósticos con la finalidad de determinar y definir primero frente a que clase de conflicto nos encontramos, cuales son sus características, cuáles son los contextos bajo los cuales se desarrollo y cuales son los elementos relevantes que se deben tomar en cuenta.

Con base a esos contextos posteriormente es importante determinar que herramientas o mecanismos han sido utilizados para resolver o manejar el conflicto, porqué se los ha empujado o viceversa cuales métodos no fueron empleados y las razones porque no se los utilizó.

De forma general debemos mencionar que para hacer un primer análisis y después llevar a cabo el manejo del mismo, se deben tomar en cuenta una serie de aspectos ya que como hemos mencionado, por naturaleza, cada conflicto es diferente por lo que resulta evidente que las herramientas de análisis y manejo tenderán a variar de un conflicto a otro, adicionalmente podremos enfrentar a la teoría con la práctica, lo que nos conducirá a reflexionar mas sobre los conflictos y los mecanismos idóneos para resolverlos. Como conclusión adelantada no podemos convertirnos en personas únicamente herramientistas ya que la complejidad de esta tipología de conflicto requiere además de otro tipo de estudio, un análisis frente a ciertas realidades que marcan contextos y realidades, es decir que a un conflicto no hay que resolverlo por resolverlo.

Metodológicamente para realizar el análisis de los conflictos antes citados se utilizarán los siguientes elementos: Tipo de conflicto, Definición del conflicto específico, Análisis de situación de elementos anexos al conflicto, Como se manejó el conflicto y las herramientas utilizadas, Que otras alternativas de manejo pudo tener el conflicto frente a la teoría tomando en cuenta como elementos de análisis los

cuatro principios contemplados en el Método Harvard, es decir: Personas, Intereses, Opciones y Criterios Objetivos.

4.1 CASO: “Caso: BLOQUE 24”

Tipo de conflicto

Inicialmente debemos mencionar en la tipología de este problema que es un conflicto socioambiental, lo cual se evidencia al cotejar los contextos y las coyunturas en las que se desarrollan los hechos sistematizados en el al Bloque 24 con los conceptos expresados en la teoría de los conflictos socioambientales mencionados anteriormente.

De acuerdo con la teoría del conflicto podemos mencionar que el caso del Bloque 24 es un conflicto:

- a. Intragrupal
- b. Real
- c. Manifiesto
- d. Inducido

La tipología mencionada se la considera como tal ya que se da entre dos o más personas, hay que reconocer en este punto que la una parte es persona jurídica (ARCO) mientras que la otra parte es un conjunto de comunidades indígenas representadas por una organización (FIPSE), se da por la incompatibilidad en los objetivos entre los actores o grupos que intervienen, surge por aspectos evidentes al conflicto y por el desequilibrio en las relaciones de poder.

El conflicto es intragrupal ya por una parte interviene la FIPSE como representante de una serie de comunidades y asociaciones de los pueblos Shuar y por otra parte interviene la compañía petrolera ARCO Oriente (posteriormente la compañía BURLINGTON), donde los objetivos de las partes son incompatibles ya que unos

aspiran a cumplir y ejecutar un contrato firmado con el Estado mientras que los otros no quieren permitir la ejecución de ese contrato dentro de su territorio por las implicaciones que tendría esta actividad en su vida.

La muestra de que es un conflicto manifiesto se da por constante pugna de las compañías petroleras por entrar a realizar su trabajo por todos los medios posibles, sin embargo no es posible por una marcada oposición de aquellos que se muestran como mayormente afectados. Mientras que si hablamos de un desequilibrio en las relaciones de poder es evidente que las condiciones en las que se encuentra una compañía transnacional son mucho más favorables a las que comúnmente se encuentra una comunidad u organización indígena de la amazonía al inicio de estos conflictos.

Tomando como referencia aspectos teóricos sobre los conflictos socioambientales y sus aproximaciones a las tipologías de estos conflictos es útil decir que este es un conflicto socioambiental:

- a. Que se manifiesta externamente
- b. De hecho
- c. Asimétrico
- d. Dilatado

Es claro que una de las partes ha externalizado el conflicto a través de algunas manifestaciones de disconformidad ya que como vemos, al inicio del conflicto la FIPSE expreso claramente su oposición a las actividades petroleras en su territorio y que por realizarse todavía acciones por parte de los actores podemos decir que es un conflicto de hecho ya que la conflictividad en el Bloque 24 no ha terminado ni se ha cerrado definitivamente.

Al igual que el conflicto inducido, cuando hablamos de que es un conflicto asimétrico nos referimos a que las relaciones o niveles de poder que existen entre los actores son desiguales. Un poder que se marca por los niveles económicos, de

relaciones, acceso a la información e inclusive la capacidad para la toma de decisiones, la participación de las partes en mesas de diálogo o procesos de negociación. Finalmente decimos que es un conflicto dilatado por que este ha perdurado en el tiempo teniendo su inicio en 1998 y que hasta en la actualidad se ejecutan acciones relativas al conflicto.

Como hemos mencionado, al referirnos a los tipos de conflictos, estamos haciendo relación a la intensidad de las acciones o confrontaciones desarrolladas o implementadas por las partes, es así que de acuerdo con la teoría general, este es un conflicto diplomático por la utilización de medios no violentos tanto para expresarlo así como para manejarlo y enfrentarlo.

El ejemplo de esto es la utilización de comunicaciones y pedidos por parte de la FIPSE para evitar las acciones así como los intentos de acercamiento y los medios empleados (citas a reuniones, panfletos, etc.) a las organizaciones por parte de las petroleras, que a pesar de que no resultan éticos frente a las concepciones de las organizaciones indígenas, para una parte de la opinión pública y algunos expertos analistas en el tema no fueron acciones violentas.

Lo mismo podemos decir de las acciones ejecutadas por la FIPSE, ya que a pesar de que se interpone una acción de amparo, que jurídicamente se la considera como adversarial, es decir uno en contra del otro, esta se la manejó completamente a través de medios legales y frente a la autoridad competente siendo el caso del Juez de lo Civil de Morona Santiago al interponer la acción y el Tribunal Constitucional cuando se interpone la apelación de la petrolera, lo cual tampoco involucra acciones violentas.

Actores del conflicto

Cuando se realiza la identificación de los actores, se deben tener claros los hechos acontecidos en el conflicto, ya que de esta identificación dependerá un posible diagnóstico, el cual servirá como base para el manejo posterior del conflicto.

A pesar de que la intención es colocar a cada uno de los actores dentro de una clasificación que los diferencie estos debido a su participación, involucramiento o inclusive sus niveles de responsabilidad, podrían ubicarse dentro de algunas categorías o posiblemente dependerá, con la óptica con la que se miren los hechos, ya que para unos, las comunidades indígenas de los Pueblos Shuar son los afectados mientras que para otros criterios las afectadas serían las compañías petroleras, por eso es que este tipo de conflictos son tan complejos y no resulta fácil realizar un análisis o diagnóstico, a pesar de esto existirán otros casos de conflictos socioambientales, como los de daño ambiental por derrame de petróleo, donde la identificación de actores y su clasificación es mucho mas fácil y evidente.

Con estas apreciaciones preliminares, lo importante sería la determinación de la responsabilidad de los distintos actores ya que por una parte se afecta y se violan evidentemente derechos colectivos de pueblos indígenas, pero también hay que considerar que existe una afectación económica a una empresa por no poder ejercer su actividad; también hay que tomar en cuenta al final de cuentas, quien es el grupo que terminaría mayormente afectado, por este hecho de la responsabilidad que se involucra directamente con una política pública o las “reglas del juego” y con la participación del Estado.

Hay que dejar en claro que las compañías petroleras se ven afectadas en sus intereses económicos por la falta de investigación y de estudios ambientales, socioculturales, entre otros, de las zonas donde se pretende concesionar un bloque petrolero, lo que sería responsabilidad directa del Estado, adicionalmente implica el aseguramiento por parte de la compañía de conocer los contextos y realidades de la zona donde va a realizar sus actividades, y una posterior participación en una licitación petrolera, es decir, que esto sería una responsabilidad compartida por el Estado y la Petrolera, por lo que en la generalidad de estos casos no podemos hablar de que cualquier empresa relacionada con la actividad petrolera es “afectada” ya que el tema va mucho mas allá de los aspectos económicos.

En el caso del Bloque 24 han sido identificados y clasificados los siguientes actores:

- a. Receptor o Afectado: Comunidades y Asociaciones Shuar, que son representados por su organización mayor la FIPSE
- b. Generador: El Estado¹⁵⁴ y la Compañía ARCO Oriente (posteriormente la Compañía BURLINGTON)
- c. Iniciador: La FIPSE
- d. Regulador: El Estado. También como actor regulador debemos tomar en cuenta al Juez de lo Civil de Morona Santiago y el Tribunal Constitucional, esto debido a la acción de amparo interpuesta.

En este caso hay que considerar los impactos sufridos en el medio ambiente, que es el bien jurídico que se debe proteger y también la participación de terceras personas como las ONGs, que son las que generalmente apoyan a las comunidades indígenas en su participación en el conflicto.

Definición del conflicto específico

Es una confrontación de intereses entre la FIPSE y la Compañía ARCO Oriente (posteriormente BURLINGTON) por el manejo, acceso, uso y aprovechamiento del petróleo que se encuentra dentro del territorio del Pueblo Shuar por parte de la compañía y la conservación de su cultura, territorio ancestral y recursos naturales que en el se encuentran por parte de la FIPSE.

Análisis de situación de elementos anexos al conflicto

Con los hechos relevantes citados en la sistematización de la información con respecto a este caso, es interesante reflexionar sobre ciertos aspectos de este conflicto, que sin duda alguna brindan situaciones importantes de análisis.

¹⁵⁴ Cuando hablamos de Estado en estos casos hay que entender que dentro de este existe la participación de todos aquellos organismos vinculados en el manejo de la actividad petrolera como la el Ministerio de Energía y Minas y todas sus entidades conexas.

Como ya se ha dicho con respecto a las políticas públicas, estas dieron muestras una vez más de su gran debilidad y su poca claridad, esto, sin querer emitir un juicio de valor sobre la intencionalidad de las mismas, lo cual es muchas veces discutido y criticado por la opinión pública, es así que debemos considerar en este tema tres eventos importantes en torno al Bloque 24.

El primero tiene relación con el poco conocimiento de las autoridades estatales sobre las características de la zona en cuanto a temas sociales como ambientales y por otra parte las pocas garantías que ofrece el Estado a sus ciudadanos y en especial a grupos vulnerables, lo que se evidencia al haber firmado un contrato de participación en el Bloque 24, sin tener en cuenta ni advertir a la compañía de los conflictos que pudieran surgir ya que en la zona existen pueblos indígenas, que como hemos visto no dan su brazo a torcer en defensa de su territorio, mas aún cuando estos se encuentran en un proceso de consolidación territorial anterior a la firma del contrato y de sus recursos naturales que son su medio de subsistencia.

Los otros dos factores se enmarcan en la falta de comunicación y de consulta a estos pueblos indígenas de lo que el Estado hace o piensa hacer dentro de territorios ancestralmente reconocidos, ya que ni en la firma del contrato con ARCO ni cuando esta transfiere sus derechos y obligaciones a la BURLINGTON existió un comunicado oficial a las organizaciones por parte del Estado lo cual sin duda provoca un malestar en la gente que por otra parte debió enterarse extraoficialmente o por medio de la compañía que trabajaría en la zona de lo que estaba sucediendo, lo que sumado al primer elemento denota claramente la falta de políticas públicas.

Dentro de la situación vivida en el Bloque 24 hay que entender que las comunidades representadas por una organización superior, la FIPSE, tuvieron un espacio a través del cual articular y conducir sus demandas, que para poder llegar a este momento de toma de decisiones pasaron por procesos de fortalecimiento – como el procesos de consolidación territorial por el cual pasaban al inicio del conflicto – lo cual evidentemente favoreció a que exista una mayor unión entre las organizaciones y

asociaciones que forman parte de la FIPSE y que por medio de una asamblea en la cual participan todas las bases de la organización se pueda tomar decisiones .

Como vimos, existieron momentos en el conflicto, que se intentó fragmentar o romper esta unión, con la concepción maquiavélica de: “divide y vencerás”, la misma que no tuvo el éxito esperado justamente por los procesos de fortalecimiento y después por la legitimada representatividad que tiene la FIPSE en torno a sus bases, lo que fue demostrado con la marcha y participación de más de 300 personas (indígenas Shuar) que acompañaron a la presentación de la acción de amparo planteada en contra de ARCO Oriente, procesos de fortalecimiento que siguen dándose, con el apoyo sobretodo de ONGs y que en la actualidad concentran también sus esfuerzos en la búsqueda de un desarrollo integral de las comunidades apegado a la conservación de sus recursos naturales.

Otro factor interesante es que en este tipo acciones que lleva a cabo la FIPSE, se considera importante el tema de género ya que la participación e involucramiento de las mujeres tanto en asambleas como en la toma de decisiones e inclusive en las marchas, resulta importante rescatar, ya que se tomo en cuenta a todo un grupo sin excepción.

Como se manejó el conflicto y las herramientas utilizadas

A pesar de que ellos (la FIPSE y sus bases) no tuvieron mucho tiempo para trabajar en un proceso de diagnóstico del conflicto muy detallado, si tuvieron el suficiente para la elaboración de planteamientos, los cuales posteriormente se articularían en la acción de amparo y posiblemente este sea un punto clave del manejo de conflicto ya que de ahí en adelante todo giraría en base a la decisión que tomen las autoridades competentes frente a esta acción.

Al hacer un análisis más profundo a la etapa anterior a la presentación de la acción de amparo, hay que asumir que cualquier oportunidad de llegar a una mesa de negociación fue rota desde el principio por la actitud pasiva y hasta en momentos

irresponsable del Estado al integrar al proceso a este tipo de organizaciones, las cuales frente a una decisión ya tomada – nos referimos a la firma del contrato – no deja alternativa de asumir una posición indeclinable, lo cual sabemos no es una estrategia muy idónea en un proceso de negociación ya que se debe procurar en base a los intereses, pero como se dice comúnmente y frente a las coyunturas de ese momento “no quedo otra alternativa”.

En el momento en que se rompe una alternativa de diálogo, tanto por la actitud con la que llega la petrolera a la zona, que para muchos fue separatista y además con una clara intención de chantaje, por los ofrecimientos de la compañía a cambio de ciertas concesiones por parte de las comunidades, no era una forma idónea de resolver los conflictos que se presentaron o que se podrían presentar, sino mas bien una forma de ocultarlos, lo cual frente a un conflicto de estas características lo único que provoco fue la negativa y la radicalización de posiciones (que como hemos visto es un mal argumento para negociar en una mesa de diálogo) por parte de la FIPSE y consecuente la actuación de las dos partes el conflicto sufre un proceso de escalamiento, la paralización de las actividades y las posibilidades de búsqueda de acuerdos quedan rotas.

Otro de los factores que impiden iniciar un proceso de negociación para la solución de este conflicto es la relación asimétrica de los niveles de poder entre los actores donde no existen las condiciones ni los elementos necesarios para acudir a una mesa de diálogo productiva, y que sumado el poco tiempo que se dispone para trabajar en estos aspectos y la rapidez en la que se desarrollaban los hechos generadores del conflicto, contribuye a la radicalización de las posiciones de FIPSE oponiéndose a la ejecución de este contrato en su territorio como única posición y alternativa para manejar el conflicto.

Una vez que se dió la completa ruptura de las relaciones entre la FIPSE y la ARCO que impediría llegar a una mesa de diálogo, existe un tiempo para que la organización representante de los Pueblos Shuaras, a través de estudios y el respectivo asesoramiento, determine que existió una violación a los derechos

colectivos de su pueblo consagrados en la constitución y que no cabía otra alternativa que iniciar acciones legales en contra de la compañía.

Es en este momento cuando se toma la decisión por parte de la FIPSE, aprobado por sus bases, de la utilización de un mecanismo formal para la solución de conflictos y se decide y efectivamente se presenta la acción de amparo ante el Juez de lo Civil de Morona Santiago, el cual falla a favor del actor, es decir la FIPSE, limitando las actividades y la forma de realizar esos trabajos a la compañía ARCO, lo cual fue posteriormente ratificado por el Tribunal Constitucional al momento de la apelación correspondiente por parte de la ARCO.

El tema de la acción de amparo, siendo un mecanismo judicial formal para la resolución de conflictos, por primera vez marca un reconocimiento de la violación de derechos colectivos de un pueblo indígena, lo que sin duda es considerado como un triunfo para las personas involucradas y para todos aquellos que sostienen la tesis de la violación de derechos de los pueblos por parte de la actividad petrolera.

Que otras alternativas de manejo pudo tener el conflicto frente a la teoría

De acuerdo con los aspectos teóricos lo que se utilizó para este caso es un mecanismo formal a través de la vía judicial, es decir que fue un caso judicializado.

Podríamos decir que si las coyunturas con relación al Bloque 24 hubieran sido distintas desde un principio o si el resultado de las acciones eran diferentes se podría realizar un análisis o una posible propuesta para la aplicación de otros métodos para la solución de conflictos, pero para el caso de la violación de derechos que fueron recogidos y peleados a través de la acción de amparo resulta difícil hacerlo, sobretodo porque esta acción tuvo éxito y una respuesta favorable a lo que se pidió y que a pesar de que en ciertas etapas se pretendió incumplir, con el mandato del amparo es una resolución tomada y que se la debe cumplir y hacer cumplir por cualquier medio legalmente establecido.

Si tomamos en cuenta de que en estos tiempos se habla mucho de la cultura de paz a través de la aplicación de los métodos alternos de solución de conflictos y otras metodologías adaptables para la resolución de conflictos socioambientales debemos reconocer que cuando las circunstancias así lo ameritan, los órganos de administración de justicia funcionan adecuadamente y la ley se la aplica correctamente los medios formales son innegablemente útiles para la resolución de conflictos.

Sin embargo se debe contemplar como importante la alternativa de seguir trabajando en el fortalecimiento de la organización en su conjunto ya que de esta manera se podrá tener una mayor capacidad de afrontar conflictos futuros o latentes como es el caso de la intervención de la actividad petrolera en la zona.

Si bien es cierto que judicializar el conflicto sirvió para detener una acción, es también importante mencionar que cuando se utilizan este tipo de acciones siempre existe la posibilidad de iniciar procesos de diálogo a través de la negociación, ya que como resulta evidente, el detener una acción no resuelve por completo el conflicto, a diferencia que con un proceso negociado las partes en conflicto podrían tener acuerdos más sustentables en el tiempo, es decir que se cumplirían de mejor manera, y esto responde a una realidad y es que en la zona siempre estarán las comunidades coexistiendo con la actividad petrolera, por lo que hubiese sido importante que las partes hubieran considerado el hecho de utilizar la negociación e inclusive un proceso de facilitación con el objetivo de intervenir de forma integral en el conflicto planteándose objetivos constructivos y realizables.

Analizando los cuatro principios del Método Harvard, es interesante ver como efectivamente se podría dar un giro a este tipo de conflictos enfocándolo desde los MASC.

Tomando en cuenta los cuatro elementos mencionados por el Método Harvard y relacionándolos a estos con este caso de conflicto socioambiental se puede mencionar lo siguiente:

En cuanto a las “personas”, vemos que en este caso existe un evidente desgaste en cuanto a su relación, es decir que los actores han sufrido un proceso de alejamiento lo cual puede ser causa para separar a las personas del problema. Al tomar en cuenta ciertos aspectos básicos es claro que se podría trabajar con los dos actores para que estos depongan sus posiciones y puedan entablar procesos de diálogo que le lleven a una solución integral del conflicto.

El mejoramiento de las relaciones entre los actores es necesario, si se toma en cuenta que las percepciones sobre el conflicto y en general sobre sus propios contextos y realidades son distintas entre los actores, (sin que estas percepciones se conviertan en una traba), provocarían que aumenten los niveles de confianza entre si lo que sin duda permitirá entablar un proceso de negociación con el cual se puede lograr una solución total o parcial del conflicto.

Es evidente que uno de los temas mas complicados en estos casos es llevar procesos de diálogo y negociación basados en los intereses y no en las posiciones.

Los intereses como un segundo elemento es muy marcado en este conflicto, ya que los dos actores basaron sus esfuerzos en tratar de imponer sus posiciones, cuando una de las partes por ningún concepto permitiría que se realice actividad petrolera dentro su territorio mientras que la otra parte trata de cumplir con un contrato asignado por el Estado para ejecutar esta actividad.

Es cierto que llegar a descubrir los intereses de uno mismo es difícil y por ende descubrir los de la otra parte en conflicto puede serlo aún más, sin embargo como se mencionó en su oportunidad el basar la negociación en intereses reales posiblemente hubiese conseguido acuerdos consensuados por las partes, evitando por lo tanto un retraso en las actividades de la compañía petrolera y precautelando los derechos colectivos de la comunidad, lamentablemente las posiciones de los actores ha desencadenado una serie de conflictos adicionales ya que el primer elemento “personas”, tuvo un desgaste aún mayor, en cuanto al conflicto no podemos decir que las acciones tomadas, hayan solucionado en toda su magnitud el problema.

En cuanto al tercer elemento, si consideramos que existió un mal manejo de los dos elementos anteriores, resultaría lógico que la única “opción” era judicializar el caso.

Si se considera al conflicto como un proceso y se lo hubiese trabajado como tal basado en este método, es posible que no se habría planteado una única opción, que de antemano sabemos que es perjudicial para estos procesos. Lo que convenía era brindar un espacio a los actores para que ellos mismos generen múltiples opciones, que luego puedan conjuntamente evaluar y decidir cual sería la idónea para colaborar con la solución de su conflicto. Evidentemente tomando en cuenta los dos elementos anteriores, por ejemplo se pudo plantear una auditoría ambiental para que la compañía petrolera cumpla con los parámetros ambientales impuestos por la ley, o proponer procesos reales de ayuda y consolidación organizativa a las comunidades, considerar beneficios económicos y sociales, firma de acuerdos de buena vecindad y respeto mutuo, entre otros.

Finalmente encontrándonos atrapados, por existir un desgaste de las relaciones entre los actores, una radicalización en las posiciones y sin visualizar los verdaderos intereses y considerando una única opción, lo importante es dotar a las partes del cuarto elemento.

Al emplear “Criterios Objetivos”, las partes pueden tener la posibilidad de reconsiderar los otros aspectos, pueden además manejar criterios y sustentos mas fuertes que colaboren con aclarar y redefinir constructivamente el conflicto, es decir se puede, en base a este elemento considerar que dice la ley al respecto, que mencionan los informes técnicos ambientales, aspectos sociales, económicos, como un paso adicional para el manejo de conflicto.

4.2 CASO: “Caso: TEXACO”

Tipo de conflicto

Como primera consideración y para efectos de análisis debemos mencionar que cuando hablamos del caso TEXACO nos encontramos frente a unos de los conflictos socioambientales que mayor duración ha tenido, que posiblemente sea uno de los que más daños ambientales y sociales han causado y con mayor difusión a nivel nacional.

Adicionalmente debemos decir que los hechos citados en la sistematización del caso son los más relevantes dentro de un proceso que cuenta con muchas circunstancias importantes pero que para motivos de nuestro estudio, los citados se los puede asumir como los propicios para nuestro análisis.

Desde los puntos de vista de la teoría del conflicto podemos decir que este caso denota algunos tipos en cuanto al conflicto de los que podemos reconocer:

- a. Interpersonal
- b. Real
- c. Latente
- d. Inducido
- e. Institucionalizado
- f. Interpuesto

Este conflicto se da entre mas de dos personas, donde por una parte tenemos a la compañía TEXACO y por otro lado encontramos a personas naturales agrupadas en nacionalidades indígenas (Huaorani, Cofán, Siona, Secoyas y Kichwas).

Al contemplar en la tipología una incompatibilidad de objetivos debemos mencionar que esta se manifiesta en los procesos legales instaurados tanto en los Estados Unidos como en el Ecuador, donde el tema pasa por lo que realmente quiere cada una de las partes conseguir en el manejo de este conflicto, objetivos que han llegado

en ciertas etapas a confundirse también con los intereses y las posiciones, dentro del cual juegan factores que se apegan a las emociones sobretodo desde el punto de vista o la posición de las comunidades indígenas afectadas por ver la destrucción de su contorno natural y las múltiples enfermedades de su gente causadas por la operación petrolera en su territorio.

Resulta evidente que la asimetría de poder entre las partes en conflicto es muy marcada donde en muchas etapas del proceso era previsible la “siguiente” acción de algunas de las partes, es decir por ejemplo, es fácil reconocer de que si algunas de las partes no estuvo de acuerdo con ciertos dictámenes por parte del juez en Nueva York lo seguro es que apelaría aquella decisión y la otra parte prácticamente sabía que lo iba a hacer, todo esto tomando en cuenta que las partes no se enfrentan cara a cara sino que son sus representantes los que se encuentran y tienen contacto dentro de la tramitación del caso.

Desde la teoría de los conflictos socioambientales este conflicto puede tener una tipología posiblemente más exacta por los sucesos acontecidos y se muestra como un conflicto:

- a. De hecho
- b. Asimétrico
- c. Dilatado
- d. Endémico

Es claro y sintético decir que este conflicto se encuentra en actividad ya que su acciones se encuentran en curso, que existe una marcada asimetría en los niveles de poder entre la TEXACO y las comunidades indígenas, siendo un proceso dilatado ya que como vemos en la sistematización la primera demanda se plantea en 1993, lo cual no obsta para entender que antes de esa fecha el conflicto ya existía y finalmente las dos partes han ejecutado acciones para mantener una permanencia del conflicto donde uno de los actores (la TEXACO) no ha planteado una solución efectiva con lo cual se consiga resolver el mismo.

El caso TEXACO, de acuerdo con la información obtenida se lo puede considerar como un conflicto diplomático por no evidenciarse actitudes violentas o de agresión física entre los actores.

Esto puede ser demostrado desde el punto de vista de las acciones o estrategias que han adoptado los actores para manejar el conflicto, y por estar este conflicto tan cuestionado por los medios de comunicación poco podía la TEXACO radicalizar su posición y buscar un enfrentamiento lo que también se vuelve complicado, ya que para la fecha en que se desata el conflicto la compañía ya operaba en la amazonía ecuatoriana por lo que se vuelve complejo la existencia de roces en la con los indígenas.

Las comunidades indígenas, al adoptar estrategias para movilizar el conflicto y a pesar de que se realizan marchas y tomas simbólicas y pacíficas de la Procuraduría del Estado, no cometen actos que puedan ser considerados como violentos ya que el único propósito de estas acciones era buscar el apoyo por parte de las autoridades competentes a nivel nacional en defensa de sus intereses y derechos como ecuatorianos.

Sin embargo este tipo de apreciaciones desde la teoría son aceptables a pesar de que si se realizaría un análisis profundo sobre los niveles de agresión de las distintas manifestaciones e implicaciones de lo que es la violencia tampoco podríamos mantener una tesis en cuanto a la diplomacia del conflicto.

Actores del conflicto

Dentro de este caso por lo evidente que resultan los hechos también es evidente la determinación de actores y su clasificación y en las etapas del proceso en que se involucran.

- a. Receptor o Afectado: Comunidades Indígenas: Huaorani, Cofán, Siona, Secoyas y Kichwas
- b. Generador: Compañía petrolera TEXACO
- c. Iniciador: Grupo afectado por la actividad de la TEXACO
- d. Regulador: Jueces competentes del estado de Nueva York y la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos; la Corte Superior de Nueva Loja y órganos de justicia ecuatorianos.

Hay que tomar en cuenta que como un actor pasivo por incapacidad lógica de reacción frente al conflicto, tenemos al medio ambiente, que es un bien jurídico que debe ser protegido por el Estado y que en este caso es un receptor directo de los daños ambientales provocados por las operaciones petroleras de la TEXACO.

En cuanto a la clasificación de los actores y su participación dentro de este conflicto se deben hacer algunas especificaciones ya que por una parte los receptores, que independientemente de los niveles de afectación de los que han sido objeto, no podrían ser desplazados por la alta importancia en el tratamiento urgente de sus necesidades, mientras que el actor generador del conflicto no debe tener ningún tipo de discusión por lo claro de los hechos y pruebas en contra.

Si nos referimos al iniciador del conflicto, como aquella persona o personas que manifiesta primero su disconformidad con los hechos generadores. Las personas que inician las acciones legales en los Estados Unidos son las que dan un “primer paso”, tomando en cuenta que no eran legítimos representantes de la totalidad de los afectados, pero que no se les puede juzgar por esta razón ya que su acción es muy valedera desde un punto de vista moral; pero, hay que considerar que antes del planteamiento de la primera demanda ya entraron en escena personas que visualizan y posteriormente dan efectivamente una iniciativa en cuanto a la exteriorización del conflicto como ya mencionamos en la sistematización del caso.

En cuanto al actor regulador, mas allá de la discusión de competencia y jurisdicción son a la final los encargados de juzgar las actuaciones de los generadores del

conflicto por lo que la exigencia que recae sobre ellos es muy grande y mas aún sobre el sistema de administración de justicia ecuatoriano que tiene ahora la responsabilidad de dictaminar sobre el caso y que es de público conocimiento los problemas que este poder del Estado posee.

Ahora como vemos los actores del conflicto que se han mencionado son aquellos que por implicaciones naturales a este tipo de conflictos socioambientales participan en el desarrollo del conflicto, sin embargo debemos mencionar la existencia de un actor que juega un papel importantísimo y que es el ESTADO.

Dentro del caso TEXACO cuando nos referimos al Estado no solo debemos pensar en los órganos judiciales que llevan el proceso, ya que la participación del Poder Ejecutivo, la Procuraduría del Estado y los entes diplomáticos a lo largo del proceso deberían resultar trascendentales en defensa de los derechos de los ecuatorianos.

No se puede concebir como lógico la actuación del Estado cuando por su accionar denota una pérdida de su autonomía y autoridad al no mantener políticas claras, específicas y reales, todo esto sin mencionar que el Estado también es culpable del cometiendo muchas acciones arbitrarias, viciadas de actos de corrupción y sobornos a municipios (e inclusive a dirigente indígenas), por ejemplo, cuando se busca la firma del acta de finiquito que pretendía la aceptación de algunas autoridades de la remediación ambiental propuesta por la TEXACO tomando una actitud pasiva y de complicidad, de no hacer nada, frente a realidades que afectan al legal desarrollo del conflicto.

Definición del conflicto específico

Es una confrontación de intereses entre las nacionalidades indígenas Huaorani, Cofán, Siona, Secoyas y Kichwas y la compañía petrolera TEXACO Inc. por los graves perjuicios causados al medio ambiente por la TEXACO por la implementación de tecnologías inadecuadas para actividades exploratorias y de explotación de petróleo en los territorios de las comunidades indígenas de la

amazonía ecuatoriana que como consecuencia del daño ambiental ha causado problemas en la salud de los habitantes de la zona.

Análisis de situación de elementos anexos al conflicto

Dentro de ciertos elementos que se los debe contemplar dentro de un conflicto como factores inherentes al mismos, como hemos mencionado en algunas ocasiones, son las Políticas Publicas, que para el caso TEXACO sin duda tienen una importancia fundamental siendo lamentable que en las etapas más críticas del conflicto no se hayan convertido en un respaldo para los perjudicados sino como un obstáculo mas que se debía vencer, en otros momentos, el que se deba forzar al Estado para que las incorpore en virtud de apoyar sus demandas resulta inconcebible ya que esto no es una cuestión de querer o no querer sino una obligación del Estado en defensa y protección de los derechos colectivos contemplados en la Constitución.

Ya hemos hecho un análisis con respecto al rol que juega el Estado dentro de este conflicto, sin embargo con esos antecedentes no nos queda más que reconocer que el Estado es uno de los principales responsables de la situación actual del caso TEXACO, por una parte, porque al firmar los contratos, el “discursito” de participación y consulta a las comunidades a los procesos petroleros es mera teoría y por lo general no existe una garantía a la vigencia de la ley.

Por otra parte se debe tener en claro que los criterios con los que se manejan los contratos, sean mecanismos de control, protección de grupos vulnerables y en general aspectos vinculados con la industria petrolera en el Ecuador, no son considerados ni con la importancia que se merecen, a pesar de que se siga diciendo que si se toma en cuenta, esta puede ser una de las causas de que la conflictividad sea tan pronunciada.

Hay que notar que dentro de las comunidades a lo largo de los años de duración del proceso se han presentado también conflictos internos debido a la ingerencia y presión de grupos de poder y a las debilidades estructurales de las organizaciones

indígenas, fruto de estos condicionamientos se conoce que dentro del proceso se dan sobornos a dirigentes indígenas, de lo cual se argumenta como pruebas la existencia de testimonios, grabaciones y convenios, a cambio de aceptar la remediación ambiental que proponía la TEXACO.

En relación a la participación de las comunidades dentro del conflicto se debe mencionar que a pesar de que en un inicio se encontraban separadas y desconocían del tema ahora se han empoderado del conflicto y que trabajan diariamente para hacer valer sus derechos, lo cual implica necesariamente todo un proceso de fortalecimiento.

Como es lógico los hechos generadores del conflicto afectaron tanto a mujeres como a hombres, con lo que las implicaciones de genero deben también ser consideradas, ya que si para los hombres los daños en la biodiversidad y la desaparición de especies que utilizaban para su subsistencia, no es menos cierto que la preocupación de las mujeres por ver a sus hijos enfermos se convierte en un impacto social de relevancia, al punto de que los mismos factores, consecuencia de la contaminación afectó de distinta manera a los géneros y es por eso que se sostiene la tesis de que los criterios con los que se maneja tanto la contratación como los impactos y conflictos no están bien entendidos por aquellas personas que deberían conocerlos.

Los Gobiernos Locales, como son los municipios, también son parte de la conflictividad ya que al ser los encargados de ciertos controles dentro de su jurisdicción territorial – dependiendo de las situaciones y sus competencias sobre estos temas -, en lugar de ser un nexo para canalizar acciones o de apoyar en los procesos de diálogo entre o las partes en conflicto, fueron un foco de corrupción al aceptar sobornos por el tema de la remediación, casos como el Municipio de la Joya de los Sachas, Municipio de Shushufindi y Municipio del Coca que son lo que se conoce que intervinieron en estas acciones que a mas de ser ilegales son completamente inmorales.

Con los datos estadísticos que se mostraron como antecedentes de la sistematización del caso TEXACO se demuestra que una vez más que en nuestro país falta mucho que discutir y regular con respecto al desarrollo y los recursos naturales, ya que como hemos visto el único interés de la compañía era explotar al máximo el recurso sin la mas mínima consideración en cuanto a los daños ambientales, todo esto con el visto bueno del Estado.

Si bien es cierto que no podemos ser ajenos al desarrollo, tampoco podemos ser ajenos a los daños que este causa, sobretodo a las comunidades de las zonas donde se explota petróleo, ¿pero que pasa si ponemos los hechos desde la visión del Estado?, cuanta plata ingresó a las arcas del fisco a comparación con toda la plata que se llevó la TEXACO de “nuestro” petróleo, plata que tiene que revertirse en beneficio de los ecuatorianos, claro ¿pero si pensamos en cuanta plata entró en los bolsillos de algunos corruptos?, por otro lado que beneficio puede tener el Estado de una actividad que lo que hizo fue dejarle con el pueblo en contra y con una gran cantidad de daños ambientales con lo que ahora el Estado debe lidiar además de sus consecuencias, entonces ¿el Estado se benefició?

Como se manejó el conflicto y las herramientas utilizadas

Como hemos visto este caso ha sido totalmente judicializado, pero podemos decir que posiblemente la única justa causa es la de los indígenas afectados, ya que cuando se inicia el manejo del conflicto y se plantea la primera acción los abogados – que por cierto eran norteamericanos – al enterarse del lo que acontecía con la TEXACO en el Ecuador vieron una gran oportunidad, sin intención de juzgar a nadie, ¿porque intervinieron? ¿Quién les llamó? y son las mismas preguntas que se pueden plantear frente a la intervención de Bonifaz, reiterando sin ofender a nadie ni queriendo establecer juicio de valor pero son como “caídos del cielo”.

Evidentemente las estrategias establecidas para manejar el conflicto fueron formales mediante la vía judicial, planteando en los Estados Unidos una “acción de clase” y cuando el proceso pasa al Ecuador lo que se plantean son “acciones civiles” las

cuales sin duda podrían servir y de hecho buscan la reparación completa de los daños causados por la TEXACO, de las cuales todavía estamos a la espera de los resultados.

Lo complicado en este tema es considerar a estas acciones como estrategias exógenas, es decir que vinieron de afuera y que posiblemente no recogen los verdaderos objetivos que persiguen los afectados, esta consideración hecha a pesar de que cuando el proceso viene al Ecuador los indígenas tuvieron un tiempo para reflexionar sobre la estrategia a seguir. ¿Pero es que realmente se llevó a cabo un proceso que conduzca a tomar la decisión más acertada por parte de los indígenas o es que fue una decisión manipulada?

A pesar de que ya se encuentra planteada la vía por la cual se pretende resolver el conflicto, hay que destacar que se establecieron ciertas estrategias mediante las cuales se ha conseguido sostener el caso, las mismas son totalmente válidas y efectivas ya que como vemos es un proceso que inició en 1993 y se necesita de mucho esfuerzo para que este se mantenga hasta que se dé una respuesta al tema.

Como estrategias utilizadas encontramos:

- *“La unidad de los afectados representados por sus propios espacios de organización.*
- *La presión pública ejercida a través de los medios de comunicación tanto a nivel local, nacional e internacional; y*
- *El apoyo y solidaridad internacional de organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y personas sensibles con la causa amazónica”¹⁵⁵*

¹⁵⁵ FONTAINE, Guillaume. Editor, “Las Apuestas” Petróleo y Desarrollo sostenible en el Ecuador, Foro del Observatorio de Estudios Socioambientales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ecuador, Pág. 40 y 41

En otra etapa del conflicto se buscó un acuerdo negociado por parte de la TEXACO, pero evidentemente este no tenía el sustento ni las condiciones necesarias a través de las cuales se consiga un buen proceso de diálogo y de toma de decisiones.

Que otras alternativas de manejo pudo tener el conflicto frente a la teoría

En este caso hay ciertos aspectos que pueden ser discutibles en cuanto a la estrategia de utilizar medios formales de resolución de conflictos y sobretodo por las coyunturas que se presentan frente al tema, primero por que existe una gran desconfianza en torno a los sistemas y órganos de justicia ecuatorianos en torno a este caso a lo que se suma la falta de decisión política de las autoridades de turno, por otro lado la asimetría de poder entre la compañía y las comunidades no quisiéramos que sea un factor que incida en la decisión que deben tomar los jueces competentes.

Adicionalmente, por no tener todavía una resolución en firme o una sentencia sobre el caso se abre la posibilidad de algunas estrategias que se pudieron haber tomado en el momento de la transición del proceso al cambiar de jurisdicción, eso es algo que se pudo considerar porque como sabemos en esta etapa del juicio hay que mantenerse a la expectativa de las acciones y resoluciones de las autoridades judiciales.

Para intervenir en cualquier otro proceso marcado por una estrategia para manejar este caso, resulta importante enfocarse en procesos previos y el momento coyuntural para estos hubiese sido la etapa cuando el proceso salió de los Estados Unidos para radicarse en el Ecuador, momento en el cual en lo que se debía trabajar era evidentemente un proceso de fortalecimiento de las comunidades, a través de capacitación, acceso a la información, procesos de toma de decisiones, etc., los que debían conducirse con el objetivo de dar mayor simetría al conflicto, es decir equilibrar ciertos aspectos con respecto a las relaciones de poder.

Una vez que existieron estos condicionamientos, sumados a la aparente predisposición de la TEXACO para buscar un acuerdo negociado, hubiere sido el

momento preciso para proponer un proceso de mediación o de facilitación, claro se lo podía proponer por cualquiera de las partes o inclusive de un tercero, lo único que se debía tomar en cuenta en ese momento es que los procesos debían ser idóneos, voluntarios y aceptados por las partes para someterse a ellos.

Hay que considerar también que en este momento con esa predisposición al diálogo existió un intento de negociación, que a pesar de que estuvo evidentemente mal manejado desde un punto de vista metodológico, hubo la posibilidad de aprovechar de esta situación para conformar una real mesa de diálogo que resulte productiva para las partes.

Por otra parte tomando en cuenta de que las comunidades se podían fortalecer y con las condiciones necesarias para la toma de decisiones se podía intervenir en un proceso de negociación asistida o mediación o un proceso de facilitación, es decir establecer mesas de diálogo donde las partes podían establecer acuerdos a través de los cuales se pueda conseguir una remediación total de los daños. Sin embargo al hablar de condiciones necesarias, por más preparadas que se encuentren las comunidades y que la TEXACO podía asumir este tipo de diálogos, es imprescindible contar con una decisión política encaminada sobretodo a garantizar y exigir el cumplimiento de los acuerdos logrados y a monitorear su ejecución.

A la par de estos procesos se debía trabajar y trascender en cuanto a la participación del Estado a través de la definición de políticas públicas que no desfavorezcan a los actores sino que brinden un camino más limpio para iniciar un proceso alternativo, con criterios definidos en cuanto a temas ambientales, sociales, culturales, económicos. Que ofrezca una estructura de confianza en cuanto a la participación y consulta a las comunidades, ya que este factor mas allá de ser un problema metodológico se constituye en una inmoralidad sentar a los actores, con una muy marcada asimetría de poder, en una mesa de diálogo si el estado no asume responsabilidades y compromisos reales.

Una vez que se hubiera cumplido con brindar ciertas garantías y tener las condiciones necesarias es posible que por economía procesal en cuanto a tiempo y recursos económicos, de existir acuerdo entre las partes se podía acceder a un proceso arbitral, que seguramente hubiera sido internacional pero que de todas maneras podía cumplir con los mismos objetivos y necesidades que han sido planteadas en el juicio, además que se podía contar con la imparcialidad y experiencia en la materia de los árbitros, a la vez de frenar y entrar un proceso de desescalamiento del conflicto.

Llevando el caso TEXACO al análisis de los cuatro elementos propuestos por Harvard, es un tema que podría brindar muchos elementos de apoyo con el único objetivo de solucionar el conflicto.

Primero hay que considerar que este es un hecho consumado, que los niveles de contaminación y de afectación tanto a la población como al medio ambiente ubicados en la zona son reales y comprobados.

En cuanto a los cuatro elementos, considerando a las “personas”, es una relación extremadamente desgastada, la oposición en contra de la TEXACO no permite que se pueda establecer una relación constructiva entre los actores del conflicto como aliados para la solución del conflicto, además que la TEXACO como tal no es el conflicto sino los daños provocados por esta compañía por lo que un parámetro básico en este caso es separar a la persona (TEXACO) del conflicto (contaminación).

Después de este trabajo, que por cierto por la realidad actual del conflicto es muy difícil de conseguir, se debe fijar la atención principal en los procesos de diálogo y negociación en base a “intereses” sobretudo de los afectados ya que la posición de satanizar a la petrolera, sabiendo que es la responsable, hasta el momento no ha conseguido la solución del conflicto, solución que se enmarca en la reparación ambiental y social, siendo este último el interés real y que debe ser exteriorizado y visualizado por los dos actores; adicionalmente, se debe trabajar en descubrir y fijar el verdadero interés de la petrolera ya que cuando se ponga sobre la mesa esta

coyuntura podremos hablar que se llevará a cabo un procesos alternativo de solución de conflictos.

Una vez más se comprueba que tomar una solo opción (tercer elemento del método) como criterio para la solución de un conflicto no es un buen aliado, ya que como vemos han pasado algunos años en los cuales el caso se sustancia en los distintos tribunales de justicia y posiblemente pasarán algunos más sin saber a ciencia cierta cual será el resultado de la sentencia y sin ser los actores partícipes directos de la solución del conflicto.

Por esta razón es que es recomendable trabajar sobre múltiples opciones, recordemos que en determinada parte del conflicto la TEXACO intentó buscar una solución negociada a través de una indemnización, sin embargo no se pudo llevar a cabo por existir trabas que se explican por medio del primer elemento (personas); sin embargo esta situación puede ser retomada como una opción para la solución del conflicto, siempre mediante un proceso dirigido, pudiendo ser este de mediación o facilitación, contando además como sustento con los dos elementos antes mencionados y fortaleciendo el proceso a través de los Criterios Objetivos (cuarto elemento) que sin duda serían de mucha utilidad para este caso, al tomar en cuenta aspectos legales, informes técnicos de contaminación, etc.

4.3 CASO: “Caso: Sarayaku / CGC”

Tipo de conflicto

Se debe considerar que el caso Sarayaku / CGC, es uno de los caso más sonados en la actualidad que por su vigencia en estos últimos años a marcado ciertas pautas comunes sobre las cuales se configuran los conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera en el Ecuador tanto desde los hechos generadores del conflictos, pasando por el comportamiento de los actores como de las acciones que se buscan con el objetivo de manejar el caso.

De acuerdo con la teoría del conflicto este caso se lo puede considerar como un conflicto:

- a. Interpersonal
- b. Real
- c. Manifiesto
- d. Inducido
- e. Primarios

Resulta lógico, como en los otros conflictos analizados, que éste se dé entre dos personas que si bien es cierto la una es una persona jurídica en el caso de la CGC mientras que por otra parte interviene una comunidad, es decir el Pueblo Kichwa de Sarayaku el cual, dentro del conflicto es representado por la Asociación de Sarayaku y por su organización madre que es la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), el conflicto evidentemente surge por la incompatibilidad de objetivos ya que por una parte Sarayaku busca proteger su territorio, recursos naturales y aspectos socioculturales, mientras que la CGC busca cumplir y ejecutar el contrato de concesión que tiene con el Estado ecuatoriano para realizar actividades de exploración y explotación petrolera en el Bloque 23.

Al considerar que este es un conflicto manifiesto, es decir que surge por aspectos evidentes del conflicto, encontramos que por una parte Sarayaku quiere a cualquier costo impedir que la CGC y las operaciones hidrocarburíferas ingresen en su territorio, mientras que los intereses tanto de la compañía como del Estado son que las operaciones se inicien para lo cual no toman en cuenta la oposición y el rechazo existente por parte de la comunidad, momento en el cual se evidencia que este es un conflicto inducido en el cual los desequilibrios en las relaciones de poder se exteriorizan por las posiciones y actitudes sobretodo de la compañía con el beneplácito y hasta el apoyo de Estado, y además en todo el desarrollo del conflicto las partes se han encontrado cara a cara tanto en tribunales de justicia como en enfrentamientos en el mismo territorio de Sarayaku.

Al adoptar una tipología de acuerdo con la teoría del conflicto socioambiental debemos observar el caso de Sarayaku / CGC como un conflicto:

- a. Que se manifiestan externamente
- b. De Hecho
- c. Asimétrico
- d. Dilatados
- e. Endémico

Es notorio que este conflicto mantuvo una característica de ser exteriorizado y manifestados desde su inicio por la parte que se encontraba perjudicada por una actividad con la cual no estaba de acuerdo, es así que vemos como la comunidad de Sarayaku manifiesta su disconformidad con marchas y petitorios al gobierno al enterarse de la concesión firmada entre el Estado y la CGC con lo cual se adjudica un bloque petrolero que afecta directamente a su territorio.

No es ajeno para nadie que desde que este conflicto fue exteriorizado, los hechos generadores del mismo, se han dado a lo largo de los años los mismos que pueden ser apreciados no solo por entendidos en la materia, los actores del conflicto sino también por la sociedad entera la cual podía enterarse de las cosas que estaban pasando por los medios de comunicación a nivel nacional. Se evidenció una vez mas, como es común en este tipo de conflictos en la actividad petrolera que la asimetría en los niveles de poder es notoria, ya que las partes no se encuentran en la misma capacidad para poder enfrentarlo y las acciones que cada una de ellas puede tomar marcarán en gran parte, la forma en que este conflicto puede crecer o resolverse.

Este problema tiene una duración larga en el tiempo ya que desde 1989, se considera la posibilidad de la existencia de un conflicto, el mismo que se ha ido transformando y pasando a distintas etapas y manifestaciones. Podemos considerar que desde ese año es que Sarayaku se encuentra de una u otra forma involucrado en el conflicto hasta el presente, donde, por una parte se ha buscado la forma de resolverlo pero que por otra parte se han dado acciones que no demuestran la predisposición para

resolverlo, provocando un escalamiento del conflicto, sin que hasta el momento existan consensos básicos para iniciar un proceso efectivo de resolución.

Realizar un análisis preciso sobre los tipos de conflicto que ha adoptado este caso resulta un poco difícil ya que si bien es cierto que se han utilizado medios diplomáticos para buscar su resolución como son las demandas ante la defensoría del pueblo o el la acción de amparo constitucional o las distintas solicitudes a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos e inclusive los intentos de dialogo, que sobretodo ha buscado Sarayaku, no podemos dejar de lado que durante algunas etapas del conflicto se los llevó a que se utilicen medios de persuasión violentos, ya que como vimos en la sistematización del caso, existieron enfrentamientos entre las partes, agresiones a ciertos actores – en especial a aquellas personas que representan a Sarayaku – lo cual denota que los mecanismos o medios en los que se pretendió resolver el conflicto no solo fueron diplomáticos sino extremos.

Ahora, hacer un análisis sobre las causas por las que el conflicto ha tenido que pasar de un tipo a otro, porque hay que reconocer que a tenido variaciones, es decir que dependiendo de las etapas o las coyunturas del conflicto pasaron de diplomático a extremo y viceversa, podemos deducir que estos cambios dependen de los intereses o premuras del momento para conseguir algo lo cual evidencia o una notable estrategia para manejar el conflicto o una inexistencia de una metodología y que en este caso se debió enmarcar una política pública clara y de lo cual comentaremos mas adelante.

Actores del conflicto

Dentro de este caso no resulta difícil clasificar a los actores del conflicto ya que cada uno de estos a tenido un rol independiente y además con posiciones, intereses y comportamientos o acciones muy claras.

- a. Receptor o Afectado: Pueblo Kichwa de Sarayaku, que son representados por su organización mayor la OPIP y la Asociación Sarayaku.

- b. Generador: El Estado¹⁵⁶ y la Compañía General de Combustibles CGC
- c. Iniciador: Pueblo de Sarayaku
- d. Regulador: El Estado. También como actor regulador debemos tomar en cuenta al Defensor del Pueblo, al Juez Primero de lo Civil de Pastaza, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de que la calidad de los actores participantes en este conflicto se encuentra clara hay que anotar que en el caso de los actores receptores o afectados por el conflicto existen otras comunidades vecinas de Sarayaku como Pakayaku, Shaimi, Jatún Molino y Canelos que también son afectados por la actividad de la CGC en el Bloque 23, pero que lamentablemente firmaron “acuerdos” a cambio de retribuciones económicas a favor de las comunidades por lo que poco han exteriorizado su disconformidad con la entrada de la compañía a su territorio y sus implicaciones lo cual no debe excluir a estas comunidades de convertirse en afectados sobretodo desde el punto de vista social y ambiental.

Hay que considerar que el Estado siempre tienen un nivel de involucramiento dentro de los conflictos socioambientales y sobretodo si estos están ligados con la industria petrolera, pero en el caso de Sarayaku hay que mantener una idea clara sobre esta participación ya que el Estado como tal es uno de los actores que mas conflictos ha generado en Sarayaku primero porque puede considerarse como responsable del daño ambiental al otorgar una concesión en esta zona, por la violación expresa a la constitución y convenios internacionales y sobretodo por la constante violación a los derechos humanos del Pueblo de Sarayaku.

En cuanto a la CGC como actor generador del conflicto hay que reconocer que las actitudes y la manera en las que pretenden realizar un trabajo o cumplir con un contrato, lo único que ha provocado es un escalamiento del conflicto, sobretodo por irrespetar los dictámenes judiciales que fueron dados por las autoridades competentes.

¹⁵⁶ Cuando hablamos de Estado en estos casos hay que entender que dentro de este existe la participación de todos aquellos organismos vinculados en el manejo de la actividad petrolera como la el Ministerio de Energía y Minas y todas sus entidades conexas.

En relación a los actores reguladores, resulta importante apreciar que este caso a trascendido tanto a niveles nacionales como internacionales ya que Sarayaku para conseguir el respeto de sus derechos debió optar por llevar su caso a comisiones y cortes internacionales, por la incapacidad del Estado para respetar y hacer respetar los derechos consagrados tanto en la constitución como en convenios internacionales.

Definición del conflicto específico

Es una confrontación de intereses entre el Pueblo Kichwa de Sarayaku en defensa de su territorio ancestral y legalizado por el Estado, sus derechos colectivos y humanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en el Convenio 169 de la OIT; y la Compañía General de Combustibles CGC y al Estado Ecuatoriano por el manejo, acceso, uso y aprovechamiento de recursos naturales no renovables como es el petróleo que se encuentra en los mencionados territorios a través de acciones que han causando un grave impacto social y ambiental en Sarayaku.

En este caso es importante tomar en cuenta que el conflicto sufre un constante proceso de escalada, debido a las acciones u omisiones de los distintos actores, y, si pensamos que en un proceso de intervención adecuado en el conflicto se debe empezar por trabajar en un proceso de desescalamiento con la finalidad de preparar el escenario para un proceso de diálogo.

Análisis de situación de elementos anexos al conflicto

Es innegable que cuando se realiza un análisis de un conflicto socioambiental hay que tomar en cuenta una serie de elementos los cuales fortalezcan los niveles de información que posteriormente se los utilizará para establecer las estrategias correspondientes para el manejo del conflicto.

A pesar de que las distintas percepciones que tienen hombres y mujeres frente a un conflicto socioambiental en cuanto al territorio, recursos naturales, identidad cultural,

entre otros aspectos, podemos mencionar que en el caso de Sarayaku existe una participación igualitaria con respecto a los temas de género, principalmente por la intervención tanto de hombres y mujeres en las asambleas generales con relación a la toma de decisiones frente al conflicto y a las acciones que como comunidad deben ejecutarse.

Esta participación activa se refleja también desde el inicio del conflicto con la participación de toda la comunidad (hombres y mujeres) en movilizaciones y protestas en contra de una actividad que afectaría en conjunto al Pueblo de Sarayaku, activismo que se evidencia inclusive a nivel dirigenal ya que no solo hombres participaron en este nivel organizativo que como hemos visto se debió proteger a mujeres involucradas con la dirigencia a través de las acciones propuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Evidentemente no podemos individualizar los temas de género en el caso de Sarayaku, a pesar de que las percepciones sean diferentes, ya que cuando hablamos de violación de derechos humanos y vulneración de derechos colectivos se sobre entiende que las afectaciones recaen sobre hombres y mujeres, pero también es verdad que ellos y ellas asimilaron las consecuencias de los hechos generadores del conflicto de manera distinta.

Posiblemente uno de los temas que más polémica ha causado dentro del caso de Sarayaku tiene relación con las políticas públicas. Como hemos visto a lo largo de todo el conflicto, el Estado ha sido uno de los principales involucrados tomando actitudes que para muchos podrían resultar mas que sorprendentes.

Frente a este tema debemos mencionar primero que no se ve una política pública clara que pueda regular la actividad petrolera en Sarayaku donde el principal eje movilizador de las acciones del Estado se ha caracterizado por basarse en intereses y retribuciones económicas producidas por la extracción de petróleo, sino es así, como explicarse las posiciones adoptadas por el Estado como actor regulador de un conflicto que confronta los intereses de una comunidad indígena legalmente

reconocida y de una compañía petrolera extranjera, en el que éste ha demostrado un mayor interés por las actividades productivas que debe cumplir la CGC que por la concesión que tienen en el bloque 23.

Por otra parte resulta contradictorio que siendo el Estado el encargado de respetar y hacer respetar tanto derechos humanos como colectivos contemplados en los convenios internacionales y en la ley ecuatoriana no lo haya hecho, tomando más bien una actitud combativa contra el Pueblo Kichwa de Sarayaku ordenando la intervención de militares y policías en defensa de la compañía, lo cual evidentemente es una violación de derechos colectivos que fue comprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional del Ecuador, tema que agrava la situación ya que existen dictámenes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el estado proteja al Pueblo de Sarayaku, decisiones que a pesar de ser vinculantes y de obligatorio cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano no se cumplieron.

Con respecto a la violación de derechos el tema es claro, pero hay que ver adicionalmente que el Estado y sus políticas públicas podrían ser consideradas como inexistentes, ya que se ha evidenciado una falta de seriedad en el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron las autoridades de gobierno con la dirigencia de Sarayaku. Si se toma en cuenta que existe una ruptura del diálogo entre la comunidad y la petrolera lo lógico es que el Estado sea el nexo a través del cual se pueda buscar soluciones y no que sea éste el encargado de agudizar el conflicto por el no cumplimiento de sus compromisos.

A pesar de que el Pueblo Kichwa de Sarayaku se ha mostrado unido para enfrentar el conflicto hay que observar que comunitariamente hay sufrido también conflictos internos.

A más de enfrentar el conflicto propio, Sarayaku se vio perjudicado por las acciones separatistas que adoptó la CGC al intentar aislar a esta comunidad con sus vecinas, lo cual sin duda podría llegar a cuasar un desorden social de grandes magnitudes, es

decir que podrían a llegar a enfrentarse estas comunidades, pero favorablemente para los intereses comunitarios y los planteamientos que se han realizado, la CGC no ha cumplido hasta el momento con los acuerdos que tenía con las comunidades vecinas de Sarayaku, lo cual en lugar de separar unió a las comunidades.

Una de las principales posiciones adoptadas por Sarayaku es que cualquier diálogo o negociación se debía mantener con la dirigencia comunitaria y no individualmente con los habitantes de la zona y claro está, que esta última forma fue tomada como una estrategia por parte de la petrolera; las negociaciones y la posterior firma de los acuerdos con estas personas provocaron desunión y enfrentamientos internos entre las comunidades. Un buen ejemplo es lo que sucedió con la Comunidad de Independiente de Sarayaku y los problemas que provocó esta negociación individual.

Es importante reconocer que la propia comunidad a pesar de tener muchos conflictos internos provocados desde afuera, demostrando que los procesos de fortalecimiento son importantes para el manejo de conflictos, que han ido superando los roces internos pudiendo enfrentar un conflicto que involucra a la comunidad en su conjunto.

Si bien es cierto que no existe una política pública definida con relación a la actividad petrolera y que el Estado tiene un nivel de involucramiento muy grande, tampoco es menos cierto que los Gobiernos locales deberían jugar un rol más protagónico en estos temas, lamentablemente cuando hablamos de actividad petrolera la voz de mando la lleva el gobierno central.

De todos modos, en el caso de Sarayaku sí existe la participación de un gobierno local, el Gobierno Provincial de Pastaza también estuvo involucrado en una de las negociaciones con la CGC que a través de un acuerdo pretendían ofrecer 60 mil dólares para obras de desarrollo en Sarayaku, lo cual fue asumido como un ofrecimiento que provocaría separación y conflictos internos en la comunidad. Esto demuestra que tampoco a nivel local se puede establecer una política efectiva que

regule actividades y la forma de ejecutar proyectos, es decir que estas intenciones no se ven como legítimas a los ojos de la comunidad de Sarayaku.

Finalmente, la discusión en cuanto a la contraposición de intereses nacionales como el desarrollo y la protección de recursos naturales sigue siendo un tema que no ha sido definido, el mismo requiere de mayor atención y del establecimiento de reglas definidas y coherentes, con lo que se debería considerar el desarrollo sustentable, ya que por una parte no podemos ignorar que el Ecuador tiene una total dependencia económica de la actividad petrolera pero tampoco es menos cierto que los impactos sociales y ambientales frente a esta actividad son incuantificables, por lo que se convierte en urgente redefinir y plantear procesos, planes de desarrollo alternativos, etc., que puedan concluir en un desarrollo sustentable nacional y no convirtiendo esta actividad en favorable para unos y perjudicial para otros.

Como se manejó el conflicto y las herramientas utilizadas

En este conflicto se puede afirmar que varias de las herramientas o métodos que fueron aplicados con la finalidad de manejar y resolver el conflicto por los distintos actores, pudiendo considerar también que estas herramientas fueron utilizadas en los momentos justos.

Ahora se debe mencionar que para este conflicto se utilizaron herramientas de tipo formal, como es la queja presentada ante la Defensoría del Pueblo, el recurso de Amparo Constitucional presentado ante el Juez Primero de lo Civil de Pastaza y las distintas solicitudes presentadas ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Después de un análisis completo del caso, en el cual se han tomado en cuenta una serie de elementos y circunstancias hay que reconocer que la utilización de este tipo de mecanismos formales, por la vía judicial, se convirtió en una necesidad básica con la finalidad de que en ciertos aspectos que el Estado, debiendo garantizarlos no lo

hizo y que de una u otra forma había que obligar al Estado a que cumpla con sus obligaciones.

Por estas circunstancias es que se debe reconocer que la utilización de estos mecanismos, fueron oportunos, lamentablemente hasta el momento, a pesar de que se han seguido los órdenes jurídicos correspondientes, no se ha logrado por parte del Estado que rectifique una posición que aparentemente se guía más por los intereses y beneficios económicos provenientes de la actividad petrolera, que de los dictámenes jurídicos emitidos para este conflicto.

Como vemos de parte del Estado ha existido un notorio incumplimiento, sin embargo no podemos dejar de lado el hecho de que los dictámenes emitidos por la Defensoría del Pueblo, por un Juez de lo Civil competente e inclusive por organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también han sido inobservados por otro de los actores como es la compañía petrolera CGC.

Frente a este tipo de acciones, hay que hacer una consideración y es que los que proponen las acciones siempre son los afectados lo cual tiene un sentido lógico ya que en un conflicto socioambiental provocado por la actividad petrolera, las diferencias en las relaciones de poder son tan grandes que muchas veces no existe otra alternativa que seguir por estas vías para poder hacer respetar ciertos derechos o por lo menos ser escuchados en sus reclamos.

Ahora también nace un cuestionamiento muy importante y es como se puede buscar la forma de cumplir esos dictámenes porque como vemos hasta ahora tanto el Estado como la CGC han desobedecido a lo dictaminado y entonces para que nos sirva si no podemos hacerlos cumplir.

El caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku es muy interesante ya que a pesar de que se tomaron acciones formales a través de la vía judicial para poder controlar y evitar una actividad perjudicial dentro de un territorio indígena (en el cual se irrespetaron

una gran cantidad de derechos), también existió una gran predisposición por parte de la comunidades indígenas por mantener procesos de diálogo, que a pesar de los esfuerzos se rompieron por completo las relaciones con la petrolera, se buscaba una permanente apertura y diálogo por parte del gobierno, sin embargo hay que observar que las mesas de diálogo no han sido lo suficientemente productivas y que a pesar de que se han logrado acuerdos estos no se han cumplido.

Que otras alternativas de manejo pudo tener el conflicto frente a la teoría

Inicialmente, hay que considerar que las acciones del tipo formal que se han llevado a cabo para resolver el conflicto son las justas, sin embargo si tomamos en consideración acciones alternativas o mediante métodos alternos de solución de conflictos, es posible que se puedan encontrar otros caminos para resolver el conflicto.

Primero, como un antecedente que nos favorece para realizar un análisis y estudio sobre este tema es que no se ha convertido en un caso totalmente judicializado sino más bien de que aún existen o podrían existir espacios de diálogo, lo que se necesitaría es trabajar mejor en estos procesos para conseguir o tratar de conseguir algunos progresos y también acuerdos concretos, realizables para el caso de Sarayaku y la CGC.

Desde el punto de vista de los medios alternativos se puede considerar uno que podía ser utilizado y es el Arbitraje Internacional, con el objetivo de buscar una vez más un dictamen que decida sobre temas territoriales, de vulneración de derechos tanto colectivos como humanos, medidas cautelares entre otros aspectos. Pero como sabemos, primero a que se dé procesalmente un arbitraje es necesario un acuerdo previo a través del cual las partes acepten someterse a este tipo de procesos, además que se debían definir los participantes en el proceso, su nivel de participación y responsabilidad frente al conflicto.

En un proceso de diálogo a través de cualquier forma, sea mediación, facilitación o inclusive una negociación no asistida, puede ser muy importante el fortalecimiento de la comunidad, pero, es necesario contemplar procesos previos ya que es notable la asimetría de poder entre las partes, por lo que se debe mantener procesos antes mencionados para la toma de decisiones informadas, entre otros aspectos, por lo cual es interesante contemplar como alternativa metodológica aquellos procesos diseñados para estos aspectos, posteriormente a un análisis del conflicto o de las necesidades inmediatas y reales para que en esta etapa del conflicto se puedan definir las estrategias y los planes de trabajo respectivos.

A través de la utilización de estas metodologías no se pretende, como hemos dicho, la fórmula secreta para la resolución absoluta del conflicto, lo interesante del tema es involucrar a los actores en un procesos que puedan promover cambios en ellos y provocar cambios en el conflicto, lo cual sin duda también sería interesante para buscar una transformación social que contribuya a la resolución del conflicto y además a la modificación de ciertos aspectos legales y políticas públicas.

Lo importante en el caso de Sarayaku, y posiblemente en ningún caso de conflictos socioambientales por actividad petrolera, no se precisan cuales son las metodologías que se deben utilizar, lo importante en el tema es que se debe juntar metodologías las cuales se adapten a las circunstancias, con el objetivo de establecer una serie de estrategias conducentes a manejar o contribuir al manejo de lo que se ha hecho hasta estos días para la solución del conflicto.

Al estudiar, lo importante del caso de Sarayaku es observar que se han utilizado tanto medios formales como alternativos para buscar la resolución del conflicto, pero que es un caso que sigue abierto y que seguramente en el transcurso o desarrollo del conflicto existirá la posibilidad de aplicar o poner en práctica distintos mecanismos para lo cual es indiscutible que se tengan dos ideas básicas: la primera que hace referencia a la complejidad del conflicto y a la gran variedad de hechos mientras que la otra esta en determinar las herramientas idóneas para manejarlo adecuadamente, las cuales no son únicas, específicas e invariables.

Tomando en cuenta todos los antecedentes del caso de Sarayaku y los condicionamientos específicos del conflicto, es evidente que sí se pueden utilizar procesos de diálogo, es decir que sí puede existir y darse efectivamente una negociación. Sin embargo se debe considerar que esta negociación debe ser asistida a través de un proceso de mediación o de facilitación, y esto responde porque se debe entender que esta sería una negociación multipartes, es decir que van a intervenir varios actores, con distintos roles y capacidades para la toma de decisiones, entre los que tenemos a la Comunidad de Sarayaku, la CGC, la BURLINGTON y el Estado Ecuatoriano, lo que sin duda lo convierte en un proceso sumamente interesante tanto desde el punto de vista del MASC como del metodológico y que seguro daría muy interesantes resultados.

Considerando los cuatro elementos (personas, intereses, opciones y criterios objetivos) dentro de los estudios de caso existen muchas coincidencias.

Para el caso de Sarayaku, la relación entre los actores no es variable, se marca un claro desgaste, incomprensión y alejamiento, vale la pena anotar que esta situación es constante además que involucra mucho una radicalización de posiciones, ya que los niveles de diálogo y/o enfrentamiento han sido igual entre la Comunidad de Sarayaku y la CGC y la BURLINGTON en su momento, a pesar de esta realidad es claro que la utilización de este método de los cuatro elementos puede contribuir para buscar un acercamiento, entendimiento y comprensión entre los actores del conflicto.

Como mencionamos en este caso no se tomó en cuenta como fundamento de negociación a los intereses, ya que siempre se ha demostrado una posición indeclinable de parte y parte, lo cual evidentemente, no colabora para encontrar intereses comunes o posiblemente intereses que sean distintos pero compatibles en una actitud de *ganar – ganar*; entonces, se considera como trascendental descubrir estos intereses, mas aún si tomamos en cuenta que el conflicto, al producir cambios sociales, con un buen proceso de manejo puede marcar beneficios mutuos para los actores.

Si tomamos en cuenta posiciones radicalizadas de las partes es lógico pensar que existirá una opción única, ahora la pregunta que surge es que si bien es cierto, el recurso de amparo logró de cierta medida frenar la actividad petrolera en Sarayaku éste ¿ha logrado solucionar verdadera e íntegramente el conflicto?

Desde cierto punto de vista, el recurso de amparo si sirvió, sin embargo este procesos debe ser complementado por otras opciones que permitan solucionar el conflicto. Es aquí cuando debe tomar protagonismo los métodos de solución alternativa de conflictos como la mediación y la facilitación; esto fundamentado además si se ve al recurso de amparo planteado desde otro óptica, no ha dejado conformes a ninguna de las partes, no ha logrado ser ejecutado y cumplido a cabalidad, es la gran diferencia que existe con los acuerdos conseguidos a través de las mesas de diálogo y la negociación los cuales son trabajados, internalizados y asumidos por los mismos actores quienes los construyen.

Finalmente no se han tomado en cuenta criterios objetivos, lo cual resulta evidente como consecuencia del manejo que se viene dando a este conflicto, pero que si se logra sentar a las parte en una mesa, los criterios que provendrán desde un sin número de ópticas contribuirán para fundamentar y fortalecer los acuerdos que las partes puedan y logren conseguir

Capítulo V

5. Propuesta metodológica para el manejo de conflictos socioambientales en la actividad petrolera en Ecuador.

Al contar con importantes y reales elementos de análisis tanto desde el punto de vista teórico como del punto de vista práctico, mas allá de crear una metodología, ya que existen muchas cosas que están dichas y planteadas, el objetivo se transforma en sistematizar y estructurar un estilo de guía que puede ser utilizada para intervenir en conflictos socioambientales en materia petrolera, siempre tomando en cuenta a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. En este tipo de sistematizaciones dependerán tanto en su aplicación como en su idoneidad de los conflictos en los cuales se la pretenda utilizar; ya que sabemos que todo conflicto es distinto por lo que existirán casos en los que se pueda usar la metodología sea de forma total o parcial.

Por lo que justamente la intención es realizar una sistematización metodológica que se encamina a estructurar una agenda mínima que pueda ser aplicada en los conflictos, es decir que no exista una receta secreta o absoluta sino más bien algunas opciones, tomando en cuenta también la variabilidad de los conflictos que justamente no permite manejar con una sola alternativa el conflicto, sino que existirán casos donde deban unirse varias metodologías en distintas etapas, para de esta manera obtener los resultados planteados en las estrategias de manejo.

Hay que tomar en cuenta que para esta sistematización, lo que se ha hecho es realizar una recopilación y una unión de varias metodologías desarrolladas por expertos en estos temas y de varias formas de resolver conflictos que se contemplan en nuestra legislación, que han sido observadas en el desarrollo de esta investigación con la finalidad de contar con un documento de trabajo práctico, con una serie de metodologías aplicables al manejo y a la resolución de los conflictos socioambientales producidos en el desarrollo de la actividad petrolera para que se

convierta así en una herramienta más que contribuya a abordar este tipo de conflictos brindando mayores alternativas para su manejo.

A pesar de que a lo largo del estudio se han analizado varios modos para la resolución de conflictos, lo que interesa es poner énfasis y resaltar los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos: la negociación, mediación, arbitraje, conciliación y facilitación como herramientas para la solución de conflictos, y que se considera importante fortalecerlos con la utilización de otras metodologías que sustenten el proceso de una manera integral y la aplicación de métodos alternativos.

Constantemente se ha mencionado que los MASC, son herramientas perfectamente adaptables para ser utilizadas en cualquier tipo de conflictos por lo que para el caso de los conflictos socioambientales en la actividad petrolera no sería la excepción.

En su momento se realizó el análisis correspondiente sobre cada uno de los MASC, por lo que en este punto tenemos conciencia de las características, funcionamiento, implicaciones, consecuencias y efectos de la aplicación de cada uno de estos, sin embargo de que sean adaptables para nuestro caso hay que realizar ciertas precisiones que contribuyan a una mejor utilización de los mismos.

Para realizar el mencionado esquema tomaremos en cuenta como referencia tres espacios o momentos a través de los cuales se buscará manejar y resolver el conflicto, estos son:

- 1) Evaluación inicial de la situación del conflicto,
- 2) Búsqueda de soluciones y alternativas, y,
- 3) Diseño e implementación del Plan de Acción.

A su vez estos tres momentos han sido considerados como objetivos que se pretenden cumplir en base a esta propuesta. Los objetivos planteados son respectivamente:

- 1) Comprender el conflicto,
- 2) Explorar las opciones de solución al conflicto y sus alternativas, y,
- 3) Diseñar y ejecutar un plan para la resolución de conflictos privilegiando el uso de los MASC.

La intención de comprender el conflicto es tener una idea clara y real de los hechos que rodean a este, por medio de información que haya sido conseguida a través de varios pasos y procesos metodológicos para que al final de esto contemos con la suficiente información que soporte la estructuración de todo lo que será la intervención en el manejo y resolución del conflicto.

Vale la pena mencionar que este paso puede ser ejecutado de manera individual por parte de cada actor, o los dos o más actores en conjunto e inclusive con la colaboración de un tercero, la meta se fundamentará en el cumplimiento de objetivo.

Este proceso constará de varios pasos que metodológicamente se irán cumpliendo. Frente a una situación conflictiva inicialmente se debe tomar en cuenta que antes de pensar en la herramienta a utilizar se debe contar con una información completa sobre el caso, información que debe ser levantada, recopilada y sistematizada, con lo que podremos contar con una evaluación inicial de la situación, aspecto favorable para una adecuada intervención, ya que se corre el riesgo, que información confusa, poco clara o muchas veces falsa sea causante de cometer errores conceptuales y metodológicos a lo largo del proceso.

Al contar con toda esta información global del conflicto es importante que podamos realizar un análisis específico del conflicto específico con la finalidad determinar ciertos aspectos y criterios puntuales, el objetivo es detallar una situación sobre la cual planificaremos las demás acciones, esto nos permitirá no divagar y concentrarnos sobre un tema en concreto.

Dentro de este análisis específico es importante mencionar que uno de los aspectos fundamentales es determinar cuales son los niveles de escalamiento del conflicto, ya

que las estrategias y planes de acción tiene que sujetarse principalmente a las necesidades del conflicto, por que de estar en un proceso de escalamiento importante las estrategias y planes de acción serán más urgentes y severos en unos casos, en otros antes de entrar en un proceso de resolución se debe considerar elementos de desescalamiento, lo cual implica primero manejo y luego resolución.

En esta etapa es también necesario trabajar en base a los actores, porque es importante definir a aquellas partes que están involucradas directa o indirectamente en el conflicto, estableciendo criterios sobre las partes. Para efectos prácticos es importante realizar un buen trabajo de evaluación de la situación ya que gran parte de los elementos referentes a los actores saldrán en esta etapa.

Como hemos mencionado, en este primer escenario, la clave radica en llegar a conocer el conflicto, cada una de sus situaciones puntuales, entender cuales son las causas, los problemas, los hechos generadores y los contextos en los cuales se desarrolla el conflicto, y además se debe internalizar todo el proceso para poder tener una visión amplia y objetiva sobre el conflicto, ya que la elaboración de una estrategia de intervención y un plan de acción implican mucho más que solo tener información, requiere de responsabilidad frente a los temas del conflicto.

En los procesos de análisis que se llevan a cabo en esta etapa, es importante determinar los principales temas sobre los cuales se iniciarán los diálogos, estos tendrán una estrecha vinculación con los intereses y las necesidades, lo cual se establecerá un orden al proceso, tratándose primero los temas más urgentes o los de mayor preocupación para los actores del conflicto, es decir que si se considera de mayor importancia un tema de contaminación ambiental o daño de instalaciones estos serán los primeros en entrar en la mesa de diálogo.

Todo este trabajo que se ha venido realizando hasta el momento, contribuirá en la búsqueda de redefinir el conflicto de una forma constructiva para que las partes se fijen en los intereses como eje central de negociación, lo cual evidentemente

facilitará y dinamizará el proceso ya que no entraremos en procesos de escalada del conflicto ni polarización de posiciones.

Una vez que contamos tenemos los elementos provenientes de la primera etapa, las partes en conjunto o de forma separada, deben trabajar en la búsqueda de soluciones a través del planteamiento de opciones y de las alternativas, estas dos conducentes siempre a tratar de solucionar el conflicto.

Dentro de esta etapa, considerar las opciones de soluciones, las alternativas por las cuales se puede conducir el conflicto en el caso de no encontrar un acuerdo negociado y el establecimiento del MAAN (mejor alternativa a un acuerdo negociado) resulta más que necesario. Ahora, es importante recordar, como habíamos dicho cuando abordamos el tema de la negociación, que las opciones se refieren a las posibilidades en base a las cuales se puede llegar a un acuerdo, es decir, se puede proponer por ejemplo la remediación ambiental, el uso de tecnologías adecuadas, las compensaciones económicas, etc. En cuanto a las alternativas, se aluden a que si no podemos llegar a un acuerdo negociado, ¿qué otra cosa podemos hacer?, se puede plantear una demanda judicial, un trámite administrativo o inclusive una paralización de actividades. Y finalmente, al establecer un MAAN nos referimos a pensar en que otra posibilidad podemos encontrar en caso de que ninguna de las otras alternativas planteadas tengan éxito.

Finalmente la última etapa tiene referencia al diseño e implementación del plan de acción. En esta etapa se requiere de la participación conjunta de las partes ya que habrá que tomar decisiones en conjunto por varios motivos.

Después de existir un acercamiento entre los actores estos tendrán que decidir que proceso seguir, es decir, que Método Alternativo de Solución de Conflictos es el idóneo para solucionar su caso, además decidirán quien va a hacer cada cosa, como, cuando, donde lo va a hacer, con que recursos (esto no implica obligatoriamente que sean recursos económicos), para que finalmente con todo este accionar se pueda

formalizar un acuerdo negociado o bien poner en marcha las alternativas planteadas o ejecutar el MAAN.

5.1 Esquema Metodológico para el manejo de Conflictos Socioambientales en la actividad Petrolera en el Ecuador.

Dentro de lo que significa realizar un esquema implica establecer un orden en cuanto a los temas a tratarse. Si planteamos una sistematización y un orden específico, sobretodo para los procedimientos, pasos, estrategias y metodologías a seguir en el manejo de un conflicto socioambiental, debemos considerar que lo que trataremos de hacer ahora es brindar un orden o un proceso que comúnmente sería utilizado, es decir que son los pasos que regularmente se aplicarán.

A pesar de que se pretenda dar un orden en relación a los pasos macros o generales en cuanto a la metodología, podemos considerar que estos no sufrirán muchos cambios de un conflicto a otro, aunque por alguna razón y dependiendo de cada conflicto individualizado algunos de estos grandes pasos no puedan ser ejecutados.

Posteriormente, después de tener los pasos macros en lo cuales se debe tratar de manejar una metodología para el manejo de conflictos socioambientales producidos por la actividad petrolera en el Ecuador, se deberá considerar la mayor cantidad de alternativas que puedan involucrarse dentro de estos grandes grupos para que puedan concretarse, es decir que nos referimos al desarrollo de una serie de pequeños pasos o actividades, formas, submetodologías o como se quiera llamar, al conjunto de subprocesos aplicables como estrategias y metodologías para el manejo de conflicto.

No quiere decir de ninguna manera que al establecer o tratar de categorizar a estos subprocesos que sean los únicos, sino que estos son con los que se han venido aplicando, además que no se considera como de obligatorio cumplimiento cada uno de los pasos, porque como hemos mencionado el conflicto es cambiante dentro de si mismo y es diferente uno del otro y no podemos asegurar que todos los pasos sean idóneos o se los pueda adaptar a las condiciones de todos los conflictos. La

incorporación de nuevas alternativas o subprocesos solo dependerá de la creatividad, necesidad o urgencia, ventajas, limitaciones de las personas que estén manejando el conflicto.

Finalmente hay que tomar en cuenta que cuando se aplica una herramienta, no quiere decir, que se podrá utilizar una sola durante el proceso del conflicto, se puede utilizar algunas al mismo tiempo, como por ejemplo, cuando se utilice la negociación también se puede emplear un proceso de facilitación (esto involucrado dentro de la estrategia), todo dependerá de las necesidad de cada conflicto y las posibilidades de implementar ciertas metodologías.

Para este esquema metodológico utilizaremos uno que pueda describir de forma práctica lo que implicaría la propuesta sistematizada, la cual pueda contribuir con el manejo de los conflictos socioambientales producidos por la actividad petrolera en el Ecuador.

Esquema para la intervención en el manejo de conflictos socioambientales

1.- Evaluación inicial de la situación del conflicto

OBJETIVO: COMPRENDER EL CONFLICTO.

- Recolección de información primaria y secundaria
- Análisis, procesamiento y sistematización de la información
- *Análisis del conflicto específico*
 - ° *Definición del conflicto específico*
 - ° *Tipo de Conflicto*
 - ° *Escalamiento del Conflicto*
 - ° *Actores: afectados, generadores, iniciadores y reguladores.*
Establecer criterios en cuanto a los actores: Legales, Sociales, Culturales, De Genero, Demográficos, Ambientales,

Económicos, Políticos organizacionales, Niveles de las relaciones de poder, Acceso a la información, Capacidad para la toma de decisiones, Otros)

- ° *Causas*
- ° *Hechos generadores del conflictos*
- ° *Contextos en los que se desarrolla el conflicto*
- ° *Identificar y priorizar Temas*
- ° *Valoración de intereses y necesidades*
- ° *Redefinición del Conflicto*
- ° *Presentación de información y resultados*

2.- BUSQUEDA DE SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS

OBJETIVO: explorar las opciones de solución al conflicto Y SUS ALTERNATIVAS

- Explorar opciones de solución
- Establecer las alternativas
- Establecer el MAAN

3.- Diseño e Implementación del Plan de Acción

OBJETIVO: Diseñar y ejecutar un plan para la resolución de conflictos privilegiando el uso de MASC

- *Acciones de preparación de actores*
 - ° Acercamiento con los actores
 - ° Negociar el proceso a seguir
 - ° *¿Quién?*
 - ° *¿Cómo?*
 - ° *¿Cuándo?*
 - ° *¿Con que recursos?*

- ° *¿Dónde?*
- ° *Formalización de acuerdo o puesta en marcha de las alternativas*

Conclusiones

- Después de este trabajo de investigación se concluye que la actividad Petrolera en el Ecuador es un generador constante de conflictos socioambientales, como se ha demostrado a través de los tres casos de estudio y por la realidad vivida en nuestro país. Esta generación de conflictos se debe a las deficientes políticas públicas existentes y generadas alrededor de este tema, además de los distintos y grandes intereses de los actores involucrados, las marcadas asimetrías en las relaciones de poder entre las partes en conflicto, la polarización de las posiciones y la poca cultura de diálogo frente a una actividad que es de vital importancia para la economía del país.
- En cuanto a las metodologías o herramientas utilizadas es evidente que hasta el momento, en los casos más sonados la tendencia única ha sido la de judicializar los casos, lo que hasta el momento no ha dado resultados satisfactorios a ninguna de las partes involucradas en un conflicto socioambiental en la actividad petrolera, además que no se tiene una visión clara de cómo ni cuando terminarán, posiblemente exista un ganador y un perdedor en el juicio, pero de acuerdo con los estudios y análisis en este trabajo de investigación, una vez concluidos, no podremos afirmar que el conflicto se haya resuelto porque perdurarán las enemistades y malas relaciones entre las partes lo que sin duda se convertirá en un foco constante de nuevos conflictos.

Al realizar una evaluación de los resultados provenientes de la judicialización de los conflictos es posible que las conclusiones presentadas sean ratificadas, es entonces donde además se dirá que la vía formal a través de un juicio no es en determinado punto del conflicto la herramienta más idónea para resolverlo, además tomando en cuenta los altos costos económicos y emocionales que implican afrontar un juicio que tardará muchos años en resolverse y el desgaste injustificable de las relaciones de aquellas personas que en los posterior tendrán que seguir conviviendo juntos e involucrados directa o indirectamente en el desarrollo de esta actividad..

Adicionalmente podemos mencionar que la causa de que a los conflictos se los haya judicializado es que no se han puesto sobre la mesa otras alternativas para resolver conflictos donde el eje central de estas sean los procesos de diálogo para la toma de decisiones conducentes a la búsqueda de acuerdos para la resolución de los conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera.

- Es importante apreciar que dentro de la búsqueda de nuevas herramientas para la soluciones, existen ciertos acercamientos a lo que sería un proceso de diálogo por parte de ciertos actores como ONGs, compañías petroleras, gobiernos locales, organizaciones indígenas, lamentablemente hay que decir que estos esfuerzos aún se los realiza de forma parcial, sin una agenda y brújula que oriente al mismo, ya que los contextos en los que se desarrolla esta actividad es de mucha presión y donde se juegan muchos intereses de parte de los actores involucrados, sin embargo este ya es un primer paso para la búsqueda de acuerdos a través de una vía no adversarial.
- En cuanto a la utilización de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos se pueden concluir varias cosas cuando los enfrentamos a este tipo de conflictos. Primero no podemos discutir sus procedimientos, ni objetivos, características, ni idoneidad de los mismos, ya que en su aplicación depende mucho de las condiciones del conflicto, como son los temas políticos, sociales, legales, etc.

Es cierto que si han sido utilizados los MASC en conflictos socioambientales por actividad petrolera, tanto en casos de renombre como los suscitados en el día a día, en conflictos menores no difundidos ampliamente, sobretudo los métodos que se utilizan son la negociación, conciliación, mediación y en algunos casos la facilitación, siendo en este punto donde se deben considerar las ventajas y desventajas de aplicación de los MASC, la validez, cumplimiento, eficacia, legalidad y legitimidad de los acuerdos, para así determinar si es una buena alternativa el aplicarlos.

Después de efectuar estos análisis, podemos concluir categóricamente que los MASC son perfectamente aplicables en casos de conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera. Por sus características deberían ser la primera herramienta a utilizar, a manera de prevención en los casos de conflictos, es decir, que sí se los puede utilizar. Lamentablemente hasta el momento no se los ha aplicado en su real y completa dimensión; cuando esta práctica se generalice se podrá obtener buenos resultados, contribuyendo con los procesos de diálogos en búsqueda de acuerdos y para implantar una cultura de paz en nuestro país.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que los MASC tienen algunas dificultades en su aplicación y con la cuales hay que tener mucho cuidado, primero por las condiciones en las que se los debe utilizar, no resulta lógico, ni ético, poner en una mesa de diálogo a partes con una notable asimetría en sus relaciones de poder, donde una de las partes, generalmente las comunidades, no cuentan con la información necesaria ni el conocimiento en temas legales, técnicos, etc., lo cual incidirá mucho en los niveles de toma de decisiones, es decir que no es una decisión informada y por lo tanto un poderoso y hábil negociador al frente, podría condicionar o inducir a tomar decisiones, lo cual evidentemente rompería con los mandatos de los MASC.

Esto no quiere decir que no sean medios idóneos, sino que hay que saber cuando utilizarlos y que indudablemente antes de esto, sobretudo las partes más débiles deben ser motivo de procesos de fortalecimiento organizacional y capacitación comunitaria, con el objetivo de nivelar las relaciones de poder, aunque no se dé en una forma total, para que estos procesos alternativos realmente valgan la pena.

Por otra parte es importante validar la calidad de los acuerdos logrados a través de los MASC enfrentados a estos conflictos, ya estos acuerdos evidentemente, pueden ser mayormente internalizados y ejecutados por las partes en conflicto. Tomando en cuenta que los mismos actores son los que construirán sus acuerdos en base a la postura de ganar – ganar de los MASC, a diferencia de lo que pasa actualmente con el sentimiento de pérdida por una sentencia o dictamen en contra

dado por jueces y cortes nacionales o internacionales que hacen que lo sentenciado generalmente no se cumpla como hemos visto ya en los casos prácticos estudiados.

De lo que hay que ser concientes es que el no cumplimiento de las decisiones o acuerdos no depende solo de los métodos para resolver conflictos sino de los contextos en los que se desarrollan estos en la actividad petrolera, por lo que hay que ratificar una vez más que el manejo y resolución de estos conflictos no es simplemente aplicar una formula o una acción específica.

- Finalmente debemos concluir que es evidente que manejar y resolver conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera, no es fácil y por lo tanto no depende solo de la implementación de un modo o mecanismo, por la complejidad que estos demuestran hay que pensar en que se los debe afrontar mediante un “proceso”, entendiéndose al proceso como un grupo de acciones, estrategias, metodologías, que puedan abarcar todas las aristas o temas que se deben tratar dentro de un conflicto y del cual, dependiendo de las estrategias, habrá que decidir que método o métodos alternativos utilizar para resolverlo, siempre tomando como herramienta principal a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.

Es entonces lógico y en conclusión que aparezcan en escena otras metodologías encaminadas englobar estos “procesos” con la finalidad de dar un giro y un nuevo enfoque al manejo de conflictos socioambientales, conducido a través de la vía del diálogo.

Recomendaciones

- Para el manejo y resolución de este tipo de conflictos se recomienda la utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos: sea negociación, facilitación, mediación, conciliación. Como ya hemos analizado nos brindarán las herramientas necesarias para intervenir en estos conflictos, con mejores resultados que mediante la judicialización de los casos. Inclusive el arbitraje que tiene muchas similitudes con un juicio es un MASC que se lo puede emplear en ciertos tipos de conflictos socioambientales dentro de la actividad petrolera en el Ecuador.
- Es recomendable al momento en el que surge un conflicto socioambiental, utilizar una guía para el proceso de resolución. En el capítulo final de este trabajo hago una propuesta para ello, enfocada a brindar un orden y una agenda mínima a seguir, lo cual no quiere decir que se deben utilizar todos los pasos que ahí se encuentran, ni tampoco se la debe seguir al pie de la letra, es simplemente una guía en la cual podemos apoyarnos para manejar mejor un conflicto socioambiental.

La ventaja de este tipo de metodologías es que son muy flexibles y que se las puede moldear y aplicar de acuerdo a las necesidades personales, comunitarias y a las necesidades y urgencias que tenga el conflicto. Sin embargo, lo que siempre se debe tratar es mantener en orden al conflicto, ya que si de por sí, son complejas las situaciones a las que nos enfrentamos, no podemos nosotros complicarlas más por el desorden, de allí la importancia de establecer estrategias por lo menos básicas.

Cuando hablamos de aplicación de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, hay que tener mucho cuidado, eso son válidos y sirven para resolver este tipo de conflictos, sin embargo hay que considerar en su aplicación, los contextos en los cuales se van a desarrollar estas acciones, ya que como todos sabemos de no manejar bien estos procesos lo que podríamos causar es la ruptura de una relación

que de entrada ya esta desgastada, y que como consecuencia provocaría el alejamiento e incompatibilidad absolutos de las partes para afrontar una mesa de diálogo.

- A pesar que hasta este momento no se lo ha mencionado, es importante recomendar a nivel del Estado o de las ONGs, la creación de centros de mediación especializados en este tipo de conflictos, ya que como hemos visto además de no tener una real cultura de diálogo, no existen muchos espacios con el suficiente peso institucional a través de los cuales se fomente esta práctica, ni lugares donde aquellos involucrados en conflictos puedan acudir en búsqueda de asistencia especializada en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos con la finalidad de resolverlos.
- Es importante considerar como recomendación la posibilidad de invitar a los representantes de las comunidades a participar de una forma activa en los procesos de licitación y adjudicación de bloques petroleros, ya que esta actividad conjuntamente con los procesos de consulta previa podría actuar como acciones preventivas al surgimiento de conflictos socioambientales.

Dentro de esta misma línea resulta prudente y estratégico dotar de herramientas e insumos (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos) a las comunidades, a través de procesos de capacitación y fortalecimiento para asumir de forma activa y participativa esta serie de acciones que tanto a niveles de prevención como de manejo de conflictos, es decir buscar procesos de diálogo sustentables durante todas las fases de producción petrolera.

- Finalmente, es importante recomendar que aquellas personas que tengan la oportunidad o deseen intervenir en esta rama de trabajo deben asumir una posición y una actitud extremadamente responsable, con criterios claros, con conocimiento de la materia de la que se esta tratando, ya que bajo estos conflictos existen temas muy delicados e intereses difíciles de manejar, tanto de parte de las comunidades indígenas como de las petroleras y el Estado. Además de ser una

realidad dura y complicada desde el tema social y ambiental, no hay que desconocer nunca la necesidad que el Ecuador tiene del petróleo.

Bibliografía.

Libros:

- FISHER Roger y URY William. “SI, de acuerdo, como negociar sin ceder”, Grupo Editorial Norma, Segunda Edición, 1993, Bogotá – Colombia.
- VINYATAMA Camp, Eduard, “Aprender Mediación”, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2003, Buenos Aires – Argentina.
- FONTAINE Guillaume, Editor, “Petróleo y Desarrollo Sostenible en Ecuador, Las Reglas del Juego”, FLACSO Sede Ecuador, Primera Edición, septiembre 2003, Quito – Ecuador.
- FONTAINE Guillaume, Editor, “Petróleo y Desarrollo Sostenible en Ecuador, Las Apuestas”, FLACSO Sede Ecuador, Primera Edición, octubre 2004, Quito – Ecuador.
- FIERRO Carlos, “Petróleo en la Amazonía: Aprendiendo a dialogar”, Fundación Futuro Latinoamericano FFLA, mayo 2004, Quito – Ecuador.
- MELO Mario y SOTOMAYOR Juana, Editores, “TARIMIAT, Firms en nuestro Territorio FIPSE vs. ARCO”, Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES y Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, Segunda Edición corregida, 2002, Quito – Ecuador
- ORTIZ T, Pablo y otros, “Marea Negra en la Amazonía, Conflictos Socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador”, Ediciones ABYA-YALA, Primera Edición, 1995, Quito – Ecuador.
- FALCONÍ Fander y GARZÓN Paulina, “Los daños ambientales de la explotación petrolera ¿Se compensan los beneficios con los costos?” Centro de Derechos Económicos y Sociales CDES, junio 1999, Quito – Ecuador.
- ORTIZ T, Pablo, Editor, “Comunidades y Conflictos Socioambientales: Experiencias y Desafíos en América Latina” Ediciones UPS, Primera Edición, 1999, Quito – Ecuador.
- ORMACHEA Choque, Iván. “Utilización de medios alternativos para la resolución de conflictos socioambientales”, Ponencia preparada para la Conferencia Electrónica FAO-FTPP-Comunidec: “Conflictos

Socioambientales: desafíos y propuestas para la gestión en América Latina”, enero – marzo, 2000, Quito – Ecuador.

- CRESPO Flores, Carlos, “Políticas Públicas, Gobierno Local y Conflictos Socioambientales”, Ponencia preparada para la Conferencia Electrónica FAO-FTPP-Comunidec: “Conflictos Socioambientales: desafíos y propuestas para la gestión en América Latina”, 15 de diciembre de 1999, Quito – Ecuador.
- FIERRO Carlos, Editor, “Capacitación para el Diálogo Tripartito”, Manual, Quito / Berlín, 2003.
- “Aspectos Jurídicos del manejo de Conflictos Ambientales”, Tesis, no se conoce el autor.
- ORTIZ T, Pablo, “Guía Metodológica para La Gestión Participativa de Conflictos Socioambientales”, Programa Bosques, Árboles y Comunidades Rurales -FTPP- y Comunidades y Desarrollo en el Ecuador -COMUNIDEC-, Ediciones ABYA-YALA.
- CENTRO de DERECHOS ECONÓMICOS y SOCIALES, CDES, “Síntesis cronológica de la situación del pueblo Kichwa en torno a la violación de sus derechos humanos”, Boletín No. 11, Octubre 2004, Quito – Ecuador.
- VINTIMILLA, Jaime, Compilador, “Los Métos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador”, Programa Regional de Justicia de Paz, Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia, 2002 – 2005, CIDES – Unión Europea.

Leyes:

- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, No. 1, del 11 de agosto de 1998, CODIFICACIÓN del 2 de Mayo de 2002
- CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO CODIFICADO, Suplemento del Registro Oficial No. 46 del 24 de junio del 2005
- CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Codificación 11, Registro Oficial Suplemento 58 de 12 de Julio del 2005.

- CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Registro Oficial Suplemento 147 de 22 de Enero de 1971, reformado al 17 de marzo de 2006
- LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997 y reformada el 25 de febrero del 2005
- LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICADA, Codificación 19, Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre de 2004
- PROYECTO DE LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD
- TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIOS DEL AMBIENTE, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 2 del 31 de marzo del 2003.
- POLÍTICAS AMBIENTALES BÁSICAS, dictadas a través de Decreto Ejecutivo No. 1589, publicado en el Registro Oficial No. 320 del 25 de julio de 2006, que se añaden en Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 2 del 31 de marzo del 2003.
- LEY DE HIDROCARBUROS, Decreto Supremo No. 2967, publicado en el Registro Oficial 711 del 15 de noviembre de 1978, y reformado al 10 de mayo de 2006
- REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR, Decreto Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 de 13 de Febrero del 2001

Internet:

http://www.uoc.edu/web/esp/articles/vinyamata/conflictos_esp.html

<http://selba.solidaragon.org/FacilitacionMediacion.htm>

http://www.aepap.org/faqpad/faqpad-resolucion_problemas.htm

<http://www.inter-mediacion.com/clinicaconf.htm>

<http://www2.udec.cl/~ivalfaro/apsique/pers/index.php?texto=horcb.html>

<http://www.psicologia-online.com/ciopa2001/actividades/06/>

<http://www.cidob.es/Catalan/Publicaciones/Afers/pinxten.html>

<http://usuarios.lycos.es/oximoron/modules.php?name=News&file=article&sid=3>

<http://www.etcetera.com.mx/2000/368/mcr368.html>

<http://www.etcetera.com.mx/2000/365/jra365.html>

http://www.ucm.es/info/cpdos/teoria_general_del_conflicto.htm

http://www.revistafuturos.info/futuros_2/conflicto_amazonia1.htm

<http://www.solomediacion.com>

Entrevistas:

- Dr. Pablo Ortiz T.
- Dr. Guillaume Fontaine
- Biólogo. Carlos Fierro
- Dr. José Serrano
- Dr. Manolo Morales
- Lcdo. José Luís Freire

Otros:

- Curso de Capacitación en metodologías de tratamiento de conflictos socioambientales, dictado por la Plataforma de Acuerdos Socioambientales PLASA, 11, 12, 13 de octubre de 2004, Quito – Ecuador.
- Íconos 21, Revista de Ciencias Sociales, “Conflictos por Petróleo y Gas Natural en la Amazonía”, FLACSO, Sede Ecuador, enero 2005
- DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Aristos 2000, Editorial Ramón Sopena S.A., Bogotá-Colombia, 1996
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Edit. Heliasta, Bogota-Colombia, 1998
- Método “Harvard” de Negociación por Principios, Artículo elaborado por Oscar Terán Terán y Publicado por la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo CLD, en 1996.